



**UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL**

**“ESTUDIO DE LAS PRUEBAS EN EL SISTEMA ACUSATORIO EN PANAMÁ
Y EL DERECHO COMPARADO”**

BERNABÉ RODRÍGUEZ MORENO

**TESIS PRESENTADA COMO UNO DE LOS REQUISITOS PARA
OBTENER EL GRADO DE MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL**

PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ

2005

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a Dios Todopoderoso, por darme la sabiduría y la perseverancia necesaria para poder alcanzar la meta propuesta

A mis padres, Paulino Rodríguez, y Paulina Moreno de Rodríguez, gracias, por brindarme su apoyo incondicional.

A mis hijos: Juan Pablo Rodríguez López, Jorge Isaac Rodríguez Moreno y Bernabé Rodríguez Peña, ustedes son mi fuente de inspiración

Bernabé....

AGRADECIMIENTO

A Dios, a mis familiares y amistades que, de una manera u otra, me motivaron para culminar este proyecto. Al Fiscal Magister Isaac Chang, mi gratitud, por sus atinadas orientaciones que de forma desinteresada me brindo en todo momento; de igual manera a los Magistrados Rafael Murgas Torraza, Margarita Centella, mi más sincero reconocimiento por el apoyo brindado como lectores de este trabajo

Bernabé....

ÍNDICE GENERAL

PÁG.

DEDICATORIA.....	ii
AGRADECIMIENTO.....	iv
INTRODUCCIÓN.....	xii
SUMARY.....	1
CAPÍTULO PRIMERO: ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN.....	4
1 1 Antecedentes	5
1 2 Planteamiento general del problema	6
1 2.1. Campo de estudio	6
1 2.2. Alcance de la investigación.. . . .	8
1 2.3 Las perspectivas de la investigación	9
1.2.4 Limitaciones de la investigación.	9
1 3 Justificación.. . . .	9
1 3.1 Importancia	9
1.3.2. Aspectos innovadores del proyecto	11
1 3.3 Verificación empírica del objeto de Estudio	12
1 4 Objetivos	13
1.4.1. Objetivos generales	13
1.4 2. Objetivos específicos	13
1.5. Hipótesis.	14
1.5 1 Variables	14
1 6. Metodología	15
1 7 Objetivo metodológico.. . . .	15
1.8. Actividades desarrolladas	15
1 9 Posibles beneficios de los resultados de la investigación	16
CAPÍTULO SEGUNDO: LA PRUEBA.....	17
2 1. Generalidades de la prueba.	18
2 2 Instrucción probatoria.	20
2 3. Clasificación de las pruebas	21
2 3.1 Pruebas nominadas e innominadas	21
2.3.2. Directas o indirectas	21
2 3.3 Históricas y críticas	22
2 3.4 Pruebas principales y contrapruebas	22
Prueba plena, perfecta o completa y semiplena, deficiente o incompleta	23
2 3.6 Pruebas tasadas y pruebas según la sana crítica	23
2 3.7. Pruebas constituidas y pruebas por constituir.	24

2.3.8.	Pruebas judiciales o procesales y extrajudicial o extraprocesales	24
2 3 9	Pruebas sumarias y pruebas en contradictorio.	24
2 4	Principios probatorios	25
2 4 1	Carácter vinculante de las normas probatorias	25
2 4 2	Las Partes tienen la carga de la afirmación de los hechos	25
2.4 3	Principio De la carga de la prueba	25
2.4 3.1.	Carga de gestión probatoria	25
2.4 3.2.	Carga de la comprobación.	26
2 4.4.	Principio de que la sentencia debe fundarse en las pruebas que recaen sobre las afirmaciones de las partes	26
2.4 4.1	Principio de reducción a escritura de medio oral	26
2 4 4 2	Principio de comunidad de la prueba	27
2 4.4.3.	Principio de unidad de la prueba	27
2 4 4 4.	Principio de igualdad de oportunidades	27
2 4.4 5	Principio de contradictorio	28
2 4 4 6	Principio de numerus apertus sobre los medios probatorios	28
2 4 4.7.	Principio de inmediación	28
2.4.4.8	Principio de legalidad de la instrucción probatoria	29
2.4 4.9.	Principio de idoneidad de la prueba	29
2.4.4.10.	Principio de la irrenunciabilidad de la prueba	29
2 5	Medios de prueba	30
2.6	Examen en conjunto de los medios probatorios.	30
2.7.	Sistema sobre medios de prueba y sobre su valoración.	31
2 8.	Medios de prueba según nuestro código judicial	31
2.8 1	Documentos	31
2 8 1 1	Documentos públicos	31
2 8.1.2.	Documento privado	31
2 8.1 3	Documentos procedentes del extranjero.	32
2 8.2.	Informes	32
2.8.3.	Confesión	32
2 8 4	Declaración de parte	32
2.8 5	Testimonios	33
2 8 6	Inspección judicial y reconstrucción	34
2.8 7.	Prueba pericial	35
2 8 8	Indicios	35
2.9	Los medios de pruebas en el proyecto del código de 1999 y la alternativa de crear el sistema acusatorio	36
2 10	La inspección y reconstrucción	38
2 11	El allanamiento	41
2.12	Pruebas testimoniales	47
2 13	Los Peritos se pueden ordenar de oficio	51
2.14	Los intérpretes son necesarios para traducir documentos	55

2 15	En los principios generales se respeta la libertad personal del imputado	57
------	--	----

CAPITULO TERCERO: EL SISTEMA ACUSATORIO Y LOS DIFERENTES PRINCIPIOS EN LA CONSTITUCIÓN DE 1972 CON SUS ACTOS REFORMATARIOS..... 59

3.1.	Precepto constitucional.. ..	60
3 2.	Principios vigente en el código judicial.. ..	61
3 2.1	Principio dispositivo	61
3 2.1 1.	Características	63
3 2 1 1 1.	Iniciativa..... ..	63
3 2 1 1 2	Tema de decisión	63
3.2 1.1 3.	Hechos	63
3 2 1 1 4.	Pruebas	63
3.2.1 1 5.	Disponibilidad del Derecho	63
3.2 2	Sistema Inquisitivo	64
3 2 2 1	Características del sistema inquisitivo	68
3 2.3	Principio inquisitivo en el código vigente	69
3.2.4.	Sistema mixto..... ..	70
3.2.4 1	Características del sistema mixto.	71
3.2.4 1 1.	Primer periodo	71
3 2 4 1 2	Segundo periodo	72

CAPITULO CUARTO: EL SISTEMA ACUSATORIO Y EL PROCESO PENAL PANAMEÑO..... 74

4 1	El sistema de enjuiciamiento penal en el Estado Panameño	75
4 2	Titularidad de la acción penal en el sistema vigente	77
4.3	Titularidad de la acción penal en el sistema acusatorio. ..	80
4 4.	Antecedentes del sistema procesal acusatorio	81
4 4.1	Aspectos esenciales históricos de la actividad probatoria	84
4 4.2.	Características históricas del proceso acusatorio. .	85
4 5	Diferencia del sistema acusatorio con el inquisitivo moderno o mixto	87
4 6	La oralidad en el procedimiento penal.	91
4 7	Carácter epistemológico del sistema acusatorio	93
4.7.1	Pruebas que identifiquen la verdad histórica..... ..	93
4 7.2.	En la averiguación previa y las Pruebas en un Enjuiciamiento penal de corte acusatorio	94
4.7.3	La <u>responsabilidad</u> en pedir pruebas	98
4.7.4.	La Prueba es la columna vertebral del proceso..... ..	99
4 7.5	Pruebas valederas o lícitas	99
4 7.6.	La prueba ilícita	100
4.7.7.	Las pruebas ilícitas pueden ser detectadas y examinadas	

	en dos momentos procesales..	101
4 7.8.	Efectos de las pruebas ilícitas	102
4 7.9.	Orden de presentación de las pruebas, según la doctrina	103
4 7.10	Anticipos de prueba o aseguramiento de pruebas prejudiciales	105
4 7 11	Pruebas de acuerdo al debido proceso en un sistema acusatorio.	106
4.7 12.	La libre valoración de la prueba en el proceso penal acusatorio.	113
4.7 13.	El estado o presunción de inocencia.. . . .	117
4.7.14.	Las presunciones en un sistema penal acusatorio	119
4.8.	Propuestas de reforma para la agilización de la justicia penal en Panamá	122
4.8.1.	Resumen de las disposiciones penales	123
4 8 2	Inicio de la acción penal	125
4 8 3	Terminación del proceso por desistimiento	126
4.8 4	Investigación de los hechos	127
4.8.5	pruebas que puede hacer uso el funcionario de instrucción para comprobar los hechos	127
4.8.6.	Pruebas prohibidas.. . . .	128
4 8 7.	Acto de audiencia	129
4 8 8.	La audiencia preliminar	131
4.8 9	Flagante delito	132
CAPÍTULO QUINTO: DERECHO COMPARADO.....		134
5 1	Doble instancia para la corte suprema de justicia en el sistema acusatorio colombiano.	135
5.2	La regulación de la doble instancia en el derecho comparado . . .	137
5 2	El control judicial en las actuaciones que afecten la libertad y el derecho a la intimidad.....	140
5.4	Jurisprudencia más reciente de la corte Europea	141
5 5.	La creación de la figura del juez de control de g	142
5 6	La introducción del principio de oportunidad	144
5.7.	La racionalización de los recursos.	145
5 8	La audiencia preparatoria	145
5.9	La oralidad del juicio.	146
5 10	El fortalecimiento del sistema de defensoría pública	148
5 11.	El impacto de la reforma en la fiscalía general de la nación colombiana dedicada a la investigación.....	149
5 12	El mismo fiscal será el que actúe en la investigación y en el juicio	151
5.13	La distribución y el fortalecimiento de la fiscalía.	151
5 14	Análisis de la organización de las fiscalías en el derecho comparado	152
5.15	La cadena de custodia de documentos.. . . .	153
5.16	La policía judicial.. . . .	154

5 17	Amnistía internacional la ejecución inminente de Abu-Ali Abdur'Rahman Estados Unidos 3 de junio de 2003	160
5.17 1	Pruebas para la condena capital..	165
5 17 2	Funciones que deben cumplir los fiscales	165
5 17 3	Pruebas documentales que desconocieron los jurados	166
5 17 4.	Preparación de testigos.	169
5.17.5	Pruebas para excluir jurados y pedir la pena capital	169
5 17.6.	Testimonios	173
5 17.7.	Opinión del juez Campbell, sobre las pruebas documentales	173
5 17 8	Testigos en la audiencia de Abdur'Rahman	177
5 17.9.	Pruebas que no se practicaron	178
CONCLUSIONES.....		194
RECOMENDACIONES.....		198
BIBLIOGRAFÍA.....		201
ANEXOS.....		210

INTRODUCCIÓN

En este trabajo titulado, "Aplicación de Las Pruebas en un Sistema Acusatorio", se han incluido los estudios comparativos de los sistemas procesales de América Latina, Europa y Estados Unidos, el Anteproyecto de Reformas al Procedimiento Penal Panameño, la diferencia del sistema acusatorio con el inquisitorio moderno o mixto; las características desde el punto de vista epistemológico, la descripción del Sistema Acusatorio en cuanto a la oralidad, aduciendo que puede producirse desde la investigación porque ya no son necesarios los autos, providencias o decretos para solicitar datos, antecedentes u otra información, ahora el fiscal puede hacerlo verbalmente, por teléfono, fax, etc. obviamente salvo cuando se trate de limitación de derechos protegidos por la Constitución, (allanamiento, grabaciones, interferencias telefónicas, de correspondencia, vigilancias, etc) que tiene que autorizar el Juez Penal correspondiente y el orden en que deben presentarse las pruebas, selección de pruebas lícitas e ilícitas, incluyendo su valoración.

El Derecho Procesal Penal tiene un carácter primordial como un estudio de una justa e imparcial administración de justicia, posee contenido técnico jurídico donde se determinan las reglas para poder llegar a la verdad discutida y dictar un derecho justamente. Es el camino que hay que seguir, un ordenamiento preestablecido de carácter técnico. Garantiza, además la defensa contra las demás personas e inclusive contra el propio Estado

El Derecho Procesal Penal tiene sus propias características que permiten diferenciarlo de otras ramas del Derecho. Cuando mencionamos las características del Derecho Procesal Penal durante su evolución podríamos citar muchos autores que clasifican con algunas diferencias unos de otros, al Derecho Procesal Penal, pero en la mayoría de los casos, esas clasificaciones corresponden a un Derecho Procesal Penal más evolucionado y en el que la clasificación de sus características se ha realizado analizando los actuales conceptos y principios fundamentales que rigen esta rama del Derecho.

Consideramos que es necesario se haga un análisis de las características de aquella evolución que se ha dado a través de los tiempos, antes de poder analizar las modernas definiciones existentes sobre las características actuales del Derecho Procesal Penal, además, se tendrá que conocer de manera indispensable acerca de las dos funciones históricas, de las cuales resultan formas universalmente conocidas como sistema acusatorio y sistema inquisitorio.

El proceso penal es uno de los aspectos que caracterizan la época de grandes transformaciones, y el deseo por el cambio que vive el mundo entero. Dos de las manifestaciones de esta presión por el cambio se traducen en la posición pragmática del proceso penal y la posición ideológica.

El carácter pragmático del Proceso Penal

En los Estados desarrollados como en los que están en proceso de desarrollo, existe un aumento dramático de los procesos que ingresan al aparato de justicia penal. Los sistemas son incapaces de resolver la cantidad de casos que se les presenta pues los recursos asignados no dan basto a la demanda, como consecuencia, surge la necesidad de racionalizar el esquema procesal.

El carácter pragmático del Proceso Penal

Este, segundo aspecto, está interesado por la efectividad de los principios que rigen el sistema, por las garantías que éste le ofrece a quienes en él participan, la efectiva protección de los Derechos Humanos, la obtención de un proceso justo, o de un debido proceso; en otras palabras, la humanización del Proceso Penal

Esta preocupación se ha consagrado a través de los distintos tratados sobre Derechos Humanos, tales como:

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
- Convenciones Americana de Derechos Humanos.
- Convención Europea de Derechos Humanos y,
- otras Constituciones y Legislaciones a nivel nacional

Las personas cuyos Derechos Humanos han sido violados tienen cada vez más la oportunidad de reivindicarse ante los tribunales constitucionales internos o ante los tribunales internacionales

El interés detrás de la posición ideológica es el de fortalecer los derechos y garantías del sindicado, mientras que el interés de la posición pragmática es simplificar los esquemas procesales y acabar con los mecanismos que obstaculicen el flujo regular de los casos, a través del sistema. Como resultado, existe una tensión entre ambas posiciones, la que genera una insatisfacción en los sistemas de procesamiento criminal en todo el mundo, tanto en Estados que hacen parte de la tradición angloamericana (common law), como en los Estados que hacen parte de la tradición Europea Continental (o Derecho Civil). Ahora es nuestro turno

Para una mejor comprensión, de nuestros lectores e investigadores u otros, la misma, la hemos estructurado en cinco capítulos, cada uno desarrolla un subtema en el siguiente orden.

Capítulo uno, Aspectos Generales de la investigación, en éste se plantean los antecedentes del Sistema Acusatorio en Panamá y el Derecho Comparado; la importancia que conlleva en sí La Prueba, cuando es o no valedera. También hacemos un planteamiento general del problema, investigado, abarca: el estudio de aplicación de Las Pruebas en Los sistemas Acusatorios, Inquisitivos, Dispositivos y Mixtos, características, la aplicación de las ciencias epistemológicas

El Capítulo dos desarrolla las Generalidades de "La Prueba". La virtud de este concepto es examinar las cualidades de una persona o cosa y su

resultado será demostrar ante la sociedad humana la verdad de una proposición referida a esa persona o cosa y a salvo su tercera acepción vulgar de justificar, manifestar y hacer patente la certeza de un hecho o es al menos excesiva la extensión que desde antaño se le ha dado en el derecho a la palabra prueba.

El Capítulo tres desarrolla El Sistema Acusatorio y los diferentes principios en la Constitución de 1972 con sus actos reformativos. En éste se trata fundamentalmente de los preceptos de la Constitución, como también los Principios Vigentes en El Código Judicial.

El Capítulo cuatro contiene el tema: El Sistema Acusatorio y el Proceso Penal Panameño Son varios los subtemas que se consideraron para esta etapa de investigación

El Capítulo cinco nos habla de: Derecho Comparado En la medida que hemos profundizado en los temas anteriores hemos incursionado en situaciones que involucran la fiel responsabilidad de los que tienen que tomar la decisión de conceder la inocencia del juzgado A este respecto existen diferentes Tratados Internacionales relativos a los Derechos Humanos que consagran expresamente el principio de la doble instancia; de ahí que nuestro país, también, le toca seguir estos tipos de procedimientos para evitar que empresa poderosas, económicamente, obtengan fallos favorables por considerar La Constitución vigente, porque los fallos de La Corte no se pueden revisar

Esperamos que con nuestro aporte, la aplicación de la justicia sea hecha a conciencia sin distingo de clase social, raza u otra sin obviar los Derechos Humanos

SUMMARY

In this titled work, "Application of the Tests in an Accusatory System", is had including the comparative studies of the procedural systems of Latin America, Europe and the United States, the First draft of Reforms to the Panamanian Penal Procedure, the difference of the accusatory system with inquisitorio modern or mixed, the characteristics from the epistemologic point of view, the description of the Accusatory System as far as the oralidad, adducing that can take place from the investigation because no longer the cars, providences or decrees to ask for data are necessary, antecedents or another information, now the public prosecutor can verbally do it, by telephone, fax, telephone etc obvious except for when it is limitation of rights protected by the Constitution, (levelling, recordings, interferences, of correspondence, monitoring, etc.) that it must authorize Judge corresponding Penal and the order in which the tests must appear, selection of tests you bid and illicit, including its valuation

The Penal Procedural Right has a fundamental character as a study of a joust and impartial administration of justice, has legal technical content where the rules are determined to be able to arrive at the discussed truth and to dictate a right exactly. It is the way that there is to follow, a pre-established ordering of technical character. It guarantees, in addition the defense against the other people and including against the own State.

The Penal Procedural Right has its own characteristics that allow to differentiate it from other branches of the Right. When we mentioned the characteristics of the Penal Procedural Right during its evolution we could mention many authors whom they classify with some differences of others, to the Penal Procedural Right, but in most of the cases, those classifications they correspond more to evolved a Penal Procedural Right and in which the classification of its characteristics has been made analyzing the present concepts and fundamental principles that they govern this branch of the Right.

We considered that it is necessary becomes an analysis of the characteristics of that evolution that has occurred through the times, before being able to analyze the modern existing definitions on the present characteristics of the Penal Procedural Right; in addition, it will have to know indispensable way about the two historical functions, from which are well-known forms universally like accusatory system and system inquisitorio

The penal process is one of the aspects that characterize the time of great transformations, and desire by the change that lives the entire world. Two of the manifestations of this pressure by the change are translated in the pragmatic position of the penal process and the ideological position

The pragmatic character of the Penal Process

In the States developed like in which they are in development process, a dramatic increase of the processes exists that enter the apparatus of penal justice. The systems are incapable to solve the amount of cases that appears to them because the assigned resources do not give coarse the demand, like consequence, the necessity arises to rationalize the procedural scheme. This, second aspect, is interested in the effectiveness of the principles that govern the system; by the guarantees that this one offers to him to those who in him participates, the effective protection of the Human rights, the obtaining of a right process, or a had process, in other words, the humanization of the Penal Process.

This preoccupation has been devoted through different treaties on Human rights, such as:

- Pact the International of Civil and Political Rights
- Conventions American of Human rights.
- European Convention of Human rights and,
- other Constitutions and Legislations at national level.

The people whose Human rights have been violated have the opportunity more and more to vindicate themselves before the internal constitutional courts or the international courts.

Interest behind position ideological is the one to fortify rights and guarantees of syndicate, whereas the interest of the pragmatic position is to simplify the procedural schemes and to end the mechanisms that prevent the regular flow of the cases, through the system. Like result, a tension between both positions, the one that a dissatisfaction anywhere in the world generates in the systems of criminal processing, as much in States exists that are part of the Anglo-American tradition (common law), like in the States that are part of the Continental European tradition (or Straight Civil). Now it is our turn.

For one better understanding, of our readers and investigators or others, the same one, we have structured it in five chapters, each one develops a subsubject in the following order.

Chapter one, General Aspects of the investigation, in this one the antecedents of the Accusatory System in Panama and the Compared Right consider, the importance that entails in himself the Test, when she is or not valid. Also we make an exposition general of the problem, investigated, includes. the study of application of the Tests in the Accusatory, Inquisitive systems, Devices and Compounds, characteristics, the application of epistemological sciences.

Chapter two develops the Majorities of "the Test". The virtue of this

concept is to examine the qualities of a person or thing and its result will be to demonstrate before the human society the truth of a referred proposal to that person or thing and out of danger his third vulgar meaning to justify, to show and to make patent the certainty of a fact or is at least excessive the extension that from long ago has occurred in the right to the word proves.

The Chapter three develops The Accusatory System and the different principles in the Constitution of 1972 with its reformatory acts. In this treats fundamentally of the precepts of the Constitution, as also the Principles In force in The Judicial Code

Chapter four contains the subject The Accusatory System and the Panamanian Penal Process The subsubjects are several that were considered for this stage of investigation.

The Chapter five speaks us of: Right Compared. In the measure that we have deepened in the previous themes we have entered in situations that involve the faithful responsibility of the ones that have to decide to grant the innocence of the court. To this respect different International Treaties they exist relating to the Human Rights that consecrate explicitly the principle of the double instance, For that reason our country, also, touches him to continue these types of procedures to avoid that powerful business, economically, they obtain favorable failures by consider The Constitution in force, because the failures of The Cut cannot be revised

We expect that with ours contribute, the application of the justice be fact conscientiously without restriction of social class, race or another without avoiding the Human Rights.

CAPÍTULO PRIMERO:
ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. ANTECEDENTES

En 1994 se realizó un estudio comparativo de los sistemas procesales en América Latina, España y Portugal con motivo de las XIV Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, llegando a la conclusión que el sistema procesal penal dominante es el principio inquisitorio. Esta situación no sólo es preocupante, considera los tratadistas en derecho penal, si no que es además, triste y desalentador.

Las nuevas orientaciones que rigen el proceso penal de nuestros días ponen de manifiesto la necesidad de diseñar un proceso penal eficaz y garantista, de modo que el Derecho Penal no sea letra muerta y el responsable de la infracción penal reciba la sanción que su actuar merece, sin dejar de lado los derechos y garantías que el Estado debe respetar para llegar a la sentencia correspondiente.

La importancia que conlleva en sí la prueba, cuándo es o no valedera, cómo se le presenta y en qué orden. Esto nos servirá para reflexionar sobre el papel que juega la llamada prueba dentro de un proceso, redescubriendo que su papel fundamental es dar certeza acerca de la verdad de una proposición, siendo un medio de verificación de las afirmaciones que los litigantes formulan en el juicio y que de ella va a depender el convencimiento al que llegue el Tribunal respectivo para emitir el fallo; pero no debemos olvidar que la finalidad

de la prueba en el Sistema Acusatorio no es sólo llegar a descubrir la verdad, sino hacerlo, garantizando, los derechos del ciudadano.

En el Procedimiento Acusatorio, el Estado tiene la carga de La Prueba, y se rige por la oralidad del procedimiento, la igualdad de las partes, y la publicidad del proceso, es un ideal al que debe aspirar un sistema de justicia penal, con lo que se garantiza que Las Pruebas dentro de un Sistema Acusatorio Penal, cumpla en forma razonable con sus dos finalidades básicas: proteger, por una parte, a la sociedad del delito, lo cual es ampliamente conocido y por otra, al acusado, frente a los excesos de persecución.

1.2. PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA

1.2.1. Campo de Estudio

Abarca el estudio de aplicación de Las Pruebas en los sistemas acusatorios, inquisitivos, dispositivos y mixtos, características, la aplicación de las ciencia epistemológica.

En la actualidad se estudia el procedimiento de la aplicación de las pruebas en los procesos penales desde el punto de vista del principio de la verdad histórica, la averiguación previa y el juzgador en el proceso penal, las diligencias pertinentes que propongan el defensor, el inculpado, la víctima o el ofendido, con diferentes fines que cada uno demuestre en el proceso

En todo caso, con la investigación se procurará el conocimiento de la verdad sobre los hechos constitutivos del delito y la responsabilidad de los autores, recabar y desahogar con diligencia las pruebas sobre los hechos, la participación delictuosa y otros puntos sujetos al procedimiento, que sean pertinentes para establecer la verdad de acuerdo a la actuación dentro del principio de legalidad y buena fe de investigador y el juzgador

En este sentido y a través de las pruebas, determinar sin duda, la verdad; pero se trata de una verdad controlada en cuanto a su método de adquisición, mediada por el principio de presunción de inocencia, pero al mismo tiempo más confiable.

Es muy importante determinar la vinculación entre la búsqueda de la verdad histórica y el aniquilamiento de las garantías individuales, que el Estado procure la honestidad, donde estén equilibradas las investigaciones, en donde el Derecho Penal sea para reducir la violencia en la sociedad y no de agravarla.

Analizar los Proyectos de Ley de 1998 y 1999, y el Derecho Comparado, que permita, determinar los pasos necesarios para un enjuiciamiento penal de corte acusatorio que fortalezca la protección, a la libertad personal, y que la sociedad comprenda y no permita que un juicio inicie como una violación a la libertad individual

1.2.2. Alcance de la Investigación

La investigación procura demostrar lo fidedigno de la actividad probatoria en el Proceso Penal, especialmente, la práctica de pruebas en el sistema acusatorio, insiste por concentrar toda la actividad probatoria en el juicio oral, de forma que el juzgador pueda apreciar en persona y de forma directa los diversos elementos probatorios que deben ser considerados en el momento de dictar la sentencia. Hacer un breve análisis y procedimiento de aplicación de las pruebas comparando los sistemas dispositivo, inquisitivo en Panamá y el Derecho Comparado. Conocer los fundamentos constitucionales, por ejemplo, los señalados en el artículo 22 y 212 de la Constitución de 1972 con sus actos reformatorios de 1978, 1983, 1992 y 1993; el fundamento en los códigos vigentes y futuras reformas. Conocer el carácter epistemológico del Sistema Acusatorio, la verdad histórica y la averiguación previa, el procedimiento en el enjuiciamiento penal de corte acusatorio, la responsabilidad en pedir pruebas como la columna vertebral del proceso, y identificando las valederas o lícitas y las ilícitas. Examinar los dos momentos procesales que permiten la valoración de las pruebas en la audiencia, para que el Juez tenga la convicción necesaria y sin violar las garantías fundamentales, dicte una sentencia conforme al debido proceso

1.2.3. Las Perspectivas de la Investigación

La investigación tiene como finalidad dar a conocer la actividad probatoria en el Proceso Penal, especialmente la práctica de pruebas en el sistema acusatorio, insistiendo en concentrar toda la actividad probatoria en el juicio oral, de forma que el juzgador pueda apreciar en persona y de forma directa los diversos elementos probatorios que deben ser propios en el momento de dictar la sentencia, respetando las garantías fundamentales y el debido proceso que señala la Constitución, vigente

1.2.4. Limitaciones de la Investigación

En Panamá no se ha implantado el sistema acusatorio, sólo existen dos proyectos de modelos de estudio hechos por los juristas Doctor Carlos Muñoz Pope (#) y la Dra. Aura Emérta de Villaláz, y que en la actualidad se discute la Comisión de Estado nombrada por Órgano Ejecutivo, por tanto, se tiene que recurrir al Derecho Comparado por Internet para obtener la información bibliográfica y la experiencia de aquellos Estados, tanto de Europa como de Norte, Centro y Sur América, que han implantado el Sistema Acusatorio

1.3. JUSTIFICACIÓN

1.3.1. Importancia

Este estudio se centrará en señalar y analizar lineamientos específicos sobre las implicaciones de un aspecto tan cuestionado como importante, sobre

la implantación del Sistema Acusatorio, la Valoración de las Pruebas, que hoy es el fundamento de la sentencia y como lo afirma el Dr. José García Falconí , (2002), en su obra Manual de Práctica Procesal Penal, " ..el Tribunal Penal no sólo debe afirmar sino convencer de sus conclusiones..."

En el análisis de esta tesis, que conlleva en sí, la aplicación de la Prueba en el Sistema Acusatorio, cuándo es valedera y cuándo no, cómo se presenta y en qué orden; todo esto, nos servirá para reflexionar sobre el papel que juega la llamada prueba dentro de un proceso, redescubriendo que su papel fundamental es dar certeza acerca de la verdad de una proposición, siendo un medio de verificación de las afirmaciones que los litigantes formulan en el juicio y que de ella va a depender el convencimiento al que llegue el Tribunal respectivo para emitir el fallo; pero no debe olvidarse que la finalidad de la prueba en el sistema acusatorio no es sólo llegar a descubrir la verdad, sino hacerlo garantizando los derechos del ciudadano.

Es aquí, justamente, la gran responsabilidad en pedir la prueba, ordenarla, practicarla e incorporarla en forma correcta dentro de un proceso porque solamente es a través de este instrumento científico y jurídico del que se deriva la necesidad de la actividad probatoria, es que vamos a conseguir mostrar la verdad procesa dentro del juicio oral, en base a la confrontación de todas las pruebas que se presentaren, para que al final el tribunal llegue a un convencimiento y emita su resolución plenamente fundada

Este estudio que nos hemos propuesto realizar, veremos que La Prueba aparte de ser la columna vertebral del proceso, es un medio que correctamente manejado trae como consecuencia la justa aplicación de la ley y la realización misma de la administración de justicia porque sus resoluciones van a estar apegadas a una verdad que conocieron y palparon no sólo los involucrados sino también los encargados de administrar justicia, pudiendo analizarla, criticarla y confrontarla para descubrir así, cuál es realmente la verdad procesal.

Con la nueva modalidad que implica la Prueba en el Sistema Acusatorio, veremos, también, que hay una mayor libertad en los medios probatorios para la búsqueda de la verdad, pero esta libertad como dicen los tratadistas, debe ceder ante el principio esencial y básico de la limitación de los medios de prueba en homenaje al concepto de dignidad de la persona y sus derechos fundamentales, esto se refiere a la necesidad de imponer criterios de limitación con fin de garantía, que tiene que ver esencialmente con el debido proceso y los derechos fundamentales de los intervinientes y de terceros en el proceso

1.3.2. Aspectos Innovadores del Proyecto

Entre esos está. comprender el procedimiento de las pruebas en el sistema acusatorio, tomando en cuenta las garantías del debido proceso; caso contrario, la actuación adolece de nulidad, la idea no es la de amparar al delincuente o impedir la investigación, como muchos lo pueden tomar, la idea es, promover una investigación justa, imparcial, sin condenar al sospechoso

antes de averiguar la realidad de los hechos

Habrá agilidad en la investigación, no es necesario hacer por escritos los autos, providencias para solicitar pruebas, datos, antecedentes u otra información. El fiscal puede hacerlo verbalmente, por tele fax etc recabar pruebas, y con orden del juez, hacer los allanamientos, grabaciones, interferencias telefónicas, de correspondencia, vigilancias, etc

En unos de sus aspectos innovadores de la investigación se pretende señalar la forma como se recogen y analizan las pruebas testimoniales y peritos, atacar no lo manifestado por el testigo o perito sino su credibilidad, ello involucra su experiencia, sus antecedentes ético profesionales, su desempeño en el pasado y en la actualidad, con el fin de demostrar que se trata de un testigo que merece o no credibilidad

Quien presenta al testigo, primero lo venda ante el tribunal, que trabaje sobre su credibilidad y luego sobre los hechos, en cuanto al contra interrogatorio sobre los hechos, generalmente las preguntas formuladas exigen respuestas sumamente concretas, de sí o no, para no darle mayor opción al testigo de que se ponga a explicar las cosas

1.3.3. Verificación Empírica del Objeto de Estudio

Los procedimientos de la aplicación de Las Pruebas en los Sistemas

Inquisitivos, Dispositivos, también, lo llaman mixto, tanto los funcionarios del Órgano Judicial, del Ministerio público, los medios de comunicación y la sociedad en general consideran que dichos sistemas que están imperando en la administración de justicia en la actualidad no resuelven la crisis de la misma, por tanto, es de urgencia la necesidad de cambiar radicalmente los sistemas presentes y luego reemplazarlos por el Sistema Acusatorio con su nueva modalidad de aplicación de pruebas, que según experiencia en otros estados que ya lo han implantado, resuelve de manera más rápida la aplicación de la justicia penal.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivos Generales

- Analizar los procedimientos de la aplicación de Las Pruebas en el Sistema Acusatorio, comparándolos con el inquisitivo y dispositivo en el derecho vigente y el comparado.
- Conocer el debido proceso que señala la Constitución y las leyes vigentes en relación con los Sistemas Inquisitivos y Dispositivos en Derecho Panameño

1.4.2. Objetivos Específicos

- Señalar los procedimientos de ejecución de Las Pruebas en el Sistema Acusatorio

- Determinar el orden de presentación de Las Pruebas en el Sistema Acusatorio según la doctrina.
- Identificar el procedimiento de aplicación de Las Pruebas en los Sistemas Inquisitivos y Dispositivos.
- Identificar el sistema recomendable con su aplicación de Pruebas en el derecho y la sociedad panameña.

1.5. HIPÓTESIS

Nuestra hipótesis plantea lo siguiente:

- Con la implantación en la legislación vigente del Sistema Acusatorio, la aplicación de justicia será más rápida.
- La aplicación de Las Pruebas en el sistema acusatorio da mayor garantía a los acusados por delitos penales.
- La valoración de Las Pruebas en el juicio oral del Sistema Acusatorio permite al Juez presenciar y examinar directamente a los medios de Pruebas.

1.5.1. Variables

- La aplicación de justicia es más lenta en los Sistemas Inquisitivos, Dispositivos o Mixto en la legislación vigente.
- La aplicación de Las Pruebas en los Sistemas Inquisitivos o Dispositivos son menos garantistas que en el Sistema Acusatorio
- La valorización de Las Pruebas en los Sistemas Mixtos

(Inquisitivos y Dispositivos) no reúne las garantías fundamentales para el procesado

1.6. METODOLOGÍA

Para la realización de este estudio, se utilizarán, preferentemente, los métodos descriptivos, comparativos y analíticos especificando las propiedades más importantes de los medios de Pruebas en los diferentes Sistemas Inquisitivos, Dispositivos y Acusatorio

Para lograr la información necesaria se recurre a resúmenes bibliográficos, consulta de jurisprudencia, información mediante la utilización de libros, códigos, la Constitución, proyectos de leyes sobre el Sistema Acusatorio, leyes, decretos, reglamentos, sentencias de La Corte Suprema de Justicia tanto panameña como de otros países, y la información por Internet del derecho comparado.

1.7. OBJETIVO METODOLÓGICO

Describir a través del análisis y de la interpretación, los procedimientos de aplicación de Pruebas en los Sistemas Acusatorio, Inquisitivo y Dispositivo en la Legislación Panameña y el Derecho Comparado

1.8. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se ha consultado por Internet la aplicación de Pruebas en el Sistema Acusatorios en la mayoría de los países: Centro, Norte y sur América, al igual

CAPÍTULO SEGUNDO:

LA PRUEBA

que lo sistemas europeos. Se han efectuado recopilaciones de sentencias de diferentes Estados que sirvieron de guía para desarrollar los diferentes argumentos que presentamos en esta investigación, además del análisis e interpretación de los proyectos de leyes, leyes procesales vigentes de Panamá, el Derecho Comparado y diferentes doctrinas de tratadistas.

1.9. POSIBLES BENEFICIOS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Será de gran importancia para el conocimiento de docentes, estudiantes y administrativos de las diferentes facultades de las universidades estatales de Panamá, centros regionales, universidades privadas, medios de comunicación y público en general conozcan la importancia de cambiar el Sistema de Aplicación de Pruebas dentro del principio inquisitivo vigente, por el de Aplicación de Pruebas en los juicios orales del Sistema Acusatorio; el debido proceso señalado en la Constitución y la necesidad de crear nuevas legislaciones que sirva de guía en cualquier acto o persecución que viole derechos y garantías fundamentales

2.1. GENERALIDADES DE LA PRUEBA

En torno a este punto, es suficiente mencionar lo sostenido por Jairo Parra Quijano, (2004), al manifestar que "Debe quedar claro que cuando se trata de hacer referencia a la prueba, las normas legales en la época actual devienen en residuales; por razón del método de enseñanza del llamado Derecho Probatorio no puede ser de ninguna manera la explicación solo de normas jurídicas sino que debe también abarcar las reglas de la experiencia, las reglas de la lógica, las reglas de la ciencia, la psicología, etc."

El arte del proceso es administrar Las Pruebas. En efecto al fallar, el Juez sólo debe tomar en cuenta hechos probados, salvo contadas excepciones como los hechos notorios o de conocimiento judicial. La decisión viene a recaer sobre el material fáctico invocado en la demanda y en la contestación y comprobando mediante los distintos medios de prueba aportados conforme a las normas procesales correspondientes.

El concepto de prueba lo explica Adolfo Alvarado Velloso, (2004) de la siguiente forma: "En efecto; si castizamente el verbo probar significa examinar las cualidades de una persona o cosa y su resultado es demostrar la verdad de una proposición referida a esa persona o cosa y a salvo su tercera acepción vulgar de justificar, manifestar y hacer patente la certeza de un hecho o la verdad de una cosa, con razones, con instrumentos o testigos, parece que es al menos excesiva la extensión que desde antaño se le ha dado en el derecho a la palabra prueba".

La doctrina nos muestra que hay quienes le asignan a la palabra prueba

un exacto significado científico aseveraciones incontestables, mientras en tanto que muchos otros dentro del campo del puro subjetivismo, hablan de acreditación, verificación, comprobación, búsqueda de la verdad real de certeza

De los medios de Prueba, el Juez extrae los elementos para fundar su convicción o sea es el resultado de inducir a alguien, con razones eficaces, a que abandone el que sostenía por convencimiento logrado a base de tales razones; en otras palabras, aceptar una cosa de manera tal que, racionalmente, no puede ser negada.

Las normas jurídicas supeditan la producción de sus efectos a la existencia de determinada situación, de hecho. De ahí, que la parte que afirma la existencia de un hecho al que atribuye alguna consecuencia jurídica "debe, ante todo, alegar la coincidencia de ese hecho con el presupuesto fáctico de la norma o normas invocadas en apoyo de su postura procesal.

Los hechos afirmados en la alegación, a su vez, pueden ser admitidos o negados expresamente por la otra parte. Lo que procede, entonces, es determinar que constituye Prueba. El término Prueba tiene varios sentidos, entre ellos:

a. En sentido lato, comprende todo lo que puede probarse para fines procesales, o sea todo medio que sirve para investigar y demostrar cualquier cosa o hecho. A este respecto DE Santos Víctor, (1994) considera que: "el objeto de la prueba judicial son los hechos se toma este vocablo en sentido lato, es decir, como todo lo que puede ser percibido y que no es simple actividad

abstracta o idea pura (como puede serlo, el alma la bondad) y no en su sentido literal, ni mucho menos reducidos a sucesos o acontecimientos”.

b. Dentro del contexto jurídico procesal, constituye Prueba todos los medios o elementos que sirven para comprobar en el proceso. Así, se habla de prueba testimonial, prueba pericial, medios científicos, etc. Debe descartarse, como finalidad de la actividad probatoria, la obtención de la denominada verdad real o material; aunque, pues, es el objetivo ideal en todo proceso.

2.2. INSTRUCCIÓN PROBATORIA

Se entiende por instrucción probatoria la fase del proceso en la cual se aducen, admiten, practican e incorporan al proceso distintos elementos de prueba. El Juez en nuestro sistema, no puede inquirir libremente respecto a los hechos que suscitaron la litis; ha de referirse a los hechos controvertidos o relacionados, directa o indirectamente con dichos hechos y sujetarse al minucioso ordenamiento legal, salvo que se trate de hechos que afecten el orden público.

Según Adolfo Alvarado Velloso (2004), con relación a la admisibilidad y eficacia procesal de las pruebas irregulares considera que “Si La Prueba se obtuviera de forma ilícita, pero sin afectar tales derechos fundamentales, sería admisible y desplegaría todos sus efectos”. Se admite, por tanto, la validez y eficacia de la prueba incorporada al proceso de forma irregular o ilegal sin

vulneración de derechos fundamentales. Con este razonamiento se concluye que no existe ningún obstáculo en admitir en el proceso penal una prueba cuando, por ejemplo el derecho violado sea el de propiedad. Esta tesis no es compartida por la opinión de una parte de la doctrina, porque considera que la Constitución protege el derecho de la prueba legal.

2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS

2.3.1. PRUEBAS NOMINADAS E INNOMINADAS

Las nominadas son las que aparecen mencionadas y reguladas en la Ley. Las innominadas aquellas a las que se refiere el código cuando habla de " otro medio racional que sirva a la formación de la convicción del Juez, siempre que no estén expresamente prohibidos en la Ley, de tal forma que ni violen Derechos Humanos ni sean contrarias a la moral o al orden público "

Artículo: 813. " Los medios de prueba no previstos se diligencian aplicando por analogía las disposiciones de los que sean semejantes o, en su defecto, en la forma que establezca el juez siempre que no se afecte la moral, la libertad personal de las partes o de terceros..."

2.3.2. DIRECTAS O INDIRECTAS

Prueba directa es la que muestra por sí misma aunque en diversos grados la verdad de los hechos controvertidos. Ejemplo, la Inspección Judicial. Prueba indirecta es la que no muestra por sí misma la verdad del hecho

cuestionado, sino la de otros hechos que contribuyen a acreditar determinados hechos, como la confesión extrajudicial acreditada por testigos. Ésta toma en cuenta, la relación entre el Juez y el hecho objeto de La Prueba.

2.3.3. HISTÓRICAS Y CRÍTICAS

Las Pruebas históricas reproducen de algún modo el hecho que se trata de probar como la testimonial, ejemplo. la fotografía u otro

Mediante las pruebas críticas sólo se llega al conocimiento de ese hecho mediante análisis o inferencias deductivas o inductivas

2.3.4. PRUEBAS PRINCIPALES Y CONTRAPRUEBAS

Prueba principal es la que se refiere a las afirmaciones de las partes, y contraprueba la destinada a contradecir o desvirtuar la eficacia de las pruebas principales.

El código se refiere a la contraprueba en el artículo 1265 como sigue:

Una vez surtido el traslado de la demanda o de la reconvención en su caso, se abrirá el proceso a prueba sin necesidad de providencia, quince días después de cumplido lo anterior en cuatro períodos así:

- El primero, de cinco días improrrogables, para que éstas propongan en uno o varios escritos, todas las pruebas que estimen convenientes

- El segundo, de tres días improrrogables, que comenzará a correr el día hábil siguiente al en que se vence el anterior, para presentarlas contrapruebas
- El tercero, de tres días improrrogables, para objetar las pruebas o contrapruebas, que corre sin que haya de dictar providencia.
- El cuarto, de ocho hasta treinta días, también improrrogables, para evacuar todas las pruebas que hubiesen propuesto las partes.

2.3.5. PRUEBA PLENA, PERFECTA O COMPLETA Y SEMIPLENA, DEFICIENTE O INCOMPLETA

Prueba plena es la que deja al tribunal suficientemente instruido acerca de la verdad o falsedad de una afirmación. Ejemplo, el documento público.

Prueba semiplena es la que establece probabilidad, cierta convicción, la que por sí sola no deja al tribunal suficientemente instruido para el efecto de la sentencia. Ejemplo: el simple indicio

2.3.6. PRUEBAS TASADAS Y PRUEBAS SEGÚN LA SANA CRÍTICA

De acuerdo con el criterio de valoración, se les denomina tasadas a las valoradas a priori, por la Ley, y las de sana crítica son las valoradas conforme a la experiencia, lógica y psicología del Juez.

2.3.7. PRUEBAS CONSTITUIDAS Y PRUEBAS POR CONSTITUIR

Pruebas preconstituidas son las que se crean o elaboran, antes de cualquier proceso, anticipándose a él. Pruebas simples o constituidas son aquellas que se forman en el proceso. Las pruebas preconstituidas se incorporan al proceso, ya formadas; las pruebas simples se forman en el proceso.

2.3.8. PRUEBAS JUDICIALES O PROCESALES Y EXTRAJUDICIALES O EXTRAPROCESALES

Son Pruebas Judiciales las que se practican o aducen en el mismo proceso y Pruebas Extrajudiciales las que se forman fuera del proceso en cuestión.

2.3.9. PRUEBAS SUMARIAS Y PRUEBAS EN CONTRADICTORIO

Pruebas sumarias son aquellas que se han practicado unilateralmente sin que haya tenido oportunidad de contradictorio. Pruebas en contradictorio, como la expresión lo indica, aquellas que se han propuesto y practicado previo traslado a la parte contraria, que ha tenido la oportunidad de vigilar e invertir. Prueba sumaria es la que se produce sin solemnidades ni tramitaciones y traslado

2.4. PRINCIPIOS PROBATORIOS

2.4.1. CARÁCTER VINCULANTE DE LAS NORMAS PROBATORIAS

Las normas procesales y, de modo muy especial, las normas probatorias son imperativas y no pueden ser desconocidas por las partes, salvo norma expresa que lo autorice. A menos que la Ley lo permita, cualquier pacto o acuerdo que por anticipado entrañe modificación al contenido de las disposiciones legales es ineficaz.

2.4.2. LAS PARTES TIENEN LA CARGA DE LA AFIRMACIÓN DE LOS HECHOS

Las partes tienen la carga de la aportación del material fáctico al proceso y esa carga se canaliza mediante: a) Las afirmaciones de las partes. • b) La carga de la gestión. c) La carga de La Prueba.

2.4.3. PRINCIPIO DE LA CARGA DE LA PRUEBA

El concepto de carga de la prueba comprende dos aspectos:

2.4.3.1. Carga de Gestión Probatoria: Cada parte asume la carga de:

- a. Acompañar, aducir, proponer las pruebas que desea valerse

- b. Gestionar la citación de los testigos, el diligenciamiento de la inspección judicial y otros

2.4.3.2. Carga de la Comprobación: Cada parte asume la carga de comprobar los supuestos de hecho de las normas que le son favorables.

2.4.4. PRINCIPIO DE QUE LA SENTENCIA DEBE FUNDARSE EN LAS PRUEBAS QUE RECAEN SOBRE LAS AFIRMACIONES DE LAS PARTES

El Juez no puede reconocerle trascendencia a pruebas sobre hechos que no constituyen el objeto del proceso.

El contradictorio, requiere que el Juez funde su convicción en medios aportados en el proceso, susceptibles de contradictorio, y de revisión por el superior jerárquico en virtud de recurso.

2.4.4.1. PRINCIPIO DE REDUCCIÓN A ESCRITURA DE MEDIO ORAL

Todos los actos probatorios, aunque se hubieran realizado ante el Juez, deben reducirse a escrito, dejándose constancia de ello, y, si se incorporan al expediente, la sentencia debe basarse en las diligencias y actas que recogen la instrucción probatoria

2.4.4.2. PRINCIPIO DE COMUNIDAD DE LA PRUEBA

También se le conoce como principio de adquisición. Los resultados de las actividades procesales son comunes entre las partes. Cuando la actividad de una parte es perfecta y completa para producir sus efectos jurídicos estos pueden ser utilizados por la otra parte.

El Juez debe tomar en cuenta, ilimitadamente La Prueba a favor o en contra de cualquiera de las partes.

2.4.4.3. PRINCIPIO DE UNIDAD DE LA PRUEBA

Todos los elementos probatorios integran una unidad y el Juez debe analizar los medios aisladamente y comprobar hasta que punto coinciden y en qué puntos divergen; examinar la relación interna entre ellos y apreciarlos globalmente.

2.4.4.4. PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Todos los textos constitucionales y legales garantizan la igualdad de las personas ante la ley, sin que por razones de sexo, raza, nacimiento o condición social puedan existir privilegios de ninguna índole. Los funcionarios públicos velarán por la igualdad de los intervinientes en el proceso, principalmente de aquellos que por su condición económica, física o mental muestren debilidad evidente.

En el mismo sentido, el artículo de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos señala: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”

2.4.4.5. PRINCIPIO DE CONTRADICTORIO

El principio de contradictorio en la prueba es una aplicación del principio de bilateralidad de la audiencia.

La prueba debe practicarse con conocimiento del opositor, de suerte que tenga oportunidad de objetarla, una vez propuesta y de intervenir en su práctica y fiscalizarla formulando las observaciones que estime pertinentes en la fase de admisión, ejecución y valoración de la misma

2.4.4.6. PRINCIPIO DE NUMERUS APERTUS SOBRE LOS MEDIOS PROBATORIOS

El sistema procesal actual permite al Juez tomar en cuenta medios que no están expresamente determinados en la Ley, siempre que estos no vayan en contra de la moral, el orden público y la libertad personal de los implicados

2.4.4.7. PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN.

El Juez debe practicar la prueba de modo que la perciba directamente
De acuerdo al código Las Pruebas deben practicarse ante el tribunal de la causa; pero esto no se opone a la práctica de ellas por medio de Juez comisionado

2.4.4.8. PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA INSTRUCCIÓN PROBATORIA

El Juez sólo puede fundar su decisión en los elementos probatorios aportados con arreglo a los procedimientos legales. Ninguna prueba puede ser considerada como válida sin haberse practicado de conformidad con el trámite legal correspondiente.

2.4.4.9. PRINCIPIO DE IDONEIDAD DE LA PRUEBA

La Prueba debe ser conducente e idónea, a efecto de que los tribunales no practiquen pruebas innecesarias, en detrimento de la economía procesal.

2.4.4.10. PRINCIPIO DE LA IRRENUNCIABILIDAD DE LA PRUEBA

Este principio se cristaliza en las siguientes normas.

- a) Ni la prueba en general ni los medios de prueba establecidos por la Ley son renunciables por anticipado.
- b) La parte que ha propuesto una prueba no puede renunciar a ella, salvo que la parte opositora o el Juez autorice. La respectiva resolución es irrecurable

- c) La parte que haya pedido una prueba no puede renunciar sin consentimiento de la otra.
- d) La parte que haya obtenido término probatorio para la segunda instancia no podrá renunciarlo sin consentimiento de la otra.

2.5. MEDIOS DE PRUEBA

Si bien, el Código Judicial establece un sistema de *numerus apertus* sobre medios de prueba, consigna a título ilustrativo, una lista de los medios más comunes y lo hizo así con el objeto de prevenir la tendencia restrictiva de la jurisprudencia. El sistema abierto de medios de prueba, es hoy de general aceptación.

Cabe, destacar, que cualquier pacto limitativo que establezca que determinado medio, sólo puede acreditar un determinado hecho, sin que la Ley lo establezca, es ineficaz. La ineficacia de los actos jurídicos que impliquen renuncia a cualquier medio de Prueba, le viene dado por el artículo 802 del C J , que dice: “ Ni la prueba en general, ni los medios de prueba establecidos por la ley son renunciables por anticipado”.

2.6. EXAMEN EN CONJUNTO DE LOS MEDIOS PROBATORIOS

El Juez al proferir sus decisiones debe examinar aisladamente todos los medios probatorios, y además en conjunto. No basta enunciar, como así lo hace, es indispensable que los evalúe, enlace, relacione un medio con otro y que los conjugue en un conjunto.

2.7. SISTEMA SOBRE MEDIOS DE PRUEBA Y SOBRE SU VALORACIÓN

Existe una estrecha relación entre el sistema de *numerus clausus* y la prueba tasada; una relación entre el sistema de *numerus apertus* y la sana crítica.

2.8. MEDIOS DE PRUEBA SEGÚN NUESTRO CÓDIGO JUDICIAL

2.8.1. Documentos

Según el artículo 832 del Código Judicial, se configuran documentos a las escrituras, certificaciones, copias, impresos, planos, dibujos, cintas, planos, fotografías, etc. En fin, todo objeto, mueble que tenga carácter representativo o declarativo.

Los documentos pueden ser.

2.8.1.1. Documentos públicos

Son los otorgados por los funcionarios que ejercen un cargo por autoridad pública, en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones.

Se le denomina escritura pública cuando es otorgado por un notario o quien haga sus veces. El documento público se presume auténtico.

2.8.1.2. Documento privado

El código se limita a decir que es todo documento que no reúne los requisitos para ser documento público. Se entiende entonces que es el emitido

por un particular.

2.8.1.3. Documentos procedentes del extranjero

Serán estimados como prueba si se presentaren autenticados por el funcionario diplomático o consular de Panamá con funciones en el lugar de donde proceda el documento.

2.8.2. Informes

El Juez de oficio o a solicitud de parte, puede pedir informes a cualquier entidad pública o privada sobre cualquiera de los elementos que estime prudente incorporar al proceso para verificar las afirmaciones de las partes.

2.8.3. Confesión

Constituye prueba la confesión que hace la parte libre y deliberadamente ante el Juez o después de iniciado el proceso en contestación a una demanda o en cualquier otro acto procesal, (confesión judicial).

La confesión deberá ser tomada en su integridad, con las modificaciones y aclaraciones concernientes al hecho confesado, excepto cuando exista otra prueba que lo desvirtúe.

2.8.4. Declaración de parte

A petición de parte y sólo en la primera instancia, la contraparte se podrá presentar a declarar sobre el interrogatorio que en el acto de audiencia

libremente formule. Cuando se trate de personas jurídicas se citará al representante legal o al gerente o administrador. El interrogatorio se practicará en lo conducente, con arreglo a las normas sobre la prueba testimonial.

2.8.5. Testimonios

Es hábil para testificar en el proceso toda persona a quien la Ley no declare inhábil. Son inhábiles para testificar y declarar en todos los procesos:

- Los que perezcan de enajenación mental.
- Los ciegos y sordos, en los casos cuyo conocimiento depende de la vista o el oído.
- Los menores de siete años.
- Los que por cualquier otro motivo estén fuera de la razón al tiempo de declarar

El artículo 909 considera sospechosos para declarar, entre otros:

- El descendiente en favor de su ascendiente y su viceversa.
- La mujer por su marido, éste por aquélla y un hermano por otro mientras vivan bajo la misma patria potestad
- El amigo íntimo de la parte que lo presenta.
- El tutor o curador por su pupilo o menor.
- El acreedor o deudor de cualquiera de las partes

a. Testigos ausentes o impedidos

El testimonio pedido dentro del término probatorio puede recibirse por medio de un Juez comisionado, cuando el testigo por su avanzada edad, enfermedad, distancia u otro impedimento grave no pueda comparecer ante el Juez de la causa.

b. Citación de testigos

Las personas que deban declarar como testigos, serán citadas por el secretario del tribunal por medio de una boleta que expresará el día, hora y local en que deben presentarse y el objeto de la citación.

b. Examen de testigos

Antes de declarar los testigos deben prestar juramento o afirmación de no faltar a la verdad, bajo pena de perjurio.

d. Careos

Los testigos cuyas declaraciones sean contradictorias, podrán ser careados entre sí a juicio del Juez. El Juez dispondrá la forma de practicar esta diligencia.

2.8.6. Inspección judicial y reconstrucción

El Juez de oficio o a solicitud de parte puede ordenar que se realicen inspecciones a lugares, cosas, documentos, bienes, semovientes o de personas

La parte que solicita la inspección deberá indicar la materia u objeto sobre la que ha de recaer.

2.8.7. Prueba pericial

Se realiza para conocer, apreciar o evaluar algún dato o hecho de influencia en el proceso de carácter científico, técnico, artístico o práctico, que no pertenezca a la experiencia común ni a la formación específica exigida al juez

Los peritos personalmente estudiarán la materia del dictamen y estarán autorizados para solicitar aclaraciones de las partes, requerirles informes, visitar lugares y examinar bienes.

2.8.8. Indicios

Son los hechos que indican la existencia de otros hechos, pero deben estar debidamente probados en el proceso.

El valor de los indicios se mida según sea la relación que existe entre los hechos que los constituyen y los que se tratan de establecer.

El Juez podrá deducir indicios de la conducta personal de las partes y los apreciará conforme a las reglas de la sana crítica

2.9. LOS MEDIOS DE PRUEBAS EN EL PROYECTO DEL CÓDIGO DE 1999 Y LA ALTERNATIVA DE CREAR EL SISTEMA ACUSATORIO

2.9.1. Los diferentes medios de pruebas que contiene el proyecto son los mismos contenidos en el artículo 780 del Código Judicial

Artículo 205. “Son medios de prueba los documentos, la confesión, el juramento, la declaración de parte, la declaración de testigos, la inspección judicial, los dictámenes periciales, los informes, los indicios, los medios científicos y cualquier otro medio racional que sirva a la formación de la convicción del Juez, siempre que no estén expresamente prohibidos por la ley, ni violen derechos humanos, ni sean contrarios a la moral o al orden público”.

Puede, asimismo, emplearse calcos, reproducciones y fotografías de objetos, documentos y lugares.

Es permitido, para establecer si un hecho puede o no realizarse de determinado modo, proceder a la reconstrucción del mismo. Si el Juez lo considera necesario, puede procederse a su registro en forma fotográfica o electromagnética.

En caso de que así conviniera a la prueba, puede también disponerse la obtención de radiografías, radioscopias, análisis hematológicos bacteriológicos y la práctica de cualquier otro procedimiento de comprobación científica.

29.2. Verdad, se averigua a través de los medios de pruebas

Artículo 206. “El Ministerio Público y los Tribunales tienen el deber procurar la averiguación de la verdad mediante los medios de pruebas permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de este Código”.

2.9.3. Las pruebas se valoran de acuerdo a las reglas de la sana crítica

Artículo 207. “Las pruebas aportadas al proceso serán valoradas de acuerdo a las reglas de la sana crítica, no pudiendo someterse a otras limitaciones legales que no sean las expresamente previstas en este Código”.

2.9.4. Los actos que vulneren las garantías constitucionales carecen de valor probatorio

Artículo 208. “Carecen de todo valor probatorio los actos que vulneren garantías constitucionales. La ineficacia se extiende a todas aquellas pruebas que, con arreglo a las circunstancias del caso, no hubieren podido ser obtenidas sin su violación y fueran consecuencia necesaria de ella”.

2.9.5. Las pruebas tienen valor si han sido obtenidos por un medio lícito

Artículo 209. “Los medios de prueba sólo tienen valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de este código. Son inadmisibles los medios de prueba que provengan de información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, violación de domicilio, correspondencia, comunicaciones, documentos y archivos privados, o cualquier otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas y no se encuentren autorizados por la Ley”.

2.9.6. Se admiten las pruebas que se refieren directa o indirectamente al objeto de la investigación

Artículo 210. “Para que la prueba sea admisible debe referirse directa o indirectamente al objeto de la averiguación, ser útil para el descubrimiento de la verdad y apreciada según las reglas de la sana crítica. El Tribunal

podrá prescindir de la prueba cuando ésta sea aportada para acreditar un hecho notorio”.

2.9.7. Se pueden incorporar otras pruebas no señaladas en el código

Judicial que no vulneren las garantías constitucionales

Artículo 211. “Además de los medios de prueba previstos en este libro se podrán utilizar otros distintos, siempre que no supriman las garantías y derechos fundamentales de las personas y facultades y derechos del imputado. La forma de su incorporación al procedimiento se adecuará al medio de prueba más análogo de los previstos”.

2.10. LA INSPECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN

2.10.1. El Agente del Ministerio Público, será el encargado de

realizar la diligencia de registro e inspección

Artículo 212. “Durante la investigación el Agente del Ministerio Público, será el encargado de realizar la diligencia de registro e inspección de personas, lugares, cosas, rastros y otros efectos materiales que el hecho hubiere dejado y que resulten útiles para averiguar el hecho o individualizar a sus autores o partícipes.

Si el hecho hubiere dejado rastros, o no produjo efectos materiales o si éstos desaparecieron o fueron alterados, se describirá el estado existente y, en lo posible, se verificará el anterior. En caso de desaparición o alteración, se averiguará y hará constar el modo, tiempo y causa de ellas.”

2.10.2. De la diligencia de inspección y registro se levantará un

acta

Artículo 213. “De la diligencia de inspección y registro se levantará un acta que describirá detalladamente el estado de las cosas y de las personas y, cuando fuere posible, se recogerán y conservarán los elementos probatorios útiles. En la diligencia deberán constar las firmas de todos los que

en ella hayan participado”

2.10.3. No se permite ausentarse a las personas halladas en el lugar

Artículo 214. “Para realizar la inspección, se podrá ordenar que durante la diligencia no se ausenten las personas halladas en el lugar, o que comparezca inmediatamente cualquier otra. Los que desobedezcan incurrirán en la responsabilidad de los testigos, sin perjuicio de ser compelidos por la fuerza pública”.

2.10.4. El Juez o el Agente del Ministerio Público autorizan la Inspección corporal del imputado

Artículo 215. “El Juez o el Agente del Ministerio Público, cuando fuere necesario, podrá autorizar la inspección corporal del imputado, cuidando que se respete su pudor; asimismo, podrán disponer extracciones de sangre, salvo que la misma pueda ocasionarle daños a su salud

Podrá disponerse igual medida respecto de otra persona, con la misma limitación, y por absoluta necesidad si existen graves y fundados indicios de que ha participado en la comisión del hecho investigado.

Si fuere preciso, la inspección podrá practicarse con el auxilio de peritos. Al acto sólo podrá asistir una persona de confianza del examinado, quien será advertido previamente de tal derecho”.

2.10.5. El funcionario de instrucción publicará la fotografía de persona desconocida en el periódico

Artículo 216. “Si la investigación penal se realizare por causa de muerte violenta o cuando se sospecha que la persona falleció a consecuencia de un delito, el Agente del Ministerio Público deberá practicar una inspección en el lugar de los hechos y disponer el levantamiento del cadáver y el peritaje correspondiente para determinar las causas y la manera de la muerte. En caso de que el extinto fuere desconocido, se procederá a su identificación por cualquier medio técnico y científico y, si no es posible, por medio de testigos. Cuando se investigue la muerte de una persona desconocida, el

funcionario de instrucción publicará la fotografía de esa persona, con toda la información posible y oportuna en los periódicos y la televisión, 'o la descripción del extinto y otras señales cuando sea por la radio".

2.10.6. Los médicos auxilian a los investigadores en lugares que no existen médicos forenses

Artículo 217. "En los lugares donde no hubiese médico forense, el funcionario de instrucción citará a los médicos que laboran en dependencias oficiales para que, como auxiliares judiciales, practique las diligencias que él les ordene

La no comparecencia a esta citación, acarreará al culpable sanción de multa de cincuenta (50 00) balboas a ciento setenta y cinco (175.00) balboas, que le será descontada directamente de su sueldo".

2.10.7. La exhumación se realizará para identificar al cadáver y posibles causas

Artículo 218. "Si el entierro el cadáver ya hubiere tenido lugar, sin aquél requisito previo, el Juez o el Agente del Ministerio Público ordenará su exhumación, dando aviso anticipado a la persona encargada del cementerio, si lo hubiere, o las personas encargadas de atender el sitio de la exhumación, y se procederá a realizar su identificación y posibles causas de muerte utilizando todos los medios técnicos y científicos que fueren necesarios. El dictamen médico forense será tan minucioso y pormenorizado como sea posible"

2.10.8. Nunca se obligará al imputado a intervenir en el acto de reconstrucción

Artículo 219. "El Ministerio Público o el Juez podrán ordenar la reconstrucción del hecho, de acuerdo con las declaraciones recibidas u otros elementos de convicción, para comprobar si se efectuó o pudo efectuarse de modo determinado Nunca se obligará al imputado a intervenir en el acto, el que deberá practicarse un con la mayor reserva

posible para evitar la presencia de extraños”.

2.10.9. El Ministerio Público puede autorizar cualquier método científico para esclarecer hechos

Artículo 220. “Para mayor eficacia de las inspecciones y reconstrucciones, el Juez o el Ministerio Público podrá ordenar todas las operaciones y métodos técnicos y científicos convenientes para esclarecer el hecho que lo motiva”.

2.10.10. Los testigos y otros tienen que prestar juramento para actuar

Artículo 221. “Los testigos, peritos e intérpretes que fueren designados para los actos de inspección o reconstrucción deberán prestar juramento”

2.11. EL ALLANAMIENTO.

2.11.1. El allanamiento se practicarán entre las seis de la mañana y las diez de la noche; pero podrán verificarse a cualquier hora

Artículo 222. “El funcionario de instrucción puede allanar un edificio de cualquier clase, establecimiento o finca cuando haya indicio grave de que allí se encuentra el presunto imputado, efectos o instrumentos empleados para la infracción, libros, papeles, documentos o cualesquiera otros objetos que puedan servir para comprobar el hecho punible o para descubrir a sus autores y partícipes.

Tales allanamientos se practicarán entre las seis de la mañana y las diez de la noche; pero podrán verificarse a cualquier hora, en lugares en que el público tiene libre acceso en los casos de flagrante delito o cuando sea urgente practicar la diligencia o cuando el morador o su representante legal lo autorice. En todo caso, el allanamiento deberá ser decretado por el funcionario de instrucción”

2.11.2. Los allanamientos practicados en contra de lo preceptuado en los artículos del presente código son nulos

Artículo 223. “El Juez, o el Agente del Ministerio Público, procederá al allanamiento de un lugar de habitación, edificio de cualquier clase, establecimiento o finca cuando haya indicio grave de que allí se encuentra el presunto imputado, efectos o instrumentos empleados para la infracción, libros, papeles, documentos o cualesquiera otros objetos que puedan servir para comprobar el hecho punible o para descubrir a sus autores y partícipes

Tales allanamientos se practicarán entre las seis de la mañana (06:00 a.m.) y las diez de la noche (10:00 p.m.). No obstante, podrá precederse a cualquier hora cuando el morador o su representante lo autorice o en caso de urgencia.

Los allanamientos que se practiquen en contravención a lo dispuesto en este artículo son nulos”.

2.11.3. Las oficinas públicas y establecimientos privados se dará aviso a las personas a cuyo cargo estuvieren los locales

Artículo 224. “La restricción establecida en el artículo anterior no regirá para las oficinas administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo, el local de las asociaciones o cualquier otro lugar cerrado. En estos casos se dará aviso a las personas a cuyo cargo estuvieren los locales”.

2.11.4. El allanamiento tiene que tener datos precisos del acto que se va a realizar

Artículo 225. “La diligencia que ordena el allanamiento deberá contener

1. El nombre y cargo del funcionario que lo autoriza y la identificación del procedimiento en el cual se ordena
2. La determinación concreta del lugar que habrá de ser registrado
3. El motivo del allanamiento.
4. La hora y fecha en que deba practicarse la diligencia”

**2.11.5. El Juez o el Agente del Ministerio Público pedirá autorización al
respectivo agente diplomático para el registro de naves extranjeras**

Artículo 226. “Para el allanamiento y registro de casas y naves que, conforme al Derecho Internacional, gozan del beneficio de la extraterritorialidad, el Juez o el Agente del Ministerio Público pedirá autorización al respectivo agente diplomático, por oficio, en el cual le rogará que conteste dentro de veinticuatro (24) horas. Este oficio será remitido a través del Ministerio de Relaciones Exteriores

Si el agente diplomático niega su autorización o no contesta dentro del término indicado, el Juez o el Agente del Ministerio Público se abstendrá de ordenar o practicar el allanamiento, pero podrá tomar las medidas de vigilancia que se expresan en este código”.

**2.11.6. Para el registro de casas y oficinas de los cónsules el Juez o el
Agente del Ministerio Público dará aviso al agente diplomático
respectivo**

Artículo 227. “Para el registro de casas y oficinas de los cónsules el Juez o el Agente del Ministerio Público dará aviso al agente diplomático respectivo o, en su defecto, a la persona a cuyo cargo estuviere el edificio que se propone registrar.

Para el registro de naves mercantes extranjeras, el funcionario dará aviso a la persona a cuyo cargo estuviere la nave que se propone registrar”.

**2.11.7. El allanamiento se verificará después de informar al individuo
cuya casa ha de ser registrada**

Artículo 228. “Salvo los casos a que se refiere este Código, el allanamiento se verificará después de informar al individuo cuya casa ha de ser registrada y siempre que se negare a entregar, voluntariamente, a la persona que se busca, o la cosa o efecto objeto del allanamiento.

En defecto del dueño, se interrogará al arrendatario del edificio o del lugar o al encargado de su conservación o custodia o la persona que se encuentre adentro en ese momento”.

2.11.8. En el allanamiento, el funcionario adoptará las medidas de vigilancia convenientes para evitar la fuga del imputado o sospechoso

Artículo 229. “Desde el momento en que el Juez o el Agente del Ministerio Público decreten el allanamiento de cualquier edificio o lugar, adoptará las medidas de vigilancia convenientes para evitar la fuga del imputado o sospechoso o la sustracción de las armas, instrumentos, efectos del delito, libros, papeles o cualquier otra cosa objeto de la investigación”

2.11.9. El descubrimiento de un delito que no haya sido objeto directo del registro, se procederá a la investigación de oficio

Artículo 230. “Si del allanamiento resultare, casualmente, el descubrimiento de un delito que no haya sido objeto directo del registro, se procederá a levantar el acta correspondiente, siempre que el delito sea de aquellos en que se procede de oficio. El Juez o el Agente Ministerio Público procederá a retirar las pruebas correspondientes, si las hubiese”.

2.11.10. Toda vejación indebida que se cause a las personas en un allanamiento se sancionará conforme al Código Penal

Artículo 231. “En las casas que estén habitadas la diligencia se verificará sin causar a los ocupantes más molestias que las que sean indispensables para el objeto de la diligencia Toda vejación indebida que se cause a las personas se sancionará conforme al Código Penal”.

2.11.11. El incumplimiento del allanamiento formal, el funcionario puede utilizar la fuerza

Artículo 232. “Cumplidas las formalidades prescritas en los artículos anteriores se procederá al allanamiento, empleando para ello la fuerza, si fuera necesario”

2.11.12. Los objetos inventariados quedan registrados en el expediente

Artículo 233. “De los objetos que se recojan durante el allanamiento se formará todos inventario, que se agregará al expediente”

2.11.13. Las hojas deben ser enumeradas y rubricadas por funcionario

público

Artículo 234. “Los papeles o documentos se enumerarán y rubricarán en sus hojas por el Juez, o los Agentes del Ministerio Público, su Secretano y el interesado
Los demás efectos se guardarán y sellarán de modo que no puedan ser extraídos, sino por orden o en presencia de la autoridad competente”.

2.11.14. Al suspender la diligencia de allanamiento se debe dejar un

custodio de los documentos

Artículo 235. “Si los papeles que deben ser habidos se encuentran en el libro o protocolo y no puedan extraerse del sitio en que se hallaren, se hará su reconocimiento en presencia del encargado de su custodia o de otra persona autorizada por él para este efecto y se dejará constancia de cuanto convenga, pero si, para no detener el curso de las diligencias, se suspendiere el reconocimiento para continuarlo después, se custodiarán los libros o protocolos de modo que no pueda hacerse alteración alguna”.

2.11.15. El Agente del Ministerio Público comisionará para la práctica de

las diligencias fuera de la circunscripción territorial

Artículo 236. “Si los objetos que deben ser reconocidos o aprehendidos estuvieren fuera de la circunscripción territorial del Tribunal o del Agente del Ministerio Público correspondiente, éste comisionará para la práctica de las diligencias expresadas a los funcionarios competentes”

2.11.16. El Ministerio Público podrán solicitar peritos de las instituciones públicas o privadas

Artículo 237. "El Juez o el Agente del Ministerio Público podrán solicitar peritos de las instituciones públicas o privadas, para que concurran como auxiliares a coadyuvar en el mejor esclarecimiento de los hechos".

2.11.17. El Juez o el Agente del Ministerio Público podrán ordenar el registro de un vehículo

Artículo 238. "El Juez o el Agente del Ministerio Público podrán ordenar el registro de un vehículo, siempre que haya motivos suficientes para presumir que en el mismo se ocultan personas u objetos relacionados con la comisión de un hecho punible.

En esta diligencia se observará el mismo procedimiento y se cumplirán las mismas formalidades previstas para la inspección de personas".

2.11.18. El registro personal se tiene hacer por resolución o diligencia razonada

Artículo 239. "El Juez o el Agente del Ministerio Público ordenarán el registro personal por resolución o diligencia razonada, bajo pena de nulidad, siempre que haya motivos suficientes para presumir que una persona oculta en su cuerpo cosas relacionadas con un delito. Antes de proceder a la medida, podrá invitársele a exhibir el objeto de que se trate".

2.11.19. El registro personal se practicará, respetando en lo posible el pudor de las personas

Artículo 240. "Los registros personales se practicarán separadamente, respetando en lo posible el pudor de las personas. Si se hicieren sobre una mujer, serán efectuadas por otra"

2.11.20. Se ordenará secuestro de cosa que sirvan de evidencia para investigar delitos

Artículo 241. “El Juez o el Ministerio Público podrán disponer que sean recogidas y conservadas las cosas relacionadas con el delito, las sujetas a cautelación y aquellas que puedan servir de medio de prueba. Cuando sea necesario, se ordenará su secuestro”

2.12. PRUEBAS TESTIMONIALES

2.12.1. Se interrogará a toda persona que conozca los hechos

Delictivos

Artículo 242. “Se interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad”

2.12.2. Toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento

judicial y declarar la verdad

Artículo 243. “Toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial y declarar la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado, salvo las excepciones establecidas por la ley”.

2.12.3. Pueden abstenerse de declarar Las familias hasta el cuarto

grado de consanguinidad o segundo de afinidad

Artículo 244. “Podrán abstenerse de testificar en contra del imputado su cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano, sus parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, su tutor o pupilo, o la persona con quien convive en aparente matrimonio”.

2.12.4. Los Ministros de un culto, los abogados, los médicos podrán abstenerse de declarar

Artículo 245. “Podrán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en razón de su cargo, oficio o profesión, bajo pena de nulidad los Ministros de un culto admitido; los abogados, los médicos, siempre y cuando estos hechos no se refieran a la comisión de delitos, o sean relativos a la defensa de un procesado.

Sin embargo, estas personas no podrán negar el testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto, con excepción de las mencionadas en primer término.

Si el testigo invocare erróneamente ese deber con respecto a un hecho que no puede estar comprendido en este artículo, se procederá a interrogarlo”.

2.12.5. El que se niega a declarar sin excusa legal, será sancionado con privación de su libertad hasta por dos (2) días

Artículo 246. “Todo el que es citado por el funcionario de instrucción, como testigo, perito o facultativo, debe comparecer a rendir la declaración o a practicar la diligencia que se le exige. Si no lo hace o si comparece y se niega a declarar sin excusa legal, será sancionado con privación de su libertad hasta por dos (2) días cada vez que incurra en este desacato”.

2.12.6. Los miembros de la Asamblea Legislativa, Órgano Judicial, y el

Ejecutivo no están obligados a declarar. Los Obispos y directores

fuerza pública y de la Policía Técnica declaran en su residencia,

por informe escrito

Artículo 247. “No estarán obligados a comparecer el Presidente y Vice Presidente de la República; los Ministros de Estado; los miembros de la Asamblea Legislativa; el Contralor General; los directores de las instituciones autónomas; semiautónomas y descentralizadas; los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales Superiores; el Procurador General de la Nación, el Procurador

de la Administración; los Embajadores; los Magistrados del Tribunal Electoral, los Fiscales

Superiores; los Obispos, los directores de los distintos componentes de la fuerza pública y de la Policía Técnica Judicial

Según la importancia que se atribuya al testimonio, estas personas declararán en su residencia oficial o por informe escrito, en el cual expresarán que atestiguan bajo juramento. En el primer caso, no podrán ser interrogados directamente por las partes ni tratamiento especial”.

2.12.7. Cuando el testigo no resida en la sede del Tribunal se

comisionará a la autoridad del lugar de su residencia para que reciba declaración

Artículo 248. “Cuando el testigo no resida en la sede del Tribunal ni en sus proximidades, o sean difíciles los medios de transporte, de oficio, se comisionará a la autoridad del lugar de su residencia para que reciba declaración, salvo que se considere necesario hacerlo comparecer, en *razón* de la gravedad del hecho investigado y la importancia del testimonio”.

2.12.8. El Juez o el Ministerio Público, podrá ordenar la inmediata

conducción de un testigo cuando haya temor fundado de que se oculte

Artículo 249. “El Juez o el Ministerio Público, en su caso, podrá ordenar la inmediata conducción de un testigo cuando haya temor fundado de que se oculte o se niegue a comparecer. Se le tomará declaración inmediatamente”.

2.12.9. El testigo de 14 años prestará juramento ante el tribunal

Artículo 250. “Recibida la promesa o juramento de decir verdad y obtenida su identificación personal con indicación de profesión u oficio y vecindad, se interrogará al testigo sobre los hechos, materia de la investigación. Si el testigo pudiera abstenerse de declarar, se le deberá

advertir, bajo sanción de nulidad, que goza de dicha facultad, lo que se hará constar.

El testigo que haya cumplido catorce (14) años deberá prestar juramento ante el Tribunal”.

2.12.10. Las personas impedidas, serán examinadas en su domicilio

Artículo 251. “Las personas que no puedan concurrir al Tribunal o al Ministerio Público por estar físicamente impedidas, serán examinadas en su domicilio”

2.12.11. Los falsos testimonios, se compulsarán las copias pertinentes y se les remitirá al Ministerio

Artículo 252. “Si se sospechara que el testigo incurre en falso testimonios, se compulsarán las copias pertinentes y se les remitirá al Ministerio Público, para que proceda con la investigación correspondiente”

2.12.12. Se leerá la declaración íntegramente al testigo, acto en el cual puede hacer las enmiendas

Artículo 253. “Antes de cerrar la diligencia, se leerá la declaración íntegramente al testigo, acto en el cual puede hacer las enmiendas, adiciones o aclaraciones que tenga a bien, lo cual se expondrá con toda claridad al final de la declaración”.

2.12.13. Será sanciona con arresto hasta por seis (6) meses o multas, hasta de cuatro mil balboas (B/.4,000.00), a cualesquiera persona que coaccione al testigo, perito o sus familiares

Artículo 254. “Será sancionado por el agente de instrucción o el Juez de la causa, con pena de arresto hasta por seis (6) meses o multas, hasta de cuatro mil balboas (B/ 4,000 00), el imputado, sus parientes y cualesquiera otra persona que amenace, intimide o ejerza cualquier tipo de coacción sobre el testigo, perito o sus familiares”.

2.13. LOS PERITOS SE PUEDEN ORDENAR DE OFICIO

Artículo 255. “El Juez y el Agente del Ministerio Público podrán ordenar pericias, de oficio o a petición de parte, cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica”.

2.13.1. Los peritos deben ser idóneos

Artículo 256. “Los peritos deberán tener título de tales en la materia a que pertenezca el punto sobre el que han de dictaminar, siempre que la profesión, arte o técnica estén reglamentadas. En caso contrario, deberá designarse a persona de idoneidad manifiesta”.

2.13.2. El perito tendrá el deber de aceptar

Artículo 257. “El designado como perito tendrá el deber de aceptar y desempeñar fielmente el cargo, salvo que tuviere un grave impedimento. En este caso, deberá ponerlo en conocimiento del Tribunal o del Ministerio Público al ser notificado de la designación”.

2.13.3. No pueden ser peritos los menores y los incapaces

Artículo 258. “No podrán ser peritos: los menores de edad, los enfermos mentales, los que puedan abstenerse de declarar como testigos o hayan sido citados como tales, los condenados y los inhabilitados”.

2.13.4. Son causas legales de impedimento y recusación de los peritos, las establecidas para los jueces

Artículo 259. “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, son causas legales de impedimento y recusación de los peritos, las establecidas para los jueces.

El incidente será resuelto por el Juez de la causa, según corresponda”.

2.13.5. En la fase instructora, podrán designarlos peritos que se estimare indispensables

Artículo 260. "El Agente del Ministerio Público en la fase instructora, podrán designarlos peritos que se estimare indispensables; la diligencia se notificará a las partes, antes de que se inicien las pericias, bajo sanción de nulidad, a menos que haya suma urgencia o que la indagación sea extremadamente simple. En estos casos, bajo la misma sanción, se les notificará que se realiza la pericia pudiendo las partes, a sus costas, y el Ministerio Público, requerir su reproducción cuando fuere posible".

Artículo 261. "El Agente del Ministerio Público, podrá nombrar hasta dos (2) peritos".

2.13.6. Al perito se le señalará su objeto, fijará el plazo en que ha de realizarse

Artículo 262. "El funcionario que ordene la pericia señalará su objeto, fijará el plazo en que ha de realizarse y, si lo juzgare conveniente, participará personalmente en la diligencia. Podrá igualmente indicar dónde deberá efectuarse y autorizar al perito para examinar las actuaciones o asistir a determinadas diligencias judiciales".

2.13.7. Los peritos procurarán que las cosas a examinar sean en lo posible conservadas

Artículo 263. "El Juez o el Agente del Ministerio Público, y los peritos procurarán que las cosas a examinar sean en lo posible conservadas, de modo que la pericia pueda repetirse

Si fuera necesario destruir o alterar los objetos analizados o hubiere discrepancias sobre el modo de conducir las operaciones, los peritos deberán informar lo antes de proceder".

2.13.8. Los peritos practicarán conjuntamente el examen

Artículo 264. "Siempre que sea posible y conveniente, los

peritos practicarán conjuntamente el examen; deliberarán en sesión secreta, a la que sólo podrá asistir quien lo hubiere ordenado; y, si estuvieren de acuerdo, redactarán el dictamen de común acuerdo. En caso contrario, lo harán por separado”.

2.13.9. Si los informes fueren contradictorios, se podrá nombrar uno o más peritos nuevos

Artículo 265. “Si los informes fueren dubitativos, insuficientes o contradictorios, se podrá nombrar uno o más peritos nuevos, según la importancia del caso, para que los examinen y valoren o, si fuere factible y necesano, realicen otra vez la pericia, De igual modo podrán actuar los peritos propuestos por las partes, cuando hubieren sido nombrados después de efectuada la pericia”.

2.13.10. El peritaje tiene que cumplir requisitos de ley para su valor probatorio

Artículo 266. “El dictamen pericial podrá expedirse por escrito o hacerse constar en acta, y comprenderá, en cuanto fuere posible:

1. La descripción de la persona, cosa o hecho examinados, tal como hubieran sido hallados.
2. Una relación detallada de las operaciones que se practicaron y de su resultado
3. Las conclusiones que formulen los peritos, conforme a los principios de su ciencia, arte o técnica y sus respectivos fundamentos
4. La fecha en que la operación se practicó”.

2.13.11. Podrá disponerse de práctica de ejercicios caligráficos para comparación de documento

Artículo 267. “Cuando se trate de examinar o cotejar algún documento, se ordenará la presentación de escrituras de comparación, pudiendo usarse escritos privados si no hubiere dudas sobre su autenticidad. Para la obtención de ellos podrá disponerse el secuestro, salvo que su tenedor sea una persona

que deba o pueda abstenerse de declarar como testigo. También podrá disponerse la práctica de ejercicios caligráficos para su comparación”.

2.13.12. Podrá corregirse con amonestaciones verbales la negligencia, falta de buen desempeño o mala conducta de los peritos

Artículo 268. “El perito deberá guardar reserva de todo cuanto conociere con motivo de su actuación

El funcionario que hubiere dispuesto la pericia podrá corregir con amonestaciones verbales la negligencia, falta de buen desempeño o mala conducta de los peritos, y aun sustituirlos, sin perjuicio de las otras sanciones que puedan corresponder”.

2.13.13. Los Peritos tienen derecho a cobrar honorarios.

Artículo 269. “Los peritos nombrados por el Tribunal o por el Agente del Ministerio Público tendrán derecho a cobrar honorarios, a menos que tengan sueldo por cargos oficiales desempeñados en virtud de conocimientos específicos en la ciencia, arte o técnica que la pericia requiera. El perito nombrado a petición de parte podrá cobrar sus honorarios directamente de ésta o del condenado en costas”.

2.13.14. Un avalúo prudencial podrá ser variado en el curso del proceso

Artículo 270. “El Juez o el Ministerio Público en la fase instructora podrá realizar una regulación prudencial cuando no pueda establecerse por medio de peritos el valor de los bienes sustraídos o dañados o el monto de lo defraudado.

Un avalúo prudencial podrá ser variado en el curso del proceso si aparecen nuevos y mejores elementos de convicción que lo justifique”.

2.14. LOS INTÉRPRETES SON NECESARIOS PARA TRADUCIR DOCUMENTOS

Artículo 271. “Se nombrará un intérprete cuando fuere necesario traducir documentos o declaraciones al idioma castellano.

Durante la instrucción penal el deponente podrá escribir su declaración, la que se agregará al acta”.

2.14.1. A los intérpretes se les aplica el procedimiento de los peritos

Artículo 272. “En cuanto a la capacidad para ser intérprete, obligatoriedad del cargo, incompatibilidad, impedimentos, recusación, facultades y deberes, término, reserva y sanciones disciplinarias, regirán las disposiciones sobre los peritos”.

2.14.2. Los documentos, y otros elementos de convicción incorporados

al proceso podrán ser exhibidos al imputado, a los testigos y a los peritos

Artículo 273. “Los documentos, objetos y otros elementos de convicción incorporados al proceso podrán ser exhibidos al imputado, a los testigos y a los peritos para que los reconozcan o informen sobre ellos. Los elementos que tengan carácter reservado serán examinados privadamente por el Juez o Tribunal o por el Agente del Ministerio Público, según corresponda; si son útiles para la averiguación de la verdad los incorporará al proceso, resguardando la reserva sobre ellos”.

2.14.3. El Ministerio Público o el Tribunal, con comunicación previa a las

partes, podrán ordenar que se practique el reconocimiento de una persona

Artículo 274. “El Ministerio Público o el Tribunal, con comunicación previa a las partes, podrán ordenar que se practique el reconocimiento de una persona, para identificarlo o establecer que quien la menciona o alude, efectivamente la conoce o la ha visto”.

2.14.4. El interrogado debe describir a la persona de que se trata, y para que diga si la conoce o no

Artículo 275. “Antes del reconocimiento, quien haya de practicarlo será interrogado para que describa a la persona de que se trata, y para que diga si la conoce o si con anterioridad la ha visto personalmente o en imagen. El declarante prestará juramento, a excepción del imputado. Indicará, además, si después del hecho ha visto nuevamente a la persona, en qué lugar y qué circunstancia”

2.14.5. Después del interrogatorio, se pondrá a la vista del que haya de verificar el reconocimiento, junto con otras personas de aspecto físico semejante

Artículo 276. “Después del interrogatorio se pondrá a la vista del que haya de verificar el reconocimiento, junto con otras personas de aspecto físico semejante, a la que deba ser reconocida, quien elegirá colocación en la rueda en presencia de ellas o desde un punto en que no pueda ser visto, según se estime oportuno, el deponente manifestará si allí se encuentra la persona a que ha hecho referencia, invitándolo a que en caso afirmativo, la designe clara y precisamente. La diligencia se hará constar en acta, donde se consignarán todas las circunstancias útiles, incluso el nombre y domicilio de los que hubieren formado la rueda”.

2.14.6. Cada reconocimiento se practicará separadamente.

Artículo 277. “Cuando varias personas deban reconocer a una, cada reconocimiento se practicará separadamente sin que aquellas se comuniquen entre sí, pero podrá confeccionarse una sola acta. Cuando sean varias las personas a las que se deba identificar, el reconocimiento de todas podrá efectuarse en un solo acto”.

2.14.7. Se procederá a exhibir la fotografía de la persona a reconocer, junto con otras semejantes, cuando físicamente no estén presente los investigados

Artículo 278. “Sólo podrá reconocerse fotográficamente a una persona, bajo sanción de nulidad, en los siguientes casos:

1. Cuando quien deba ser reconocido no estuviere presente y no pudiere ser habido, o cuando no fuere posible el reconocimiento de persona por haberse alterado sus rasgos fisionómicos.
2. Cuando quien reconoce no tuviere la obligación legal de concurrir, o cuando no pudiere hacerlo por razones de fuerza mayor, debidamente comprobadas. En estos casos y bajo idéntica sanción, se procederá a exhibir la fotografía de la persona a reconocer, junto con otras semejantes de distintas personas de similares características fisionómicas”.

Artículo 279. “Antes del reconocimiento de una cosa, se invitará a la persona que deba verificarlo, a que la describa. En lo demás y en cuanto sea posible, regirán las reglas que anteceden”

Artículo 280. “El Tribunal y el Ministerio Público podrán requerir informes a cualquier persona o entidad pública o privada.

Los informes podrán solicitarse verbalmente o por escrito, con indicación del proceso en el cual se requiere el nombre del imputado, el lugar donde debe entregarse el informe y el plazo para presentarlo”.

2.15. EN LOS PRINCIPIOS GENERALES SE RESPETA LA LIBERTAD

PERSONAL DEL IMPUTADO

Artículo 281. “La libertad personal del imputado sólo podrá ~~ser~~ restringida de acuerdo con lo dispuesto en las previsiones constitucionales pertinentes, así como lo previsto en este Código, las que deberán ser interpretadas restrictivamente y en los casos absolutamente necesarios para asegurar el

descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley”.

Artículo 282. “El Juez o el Agente del Ministerio Público, al aplicar las medidas cautelares previstas en este Título, deberá evaluar la efectividad de cada una de ellas, en cuanto a la naturaleza, el grado de las exigencias cautelares requeridas en el caso concreto y de acuerdo a la finalidad del proceso penal

Cada medida será proporcionada a la naturaleza del hecho que la motiva y a la sanción que se estime podría ser impuesta al imputado”.

CAPITULO TERCERO:

**EL SISTEMA ACUSATORIO Y LOS DIFERENTES PRINCIPIOS EN
LA CONSTITUCIÓN DE 1972 CON SUS ACTOS
REFORMATORIOS**

El futuro para la práctica de pruebas en el sistema acusatorio insiste por concentrar toda la actividad probatoria en el juicio oral, de forma que el juzgador pueda apreciar en persona y de forma directa los diversos elementos probatorios que deben ser tenidos en el momento de dictar la sentencia.

3.1. PRECEPTO CONSTITUCIONAL

La Constitución de 1972 con sus actos reformativos en su art 22 consagra lo siguiente

"... Las personas acusadas de haber cometido un delito ~~tienen~~ tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa "

En este artículo se pone en evidencias que la prueba que sirva para fundar la condena de sujeto debe producirse en el juicio oral, pues sólo puede determinarse la culpabilidad del sujeto en el juicio público que se lleva a cabo ante el Tribunal de primera instancia.

Si el imputado en el transcurso del juicio oral, se declare culpable del delito cometido y que con base a las constancias procesales obtenidas en la instrucción sumarial se dicte la sentencia que corresponda, pero en los casos en que no haya aceptación de responsabilidad debe reproducirse en el juicio oral toda la actividad probatoria que sirva para fundar la responsabilidad del procesado, pues de lo contrario debe absolverse al mismo

Para el Profesor Carlos E. Muñoz Pope, 1999 considera que "la principal consecuencia de la presunción de inocencia que consagra el párrafo citado del

art. 22 de la Constitución, radica en imponer al ente acusador la necesidad de probar la culpabilidad del procesado, pues sólo a él le incumbe la carga de la prueba”.

Esto, no obstante, no siempre es así en nuestro ordenamiento procesal penal ya que el mismo permite una iniciativa oficiosa del tribunal de la causa cuando el mismo considere necesario practicar pruebas no pedidas por las partes (Art. 2259, num. 3 C. J.).

La actividad probatoria sólo debe desarrollarse en el juicio oral, lo que impone reconocer que no hay actividad probatoria en el sumario, ya que el mismo no está a cargo del juzgador.

La actividad del Ministerio Público no está revestida de la calidad que conllevan los actos de la autoridad judicial, por lo que debemos limitar todo lo que sea posible el valor de la instrucción sumarial

El Anteproyecto de Código Procesal Penal según el Profesor Muñoz, (1999) “limita el valor del sumario, de modo que sirve para fundar la acusación y enjuiciamiento del imputado pero no sirve para fundar la condena del mismo” A nuestro juicio, el proyecto del Código penal es una continuación del sistema mixto panameño.

3.2. PRINCIPIOS VIGENTE EN EL CÓDIGO JUDICIAL

3.2.1. PRINCIPIO DISPOSITIVO

El Doctor Pedro A Barsallo, (1998), considera que el principio dispositivo

hace referencia a. “la libertad de disposición sobre el contenido y desarrollo del proceso civil que, según algunos autores, es una emanación directa de igual libertad de que disponen las parte, ampliamente, sobre los pretendidos derechos sustanciales a particulares controvertidos”. Las partes son el sujeto activo del proceso ya que sobre ellos recae el derecho de iniciarlo y determinar su objeto, mientras que el Juez es simplemente pasivo pues sólo dirige el debate y decide la controversia. A este respecto, Jorge Fábrega (2002), sostiene con su opinión y citando a otros autores que.

“El proceso dispositivo, fijativo o determinativo, según la opinión de algunos autores consideran que se trata de una variedad especial de la sentencia constitutiva, en realidad entraña una clase autónoma. También se le conoce como sentencia determinativa, fijativo o dispositiva Calamadre la define como aquellas decisiones que el Juez pronuncia tomando como premisa mayor del silogismo, no la Ley ya formulada, sino el criterio que un conocimiento le sugiere como políticamente más adecuado a las circunstancias del caso. Por ejemplo: el art 1041 del Código Constitucional establece que, cuando se haya acordado una cláusula penal, el Juez la puede modificar equitativamente. Igualmente, en el Código del Tribunal, se establece que, respecto al pacto de cuota litis, el Juez la puede modificar equitativamente”

El artículo 991 del Código Judicial sienta claramente el mencionado principio cuando establece que: “La sentencia deberá estar en consonancia con las pretensiones aducidas en la demanda y con las excepciones que aparezcan probadas”. Igualmente el artículo 475 del Código Judicial señala:

Artículo 475. “Que la decisión debe recaer sobre la cosa, cantidad o hecho disputado, declaración solicitada o el punto controvertido”

3.2.1.1. CARACTERÍSTICAS

3.2.1.1.1 Iniciativa

El proceso se inicia con la petición del interesado por conducto del acto en la vía civil, a través de demanda. El aforismo latino señala que “no hay Juez sin actor (nemo iudex sine actore), además, “el Juez no puede proceder o actuar de oficio” (ne procedi iudex ex officio)

3.2.1.1.2 Tema de decisión

El tema es fijado por las partes correspondiéndole al demandante determinarlo en la demanda y al demandado, en la contestación, esto constituye la materia sobre la cual el Juez da su sentencia.

3.2.1.1.3 Hechos

Los hechos son los que involucran Las Partes

3.2.1.1.4 Pruebas

La iniciativa para presentar pruebas corresponde al demandante y el juez carece de facultad para decretar pruebas de oficio tendientes a aclarar hechos del debate limitándose a lo que aparezca de las solicitudes por las partes

3.2.1.1.5 Disponibilidad del derecho

Como secuela de tales aspectos la disponibilidad del derecho que

constituye el tema de la decisión recae también sobre las partes, es así como el demandado puede desistir de la demanda en común acuerdo con el demandado o llegar a una transacción judicial

El principio dispositivo a sido adoptado para aquellos procesos en donde se considera que la cuestión debatida solo interesa a las partes y, por tanto, es de índole privada, por ende, es de carácter público, por consiguiente algunos tratadista consideran necesario dotar al Juez de mayores poderes invistiéndolo de facultades de ordenar las que considere útiles para aclarar trayendo como consecuencia el origen al principio inquisitivo

3.2. 2. SISTEMA INQUISITIVO

La utilización de este sistema es propia de regímenes despóticos, absolutistas y totalitarios, se le relaciona con la Roma imperial y el Derecho Canónico. En él los derechos de las partes en especial del imputado, están sobradamente disminuidos. Al juez se le enge en amo del procedimiento, es la garantía de la imparcialidad, búsqueda de la justicia; para lograrla se permite toda clase de excesos y aún la actuación de oficio, al pueblo se le margina de la administración de justicia, esta función es llevada al ejercicio propio de magistrados que representan a Dios, al Monarca o al Emperador, por lo que debe confiarse enteramente en ellos

Los principios que se describen en páginas que anteceden, son casi

diametralmente opuestos a los propios del sistema acusatorio, tales como el de la oralidad, la publicidad y el contradictorio, por tanto, son sustituidos por la escritura, el secreto y la no contradicción. La búsqueda de la “verdad”, según este principio, se debe permitir, no importa el procedimiento a utilizar, si lo que interesa es poder perseguir a los infieles, no resulta indispensable que exista la denuncia del hecho, la simple relación es suficiente, con ella se cubre la identidad de quien comunica al investigador el hecho y si resulta necesario, se permite la actuación de oficio, de esa forma se garantiza que todo hecho sea investigado, no importando que al sujeto que se le atribuye la comisión de la acción, puede o no tener conocimiento detallado sobre lo que se le causa. Este sistema, tiene un claro contenido persecutorio, la investigación muchas veces se realiza de espaldas al imputado, el expediente poco a poco se va completando, el recibo de la prueba o no amerita intervención alguna de la defensa, no intervienen las partes en el recibo de las probanzas, pero luego tendrán que referirse a ellas en sus alegatos previos a la resolución final, por ello la escritura sustituye a la oralidad.

El imputado no es un sujeto del proceso, es un objeto, por ello, no resulta característica de este sistema el posibilitar el acceso al expediente ni el pueblo puede constituirse en garante de la administración de justicia, de toda forma ésta se administra en nombre de Dios, del Monarca o del Emperador. La publicidad no es indispensable, se constituye por el contrario en un estorbo. El secreto adquiere importancia pues permite al inquisidor investigar sin los obstáculos que

pueda interponer la defensa., al amparo del secreto pudieron realizarse toda clase de excesos y aún legitimarse la tortura para arrancar la confesión, madre, a su vez de todas las pruebas

La defensa pierde toda importancia, el sistema no puede ser contradictorio. Durante la instrucción o primera etapa que es la principal dentro del proceso, el imputado queda a merced de los poderes del instructor. No le estaba permitido conocer el contenido del expediente, menos podría ejercer los derechos propios de la defensa, pero aún, al denunciante o acusador le estaba vedada cualquier actuación, es por ello que el contradictorio no puede desarrollarse con base a este sistema, el Juez constituye al acusador y se constituye en garantía del imputado. La fase del juicio resulta ser una mera formalidad, una vez recopilada toda la prueba se confiere audiencia a las partes, para que si lo tienen a bien, emitan conclusiones, las cuales no resultan indispensables para resolver, pues siempre el Juez se pronunciará aunque aquéllas no se presenten.

Algunos ordenamientos latinoamericanos en sus códigos de procedimiento penal siguen los lineamientos de este sistema, pero autorizan además, una audiencia oral, para que las partes emitan sus conclusiones, con ello se dice que se cumple con las exigencias propias de un sistema moderno de administración de justicia. Indudablemente ello no es así, esa mala copia de un debate no es sino otro de los muchos engaños que se les han hecho a nuestros

pueblos

Los déspotas y tiranos que hemos tenido en todo el continente, han encontrado en el sistema inquisitivo, que también sirvió a la Corona Española para supervisar y mantener su influencia en las Colonias, un medio idóneo para doblegar al pueblo y postrar a los Órganos Jurisdiccionales. Este nuevo amanecer, este reverdecer de la democracia que vivimos en la América Indiana debe servir para revitalizar nuestras instituciones y adecuarlas a los requerimientos propios de sistemas respetuosos de los Derechos Humanos, la Administración, y en especial las Garantías Fundamentales.

La actuación del juzgado en la valoración de la prueba, tampoco tiene la misma amplitud que en el sistema a que nos referimos anteriormente, al Juez se le dan reglas expresas sobre la forma en que debe realizar esa valoración, es éste otro medio de control, las pruebas son tasadas en su valor y el Juez debe ajustarse a lo que el derecho le manda a ese respecto.

El tipo inquisitorio nace desde el momento en que aparecen las primeras pesquisas de oficio y esto ocurre cuando desaparece la venganza y cuando el Estado, velando por su conservación comprende la necesidad de reprimir poco a poco ciertos delitos y así es como nació en Roma y en las monarquías cristianas del siglo XI lo cual origina el desuso del Sistema Acusatorio que se practicó hasta el siglo XIII.

Bajo la influencia de la Inquisición, el proceso penal recibió hondas modificaciones que lo transformaron por completo. Es así que en algunos países como España, el sistema inquisitivo floreció gracias al compromiso de algunos reyes con la Iglesia Católica, como sucedió con la instalación del Tribunal de la Santa Inquisición.

Con el paso del tiempo, los tratadistas proponen en lugar de la escritura, el secreto de los procedimientos, la negación de la defensa y de los jueces delegados del poder imperial, la publicidad y oralidad en los debates, la libertad de defensa y el juzgamiento de los jurados, lo cual generó la extinción de este sistema netamente inquisitorio para aparecer el denominado Sistema Inquisitivo Reformado o Sistema Mixto.

3.2.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA INQUISITIVO

Entre las características tenemos:

- En este sistema el juzgador es un técnico
- Durante el curso del proceso, el acusado es segregado de la sociedad, mediante la institución denominada prisión preventiva.
- El juzgador es un funcionario designado por autoridad pública.
- El juzgador representa al Estado y es superior a las partes.
- Aunque el ofendido se desistiera, el proceso debe continuar hasta su término

- El Juez tiene iniciativa propia y poderes discrecionales para investigar, La Prueba, en cuanto a su ubicación, recepción y valoración, es facultad exclusiva del Juez.
- Se otorga un valor a la confesión del reo, llamada la reina de las pruebas
- El Juez no llega a una condena si no ha obtenido una completa confesión, la cual más de una vez se cumplió utilizando los métodos de la tortura
- No existe conflicto entre las partes, sino que obedece a una indagación técnica por lo que esta decisión es susceptible de apelación
- Todos los actos eran secretos y escritos
- El acusado conoce la investigación cuando ya está definida.
- El Juez no esta sujeto a recusación de las partes
- La decisión no se adopta sobre la base del convencimiento moral, sino de conformidad con el sistema de pruebas legales

3.2.3. PRINCIPIO INQUISITIVO EN EL CÓDIGO VIGENTE

Es opuesto al dispositivo, consiste en que el Juez no es sujeto pasivo del proceso, si no que adopta la calidad de activo, está facultado para iniciarlo, fijar el tema de dedición y decretar pruebas necesarias para establecer hechos, el Principio Inquisitivo ha sido asignado a los procesos en donde se controvierten o ventilan asuntos en que el Estado o la sociedad tienen interés de saber cómo acontece en el penal, por que se considera de índole pública y, por tanto, no es susceptibles a la determinación por desistimiento o transacción, ciertos tipos de

delitos

Este principio, al igual que el Dispositivo, no rige en su totalidad de sus presupuestos por que las partes gozan de ciertos derechos como, es el de solicitar pruebas.

El artículo 793 del Código Judicial faculta a los jueces para pedir pruebas de oficio, además de las solicitadas por las partes, lo que en consecuencia aparece el principio mixto que más adelante se explicará con más detalles

El artículo que se transcribe a continuación se observan la combinación de ambos principios.

Artículo 793. “Además de las pruebas pedidas y sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones de este Código, el juez de primera instancia debe ordenar, en el expediente principal y en cualquier incidencia que surja, en el período probatorio o en el momento de fallar, la práctica de todas aquéllas que estime procedentes para verificar las afirmaciones de las partes y el de segunda practicará aquéllas que sean necesarias para aclarar puntos oscuros o dudosos en el proceso

El Juez debe, en cualquier momento, ordenar de oficio la repetición o perfeccionamiento de cualquier prueba, cuando ha sido mal practicada o sea deficiente”

3.2.4. SISTEMA MIXTO

Su nacimiento se relaciona con la época post-revolución francesa, pero fueron las voces que desde principios del Siglo XVIII se alzaron en contra del desconocimiento de derechos que el sistema inquisitivo conlleva, las que

crearon el ambiente necesario para que el cambio se produjera. El desprestigio del sistema inquisitivo, por el desconocimiento de esos derechos ciudadanos, motivó al legislador napoleónico a dedicar sus mayores esfuerzos para encontrar un procedimiento, que tomando lo mejor de los anteriores, se constituyera en un medio eficaz para represión de los delitos, sin desconocimiento de los derechos del ciudadano. En 1808 se sanciona el Código de Instrucción Criminal, que entra a regir a partir de 1811, en el que se ponen en práctica esas ideas de conjunción que dan base al procedimiento que se ha conocido como mixto.

3.2.4.1 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA MIXTO

3.2.4.1.1 PRIMER PERIODO

Este primer período comprende las siguientes características.

- Instrucción escrita.
- Absoluto secreto
- Encarcelación preventiva y segregación del inculcado.
- Dirección de la investigación al arbitrio del juez, con mayor o menor subordinación al Ministerio Público
- Intervalo arbitrario entre los actos
- Decisión secreta o sin defensa o con defensa escrita, en lo relacionado del envío del procesado al juicio o sobre su excarcelación provisoria

3.2.4.1.2. SEGUNDO PERIODO

Tenemos las siguientes características:

- Desde aquél momento nace la publicidad
- Se emite por el Ministerio Público el libelo de acusación contra el reo, quien de "inquisito" pasó a ser "acusato"
- Cesa el análisis y comienza la síntesis.
- Se intima un juicio que debía hacerse a la vista del público
- Se da libre comunicación al justiciable y al defensor
- Se da noticia de los testimonios del cual se valdrá la acusación en el nuevo proceso
- El proceso entero se repite en audiencia pública y los actos del proceso escrito no son valederos si no se producen en el proceso oral. En otras palabras, el proceso tiene dos fases. una que comienza con la fase preparatoria o de instrucción, le sigue el juicio o procedimiento principal, cuyo eje central es el debate y la inmediación entre el tribunal y el acusado.
- Siempre en la audiencia pública, en presencia del pueblo del acusado y de su defensor, el acusador debe reproducir y sostener la acusación; el acusado sus descargos y el defensor exponer sus razones
- Debe leerse la sentencia en público
- Todo debe seguirse sin interrupción, esto es, sin desviación a otros actos.

La instrucción en el Sistema Mixto no se inicia de oficio, requiere de una

excitación del Órgano Jurisdiccional que al propio tiempo sirve al imputado para adquirir conocimiento sobre los hechos que se le atribuyen, para así plantear la defensa. A la instrucción tienen acceso pleno todas las partes y a ellas les está autorizada su intervención en las diligencias probatorias; además, todo lo actuado en la instrucción, sólo tiene valor preparatorio en relación con el juicio, etapa ésta, en la que debe reproducirse totalmente la prueba, ha de servir al juzgador para resolver el asunto

CAPITULO CUARTO:

EL SISTEMA ACUSATORIO Y EL PROCESO PENAL PANAMEÑO

4.1. EL SISTEMA DE ENJUICIAMIENTO PENAL EN EL ESTADO PANAMEÑO

El Sistema de Enjuiciamiento Penal ha estado en vigencia en Panamá desde hace casi un siglo, a partir del primero de julio de 1917, fecha en la que entró a regir la Ley 2da. de 1916, que lo adopta

Las más importantes modificaciones a las leyes de procedimiento penal se dan con la Ley 52 de 1919; el Código Judicial de 1987, la Ley 3 de 1991 y la Ley 1 de 1995. La mayoría de las leyes se han inspirado en los procesos de enjuiciamiento penal español de 1882, pretendía convertir el sistema rigurosamente inquisitivo que había nacido el 1° de julio de 1917, en un modelo inquisitivo reformado al estilo de los procesos mixtos. Con ese fin se introdujo la oralidad para el trámite procesal del plenario.

El Libro Tercero del Código Judicial de 1987, representa una continuación del sistema adoptado en 1917 y reformado luego por la Ley 15 de 1941 y 1ª de 1959. Sus nuevos aportes se refieren, entre los más importantes, a la prisión preventiva, a la declaración indagatoria y a la proscripción del juicio en rebeldía. También reinstituyó la oralidad para el trámite procesal del plenario, que había sido eliminada en 1970.

En la Ley 3 de 1991, la prisión preventiva pasó a ser una medida instrumental de coerción personal de aplicación excepcional, únicamente en los casos de absoluta indispensabilidad. Se crearon otras medidas de coerción procesal no privativas de la libertad y se señalaron criterios, objetivos, para

determinar su procedencia

Pero la Ley 3 reinstituyó el Juicio en Rebeldía y creó la figura del “Agotamiento” para la ampliación del sumario. La Ley 1 de 1995, influida tal vez por el movimiento reformador del proceso penal que vivía momentos de intensa actividad en la región iberoamericana, proscribió el Juicio en Rebeldía, eliminó la figura del “Agotamiento”, reforzó los principios de oralidad e instituyó la llamada “Audiencia Preliminar”, un conjunto de normas que regulan, con aplicación del principio de oralidad, la fase intermedia del proceso penal ordinario por delito de competencia de los Jueces de Circuito y Municipales. Sin embargo, la jurisdicción, en esta fase de crítica instructoria, la ejerce el mismo Juez de sentencia, que en la fase intermedia formula la acusación penal y en la sentencia que concluye el proceso la resuelve con pronunciamiento definitivo de la instancia, con absolución o condena. El mismo Juez, primero acusa y luego juzga, todo ello, facultado por el artículo 2219 del Código Judicial que le permite examinar si la investigación está completa, por si no lo estuviere, depondrá de lo conducente al perfeccionamiento del sumario, esto es a través de la ampliación del sumario ordena todas las prácticas de pruebas que considere conveniente y además antes de dictar sentencia el artículo 2420, lo faculta para hacer cualquier diligencia, para aclarar puntos oscuros en el proceso, por consiguiente, no existe separación entre el investigador y el juzgador.

La mayoría de los estudiosos del Derecho Penal conceptúan que, ninguna de las modificaciones, inspiradas, algunos en modelos de procesos de tipo

acusatorios ya vigentes o en preparación, en países del área iberoamericana, han cambiado el carácter represivo, autoritario y antidemocrático del Sistema rigurosamente Inquisitivo que nació en 1917, para regular el Proceso Penal. Además, consideran que la jurisprudencia de los Tribunales, por su parte, ha hecho pocos aportes significativos para democratizar el sistema. Por tanto, se concluye que Panamá cuenta con un Sistema de Enjuiciamiento Penal “sui generis”, caracterizado por sus notas represivas y antidemocráticas, con normas que, en muchos casos, favorecen la actividad abusiva de los funcionarios, en su tradicional tendencia a hacer prevalecer la conveniencia o utilidad de la represión sobre la necesidad de justicia

4.2. TITULARIDAD DE LA ACCIÓN PENAL EN EL SISTEMA VIGENTE

El Ministerio Público ejerce simultáneamente funciones públicas de acusación, que le concede la Constitución y funciones jurisdiccionales que le atribuye la Ley. Cuando ejerce la acción penal, interviene en el proceso como parte; cuando ejerce la jurisdicción, interviene como Juez. El ejercicio simultáneo de ambas funciones, le permite intervenir en el proceso penal como Juez y como parte, al mismo tiempo

Pero, el Ministerio Público aún cuando ejerza funciones propias del Juez del Órgano Judicial, no se convierte por ello en Juez o Tribunal. Mantiene su calidad de Agente del Ministerio Público, así lo dice, La Ley que ejerce las funciones jurisdiccionales propias de los Jueces y Magistrados del Órgano Judicial, con la particularidad de que las decisiones de naturaleza jurisdiccional

que adopta cuando ejerce como funcionario de instrucción, no están sometidas a los controles propios de las resoluciones que adopta el personal del proceso, dependiente del Órgano Judicial, cuando administra justicia. Por esas razones las resoluciones del Ministerio Público, como son, entre otras muchas, las que decretan la prisión preventiva y otras medidas cautelares; la que llama al imputado a rendir indagatoria; la que adopta criterios de oportunidad; la que niega la aportación de prueba; la que decide admitir o rechazar a la víctima como sujeto eventual del proceso; la que decide sobre la iniciación de un proceso de instancia privada; y muchas otras de naturaleza jurisdiccional, no admiten recurso alguno; se adoptan unilateralmente, sin audiencia del afectado y son de cumplimiento inmediato. Por consiguiente, si se decreta la prisión preventiva del imputado, por ejemplo, no existe nada que pueda impedir que se cumpla inmediatamente, aun cuando sea notoria la arbitrariedad. Si se ejecuta, el imputado puede durar preso preventivamente por mucho tiempo, años inclusive, hasta que el propio agente del Ministerio Público decida también unilateralmente hacerla cesar por cualquier causa, en el trámite del proceso o hasta que éste concluya.

Cuando el Ministerio Público decide abrir un sumario puede, arbitrariamente, llamar a quien considere sospechoso, a rendir indagatoria; y en el mismo acto, para el caso de desobediencia, le amenaza con “conducción” que es una detención o arresto procesal. No causa para nada extrañeza que quien es llamado a rendir declaración indagatoria, al apersonarse, quede en prisión

preventiva y ésta opera, en la práctica, como anticipo de la condena. Con esos actos se violan al mismo tiempo la presunción de inocencia, el derecho a la prueba; el principio de legalidad procesal; el derecho a recurrir; el derecho a la libertad personal, el derecho a no colaborar; el derecho a no declarar. Y contra esos actos, susceptibles de ser abusivos y arbitrarios no hay nada que hacer: Son actos del Ministerio Público como funcionario de instrucción. Quedan, en esas circunstancias, como única alternativa, las impugnaciones extraordinarias: tales como el Habeas Corpus; el Amparo de Garantías Constitucionales y el Incidente de Controversia, mecanismos de tutela judicial que resultan, lamentablemente inoperantes.

Como consecuencia, las personas sospechosas requeridas se niegan a comparecer al Ministerio Público, por temor de ser encarcelados y mostrados a la faz del mundo esposado, en actos de espectacularidad ocioso y dañino, que los muestra anticipadamente como culpables, con expresión de las pruebas que existen en su contra y de las diligencias de investigación que se van a practicar.

El Sistema de Enjuiciamiento Penal Panameño, que se adoptó en 1917, siguió el modelo colombiano que a su vez había heredado del Régimen Jurídico Colonial, que rigió en los países de Hispanoamérica por muchos años, después de la independencia. Se mantuvo, en consecuencia, un proceso penal inquisitivo, totalmente escrito, secreto y autoritario. Ese es el sistema que aún se mantiene, con reformas sustanciales que en ciertos aspectos ha sido mejorado.

por la consagración de principios procesales nuevos con rango constitucional como lo son el debido proceso, la presunción de inocencia, la inviolabilidad de la defensa, etc. y con la introducción de principios y figuras del sistema acusatorio.

Pero el modo de juzgar, a través de un proceso con un sumario, exageradamente abultado, en el que se agota todo el proceso, cumplido con limitada intervención de la defensa, cuyas pruebas, sin embargo, fundan, normalmente la sentencia, convirtiendo el plenario en un trámite inútil, hace de nuestro proceso penal un instrumento de realización, obsoleto.

4.3 TITULARIDAD DE LA ACCIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO

El Ministerio Público está a cargo de la etapa de investigación, titular de la Acción Penal en nombre del Estado; y, demás, el ofendido es titularidad originalmente de la acción penal que postenormente es puesto a órdenes del tribunal competente.

Un nuevo modelo en que se le asigne a los sujetos esenciales del proceso, las atribuciones que la Constitución y la doctrina procesal le acuerdan.

Modelo con mecanismos legales necesarios capaces de asegurar a todos los habitantes de la Nación Panameña que en el planteamiento, desenvolvimiento y conclusión del trámite procesal, los intervinientes tendrán oportunidad efectiva de hacer valer sus derechos y de oponerse, con buen éxito, a la eventual actuación arbitraria de los funcionarios. Un proceso de estricta

legalidad, garantizada, en el que no exista lugar para los poderes discrecionales de las autoridades.

4.4. ANTECEDENTES DEL SISTEMA PROCESAL ACUSATORIO

Es incuestionable, así nos lo enseña el estudio histórico del procedimiento penal, que exista una gran relación entre las ideas políticas propias de una sociedad y el sistema que utiliza para juzgar a quienes se les atribuye la comisión de hechos delictivo. El Sistema Acusatorio resulta propio de regímenes liberales, sus raíces las encontramos en La Grecia Democrática y La Roma Republicana, en donde la libertad la dignidad del ciudadano ocupa un lugar preferente en la protección brindada por el ordenamiento jurídico

El nombre del sistema se justifica por la importancia que en él adquiere la acusación, ella resulta indispensable para que se inicie el proceso, pues, el acusado debe conocer detalladamente los hechos por los cuales se le somete a juicio; veremos luego que la pasividad de la características del sistema, por ello le resulta imposible actuar de oficio, debe necesariamente ser legalmente excitada su actuación, excitación que puede proceder cuando trata de delitos públicos de cualquier ciudadano

Son principios importantes de *este* sistema la oralidad, la publicidad, contradictorio. En la época de Grecia y Roma, la oralidad era consustancial al proceso, dado que la escritura no había alcanzado el desarrollo y utilización que más tarde lograría, la forma de expresión dominada por toda la gente, necesariamente fue la oral; es por ello, que tanto frente al Areópago comodante en el Senado se

hicieran de viva voz los planteamientos y de la misma forma se resolvieran los asuntos llevados a conocimiento de esas instancia. La oralidad y el hecho de no existir otro ente superior que revisara lo resuelto, conlleva a que la instancia única sea otra de las características propias del sistema; sobre la representación del pueblo que juzga, no existe otra instancia, además no resulta posible prever lo resuelto, pues la pruebas y en algunos casos el pronunciamiento, no quedan asentados por escrito. A diferencia del Sistema Inquisitivo, veremos como en acusatorio el Juez debe ocupar un puesto más pasivo en el desarrollo de la contienda judicial, lo que le permite lograr mayor imparcialidad frente a las partes. En general, el Tribunal se involucra poco con las tesis de una y otra de las partes, limitándose a oírlos, al igual que los testigos y presenciar el recibo de las otras pruebas necesarias para demostrar el suceso fáctico en examen.

Al desarrollarse el procedimiento con base a debates, los que se ejecutan en lugares públicos, hace que la publicidad sea otra de las condiciones más señaladas del sistema, ella posibilita además, la fiscalización del pueblo sobre la forma en que sus jueces administran justicia.

La pasividad del Juez conlleva a que las partes se desempeñen con amplia libertad, para aportarle argumentos y probanzas que permitan resolver con transparencia, es por ello, que el contradictorio adquiere marcada importancia.

Las tesis encontradas, de las partes, permiten una mejor búsqueda de la verdad real, de lo acontecido. Consecuencia directa de esa preeminencia de las partes, es el plano de igualdad en que deben desempeñar sus actuaciones, no puede

existir preeminencia alguna de una sobre otra y toda actuación debe tener una finalidad propia del procedimiento. Para posibilitar ese plano de igualdad, aún en relación con el acusado, su libertad ambulatoria durante el proceso, es la regla, la excepción.

Generalmente, en los regímenes políticos democráticos, se utilizan Sistemas Procesales en los que se aplican la mayoría de los principios que informan este sistema, para posibilitar, en mayor medida, el respeto a los derechos de los ciudadanos y porque el pueblo tiene una mayor injerencia en la administración de justicia. La oralidad conlleva una notable ventaja para el sistema, pero no debe desconocerse que ella también posibilita un mayor grado de estigmatización del reo, pues, la comunidad tendrá mayor posibilidad de conocerlo directamente al tener que comparecer personalmente al debate.

Algunos ven en la oralidad como peligro para que las partes con facilidad de dicción puedan manipular con sus argumentaciones a los Jueces, de ese peligro no está exento el sistema escrito, la capacidad de argumentación puede constituir también una ventaja para el que escribe bien, los giros efectivos al exponer, pueden resultar o no ventaja, pero lo cierto es, que los Jueces también desarrollan capacidades propias que les permiten separar, en las exposiciones de las partes, los argumentos valiosos de aquéllos planteamientos efectistas que sólo pretenden sensibilizarlos, sin ninguna razón jurídica, en favor de una de las partes.

En 1994 se realizó un estudio comparativo de los Sistemas Procesales en América Latina, España y Portugal con motivo de las XIV Jornadas

Iberoamericanas de Derecho Procesal, y se llegó a la conclusión que el sistema procesal penal dominante es el principio inquisitorio. Esta situación no sólo es preocupante, considera los tratadistas en Derecho Penal, si no que es además, triste y desalentador.

Las nuevas orientaciones que rigen el Proceso Penal de nuestros días ponen de manifiesto la necesidad de diseñar un proceso penal eficaz y garantista, de modo que el Derecho Penal no sea letra muerta y el responsable de la infracción penal reciba la sanción que su actuar merece, sin dejar de lado los derechos y garantías que el Estado debe respetar para llegar a la sentencia correspondiente.

La importancia que conlleva en sí, La Prueba, cuándo es valedera y cuándo no, cómo se presenta y en qué orden. Todo esto nos servirá para reflexionar sobre el papel que juega la llamada prueba dentro de un proceso, redescubriendo que su papel fundamental es dar certeza acerca de la verdad de una proposición, siendo un medio de verificación de las afirmaciones que los litigantes formulan en el juicio y que de ella va a depender el convencimiento al que llegue el Tribunal respectivo para emitir el fallo; pero no debemos olvidar que la finalidad de la prueba en el sistema acusatorio no es sólo llegar a descubrir la verdad, sino hacerlo garantizando los derechos del ciudadano.

4.4.1. ASPECTOS ESENCIALES HISTÓRICOS DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA

La primitiva concepción del Juicio Criminal exigía un acusador, prevalecía

el interés privado, el del ofendido, posteriormente, evoluciona y esta persona era cualquiera del pueblo, procedimiento que a su vez evoluciona por introducir publicidad y la oralidad.

La decadencia de este sistema radica básicamente en que para que funcione se requiere que se dé en un pueblo eminentemente educado en las virtudes ciudadanas y que en la realidad este sistema no consulta los intereses de la defensa social y el inadecuado ritmo de la vida contemporánea corrompida por la baja política y donde están ausentes las virtudes cívicas

4.4.2 CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS DEL PROCESO ACUSATORIO

4.4.2.1. El Juez no es un representante del Estado ni un Juez elegido por el pueblo. El Juez es el pueblo mismo, o una parte de él, si éste es muy numeroso para intervenir en el juicio. La acción corresponde a la sociedad, mediante la acusación que es libre y cuyo ejercicio se confiere no sólo al ofendido y a los parientes, sino a cada ciudadano.

4.4.2.2. El Juez no funda su sentencia. Se limita a pronunciar un si o no. El Juez por tanto, no da justificación ni motiva sus fallos, debido a su poder soberano no tenía porque rendir cuentas ante nadie y por otro lado por su falta de capacidad intelectual y técnica para motivar sentencias.

4.4.2.3. Los fallos eran inapelables. El veredicto sólo es

susceptible de recurso de casación por un tribunal que únicamente tiene facultad de examinar si se han observado las normas de rito o si la Ley ha sido aplicada.

4.4.2.4. Es como un duelo entre el acusador y el acusado en que el Juez permanece inactivo. La etapa contradictoria del juicio se realiza con igualdad absoluta de derechos y poderes entre acusador y acusado

4.4.2.5. Si no existe acusación no podía haber juicio. Es decir, en estos casos no había acusaciones de oficio.

4.4.2.6. En el proceso se juzga el valor formal de la prueba, la cual incumbe al acusador y el Juez sólo evalúa la forma y en ello se basa para expedir su resolución. La presentación de las pruebas constituye una carga exclusiva de las partes

4.4.2.7. La libertad personal del acusado es respetada hasta el instante en que se dicte la sentencia condenatoria

4.4.2.8. La libertad personal del acusado es respetada.

4.4.2.9. El veredicto, se fundamenta en el libre convencimiento

En el Procedimiento Acusatorio, según el profesor Miguel Sarre Inguíñz,(1997), en los tiempos modernos el Sistema Acusatorio debe ser aquel

en que “el Estado tiene la carga de la prueba, y se rige por la oralidad del procedimiento, la igualdad de las partes, y la publicidad del proceso, es un ideal al que debe aspirar un sistema de justicia penal”.

Este principio se fundamenta en lo que los estadounidenses llaman la igualdad de armas, es decir, las mismas condiciones entre la acusación y la defensa, con lo que se garantiza que el Derecho Penal cumpla en forma razonable con sus dos finalidades básicas. proteger por una parte a la sociedad del delito, lo cual es ampliamente conocido y, por otra al acusado frente a los excesos, las desviaciones y las perversiones en la acusación, es decir, el Derecho Penal es, o debe ser, una forma de reducir la violencia en la sociedad, no de agravarla.

4.5. DIFERENCIA DEL SISTEMA ACUSATORIO CON EL INQUISITIVO MODERNO O MIXTO

Ahora bien, la diferencia entre un Sistema Mixto Intermedio y el Acusatorio radica en que en este último, los juzgados de instrucción, son sustituidos por una fase de investigación previa de naturaleza administrativa en sentido formal y material destinada a motivar la convicción del fiscal respecto a los indicios de criminalidad, pero no a la determinación del Juez sobre la existencia del delito y la identidad de su autor. Es decir, en la primera fase se trata simplemente de decidir la admisibilidad de la acusación para eliminar procesos innecesarios cuando faltaren los requisitos sustanciales para ello. No se juzga para ver si se va a juzgar, como ocurre durante nuestro proceso de

averiguación previa, sólo se hace un juicio de probabilidad, es decir, se determine la existencia de los elementos que razonablemente indiquen la pertinencia de un juicio.

En el procedimiento acusatorio, como decíamos, quedan separadas las funciones de acusación, defensa y decisión. La diferencia con ese Sistema Mixto, radica en que éste se desarrolla en dos etapas, mientras que en el procedimiento acusatorio básicamente todo el proceso se ventila ante el juez.

Con este último, además de todas las ventajas respecto a las garantías individuales, la eficacia, la seguridad y la confianza en el Sistema de Protección de Justicia, se logra mayor eficacia en la investigación de los delitos, porque la investigación de los delitos está completamente separada de los actos procesales. Por una parte, tenemos una fase prejudicial, secreta, administrativa, pero cuando inicia el proceso, inicia también todas las reglas procesales. No se confunden actos de investigación con actos procesales, informes policiales con pruebas testimoniales, o con las pruebas confesionales, los reconocimientos o la reconstrucción de hechos. Están separadas las fases de investigación y de proceso. Esto evita la fuga de información y permite a la autoridad que persigue el delito una mayor eficacia, ya que las investigaciones serán secretas porque tienen que serlo, mientras que los juicios serán públicos, como deben serlo.

Frente al Proceso Acusatorio, compatible con los valores democráticos, está el Sistema Inquisitorio Moderno, al cual suele eufemísticamente denominársele sistema mixto clásico, que es el adoptado en nuestro medio. Se

divide en dos etapas, que en nuestro sistema legal corresponden a la averiguación previa, y al proceso en sí.

La primera etapa es escrita y la segunda en la audiencia “de publicidad restringida”. Como todos sabemos, la averiguación previa y sus equivalentes es dirigida por el Ministerio Público, en el cual se confunden las funciones de sostener la acusación y conducir actuaciones materialmente jurisdiccionales, es decir, investiga y persigue al mismo tiempo piden condena a sabiendas de que no existen los presupuestos procesales para condenar.

En lo referente al Sistema Acusatorio, Julio B. J. Maier, (1995), considera que “si a todo ello se incorporan las propuestas existentes en el ámbito del Derecho penal material en especial la reparación como forma de sustitución o aminoración de la injerencia violenta que representa el sistema penal, tercera vía para el Derecho penal”, por otra parte, Albin Eser, (1992), consideraba “que el movimiento de incorporación de los intereses de la víctima a la cuestión penal y la cierta privatización que, por la incorporación de esos intereses, se produciría en el Derecho penal”, además, Julio B. J. Maier, (1995), sostenía que “se puede avistar que el acercamiento al método acusatorio operará de otro modo, más vigorosamente, también desde el punto de vista material y no sólo formalmente, por un cambio de dirección de la persecución penal, al menos parcialmente, para una clase de hechos punibles”.

Se pretende dejar de lado el viejo Proceso Inquisitivo, en donde el imputado es el objeto de la prueba, la misma se puede obtener a cualquier costo

y la confesión del mismo es uno de los elementos esenciales de la actividad probatoria llevada a cabo durante la actuación policial, la instrucción del Ministerio Público y el juicio oral desarrollado ante el tribunal de la causa.

El Nuevo Proceso Penal, según el Doctor Muñoz Pope (1999) "se trata de introducir un Juez imparcial, que no haya tenido intervención en la instrucción ni el control de la misma, de forma que como un sujeto que conoce de un asunto por primera vez se plante ante él los medios de convicción que el Estado, por medio del Ministerio Público, y el eventual querellante particular que se convierte en parte en el proceso, traigan el juicio o debate oral para lograr la condena del imputado, que el nuevo Ministerio Público tiene la misión de acusar al sujeto ante el juez, sin convertir la fase sumarial en un juicio anticipado en el que se obtienen las pruebas que sirvan para fundar la culpabilidad del sujeto, que debe ser discutida ante el juzgado en el juicio oral respectivo, lo que supone una nueva dimensión de la inmediación y concentración".

Las nuevas orientaciones procesales previstas en el Anteproyecto de Código Procesal Penal de 1997 tratan de acomodar el nuevo sumario a la realidad procesal moderna, pues el mismo no puede seguir siendo una etapa de juicio anticipada en la que el Ministerio Público decide con su actuación la culpabilidad del imputado, que no tiene oportunidad de defenderse ni contradecir las pruebas aportadas durante la instrucción

La sentencia depende de lo probado en el juicio o debate oral de la causa, siendo inadmisibles una sentencia fundada exclusivamente en la actividad de instrucción llevada a cabo por el Ministerio Público en el sumario sin necesidad de reproducir dicha actividad ante el juzgador.

4.6. LA ORALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO PENAL

Dr. Luis Paulino Mora Mora, (2005), Magistrado Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Profesor, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica hizo un estudio relacionado en el año de 1991 de la siguiente manera:

"Algunos hemos encontrado en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el que se desarrollan las Garantías Judiciales, concretamente en su inciso 5, la oposición que en ámbito continental se hace en favor del juicio oral, pues como ya ha quedado de manifiesto, es la oralidad la que se aviene al procedimiento público y en dicha norma se dispuso que "El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. ", pero es lo cierto que el estudio detallado del citado numeral nos lleva a concluir que sólo mediante la adopción de un sistema mixto se puede dar cumplimiento a las garantías que convencionalmente se aceptaron para tener vigencia en América. La escritura atenta contra la celeridad, la morosidad judicial de los sistemas escritos quedó plenamente comprobada en el estudio que junto con Raúl Zaffaroni, Elías Carranza y Mario Houed hicimos sobre el preso sin condena en América Latina y el Caribe, en ese estudio también quedó patente la amplia ventaja que tienen sobre los sistemas que siguen el continental europeo, los de la zona del Caribe con ascendencia anglosajona y dentro de los primeros los que siguen el sistema continental europeo los que de alguna manera han receptado el sistema oral, en relación con los que siguen el escrito.

La comunicación previa y detallada al inculcado de la acusación formulada, la concesión del tiempo y los medios adecuados al imputado para la preparación de la defensa, el

derecho del encausado de comunicarse con su defensor con anterioridad a rendir cualquier declaración; el derecho de la defensa de interrogar a los testigos, a no ser obligado a declarar contra sí mismo, ni a declararse culpable, son también derechos que reciben una mejor garantía en el procedimiento oral y que se encuentran establecidos en el citado artículo 8 de La Convención

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también recoge en su artículo 14 el principio de la oralidad como garantía a favor del imputando, garantizando con ello, al igual que el Pacto de San José, que el viejo principio jurídico que dice:

"que nadie debe ser condenado sin ser oído" cobre su verdadero significado. El derecho constitucional de defensa con la oralidad, cobra entonces un nuevo significado para convertirse en una

Estimo que si el constituyente guatemalteco optó por darle una merecida primanencia a lo dispuesto en los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala en materia de Derechos Humanos, según se establece en el artículo 46 de La Constitución Política, los Órganos Constitucionales correspondientes, están en la ineludible obligación de modificar el sistema procesal penal vigente para optar por uno que garantice aquéllos principios y otros que como los que protegen la libertad personal se encuentran también establecidos en la Convención ya citada."

En relación a la Importancia de la oralidad , Chioventa manifestó que:

"La experiencia dervada de la historia permite afirmar que el proceso oral es el mejor y más conforme con la naturaleza y las exigencias de la vida moderna, porque sin comprometer en lo más mínimo, antes bien, garantizando la bondad intrínseca de la justicia, la proporciona más económicamente, más simplemente y prontamente".

Cuando optamos por la oralidad es en el entendido de que nos referimos a la etapa procesal del debate, pues en la instrucción, como preparatoria que es, necesariamente debe prevalecer la escritura, pero acondicionada a lo que señala el procedimiento acusatorio

4.7. CARÁCTER EPISTEMOLÓGICO DEL SISTEMA ACUSATORIO

La característica del modelo acusatorio es que se actúe de manera epistemológica, determinado que pone la verdad material por encima de la procesal.

El Ministerio Público observará la más rigurosa objetividad en el desarrollo de la averiguación previa. En todo caso se procurará el conocimiento de la verdad sobre los hechos constitutivos del delito y la responsabilidad de los autores. Está obligado a recabar y desahogar con diligencia las pruebas sobre los hechos, la participación delictuosa y otros puntos sujetos al procedimiento, que sean pertinentes para establecer la verdad histórica y resolver, con este fundamento, lo que proceda sobre el ejercicio de la acción. En caso de duda, el Ministerio Público ejercitará la acción penal. En su desempeño en todo el procedimiento, el ministerio público ajustará su actuación a los principios de legalidad y buena fe.

4.7.1 Pruebas que identifiquen la verdad histórica

Suele decirse que el Proceso Civil se sujeta al principio de verdad formal o procesal, mientras que el Proceso Penal se rige por el de la verdad histórica.

Sin embargo, se ha venido cuestionando esta concepción debido a que una verdad condicionada por procedimientos y garantías de defensa no es toda la verdad histórica. Si se quiere realmente buscar ésta, tendrían que violarse los procedimientos y las garantías de defensa. En este sentido, vamos a buscar sin duda la verdad, pero se trata de una verdad controlada en cuanto a su

método de adquisición, que al estar además mediada por el principio de presunción de inocencia, resultará de modo necesario más reducida en cuanto a su contenido informativo, pero al mismo tiempo más confiable. Si buscásemos la verdad histórica, "toda la verdad", paradójicamente se invertirían los resultados: más datos, pero menos confiables; es decir, tendríamos menos verdad y, como consecuencia, menos justicia.

Es importante la vinculación entre la búsqueda de la verdad histórica y el aniquilamiento de las garantías individuales. No se puede sostener que se busca la verdad histórica y al mismo tiempo respetar ciertos límites a la intimidad de la persona, a su autonomía de la voluntad, a la intimidad del hogar y al núcleo familiar. Si el fin del proceso penal fuera la verdad histórica, es lógico que aquél tuviera que guiar todas las acciones procesales (policiales). En aras de la verdad histórica estaríamos obligados a entregar a nuestros propios hijos. Y hasta ahora, por fortuna, en la ley se comprende que primero es la relación filial y después los deberes para con el Estado.

Hemos visto algunos datos, que sirven como pruebas del Sistema Acusatorio, donde hay esa igualdad, el Estado juega limpio, y están equilibradas las cosas.

4.7.2. En la averiguación previa y las pruebas en un enjuiciamiento penal de corte acusatorio

La averiguación previa es un pequeño juicio antes del juicio, y se toma como un dogma sin plantearnos otras alternativas. Hay que pensar en diseñar

según la doctrina dominante, un Sistema de Justicia Penal como si no conociéramos el que nos rige en la actualidad, construir uno que funcione objetivamente, que sea viable, realizable y responda a estos principios del Sistema Acusatorio.

En realidad, estamos acostumbrados a defendernos ante nuestro acusador el Ministerio Público y no ante el Juez imparcial. Pero no vale ofrecer explicaciones empíricas, lo que siempre se ha hecho como justificaciones axiológicas, en la mayoría de las veces, los jueces no tienen tiempo para examinar las pruebas independientes del Ministerio Público, lo toman como guía para condenar al acusado

Los juristas tienen la responsabilidad de fortalecer la protección a la libertad personal. Cuando los mecanismos jurídicos existentes no son suficientes para garantizar la libertad personal, la física o de ambulatoria de todos los ciudadanos, se vicia de origen nuestro Procedimiento Penal

La custodia de los detenidos debe estar siempre en manos de personas distintas a aquellas que realizan la investigación. La autoridad que investiga nunca debe ser la misma que la que custodia. Ese es un principio elemental de división de funciones para proteger a una persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad frente a la acusación por un delito: ésta ha de quedar resguardada en manos de un tercero y no por el encargado de incriminarlo.

La producción y valoración de pruebas deben ser ante el Juez, esto no quiere decir que el Ministerio Público no pueda antes recabar indicios o

elementos de prueba, o que no pueda recabar los datos y las piezas de convicción que encuentre Sin embargo, el ejercicio procesal, es decir, el de la reproducción de aquel acontecimiento que acaeció, de recrear la realidad a la luz del derecho para probar lo que sucedió en el pasado, es un ejercicio que debe ser llevado ante el Juez.

En este contexto, el Ministerio Público está manifestando una conducta netamente procesal. Estas pruebas forman parte de la decisión del Juez y la Ley le reconoce pleno valor probatorio a todo lo que ocurre ante el Ministerio Público, éste se reviste de las funciones de juzgador al valorar las pruebas que serán presentadas ante el Juez.

A través de la prueba confesional, se identificar la verdadera naturaleza de un sistema. Cuando esa declaración se concibe como el primer embate del acusador contra el acusado, estamos claramente ante un procedimiento de tipo inquisitorio En cambio, cuando esa declaración es más bien la oportunidad de contestar a los cargos que se le hacen al acusado, estamos ante un procedimiento de tipo contradictorio, adversario o acusatorio.

Cuando se incorporaron algunas garantías a la averiguación previa, se tuvo buen cuidado de no incluir la garantía de publicidad Se introdujo la defensa, que es una defensa que está en condiciones difíciles para ejercitarse realmente, porque el defendido, como lo hemos visto, está ante su acusador y no en una situación de igualdad frente a un Juez imparcial que esté sobre las partes. Pero, al margen de esto, la publicidad es una garantía fundamental para la obtención de las pruebas En algunos estados, como Alemania, para

que la declaración del acusado sea válida, se requiere no sólo que sea rendida en un lugar público, en presencia del juez, del defensor y del acusador, sino que además debe ser pública; las puertas del juzgado deben estar abiertas, porque sin ello el acto carece de transparencia.

La excarcelación momentánea o quitarle las esposas a un acusado, para que rinda su declaración, aunque su abogado esté presente, ésta es una situación que no alcanza a ser revertida y a contar con condiciones que garanticen el derecho a la defensa, lo que hace prevalecer su situación de vulnerabilidad. Por ello, la publicidad el control comunitario en la obtención de la prueba es importante no sólo para proteger las garantías del inculcado, sino también para favorecer la credibilidad del Sistema de Justicia Penal. Sólo cuando la opinión pública, los medios, pueden ver que en efecto el acusado confesó y detalló circunstanciadamente lo que aconteció, puede compartir la decisión del Juez y creer más en el Sistema de Justicia. Cuando esa confesión tiene lugar en sitios oscuros e inaccesibles y después vemos a la persona fotografiada empuñando un arma, siempre dudaremos de que esto haya sido así. Nuestro Sistema de Justicia Penal por no respetar garantías, ha perdido credibilidad, y sin ella, por más operativos que realicen, no habrá seguridad en las calles, ni justicia para los gobernados.

“La prueba en el proceso penal acusatorio está constituida por aquella actividad que han de desarrollar las partes acusadoras en colaboración con el Tribunal a objeto de desvirtuar el estado de no culpabilidad respecto del delito que se le atribuye o derecho a la presunción de inocencia, el cual es el punto de partida de toda

consideración probatoria en un proceso penal que se inicia con la verdad provisional o interina de que el imputado es inocente”.

La clave de todo proceso radica en la prueba, en el proceso penal adquiere dimensiones más trascendentes, por cuanto los resultados del proceso va a recaer en derechos de especial importancia del imputado.

Los caracteres básicos generales que consideran la mayoría de los penalistas modernos de la prueba en el proceso penal acusatorio son los siguientes.

- Carga material de la prueba corresponde a la parte acusadora.
- Sólo tiene el carácter de prueba las practicadas en el juicio oral, bajo los principios de inmediación, contradicción, publicidad e igualdad.
- Las pruebas deben de haber sido obtenidas por medios lícitos.
- Las pruebas requieren de cierta entidad, no bastando las conjeturas o las meras sospechas
- Existe libertad en los medios de prueba.
- Existe libre valoración de la prueba.

4.7.3. La responsabilidad en pedir pruebas

La responsabilidad en pedir pruebas, ordenarlas, practicarlas e incorporarlas en forma correcta dentro de un proceso, tiene como fin, que sirvan

como instrumentos científico y jurídico del que se deriva la necesidad de la actividad probatoria, con ellas se demostrará la verdad procesal que se va construyendo en el juicio oral, en base a la confrontación de todas las pruebas que se presentaren, para que al final el tribunal llegue a un convencimiento y emita su resolución plenamente fundada

4.7.4. La prueba es la columna vertebral del proceso.

La prueba además de ser la columna vertebral del proceso, es el medio que correctamente manejado trae como resultado la justa aplicación de la ley y la realización misma de la administración de justicia, porque sus resoluciones van a estar apegadas a una verdad que conocieron y palparon no sólo los involucrados sino también los encargados de administrar justicia, pudiendo analizarla, criticarla y confrontarla para descubrir así cuál es realmente la verdad.

4.7.5. Pruebas Valederas o lícitas

Tanto en la doctrina, en la legislaciones vigente y comparadas, la prueba en materia penal es sinónimo de garantía, y se exige que sean correctamente, pedidas, ordenadas, practicadas e incorporadas en juicios solamente y ante los Tribunales Penales, salvo las consideradas como pruebas urgentes o anticipos jurisdiccionales de prueba; además se condiciona su validez al hecho de que no sean obtenidas a través de medios como tortura, maltratos, coacciones, amenazas, engaños, inducción a la comisión del delito u otros medios corporales

o psíquicos que vulneren la voluntad del sujeto y que violan también los Derechos Humanos reconocidos por nuestra legislación y por instrumentos internacionales.

Toda Prueba que quebrante estas garantías, así como las constitucionales, no tendrá validez alguna para fundamentar la acusación o para producir la convicción del Tribunal en la sentencia, por más que el único medio para conseguirlas sea la violación de un derecho.

La Prueba debe tener relación con el objeto del proceso, es decir, ser pertinente, buscar o descubrir la perpetración del delito y la responsabilidad del acusado, en lo penal buscamos la valoración de un hecho concreto que ya ocurrió, pero con la limitación de respetar las garantías constitucionales y los Derechos Humanos de las partes que intervienen en el proceso.

4.7.6. La prueba ilícita

Es aquella que en sentido absoluto o relativo, es contraria a la forma establecida en la norma o va contra principios y garantías protegidos por el derecho positivo, que recoge además la protección contenida en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos. Muchos tratadistas consideran que una denominación más exacta de ella, no se refiere a prueba ilícita, sino a prueba obtenida por medios ilícitos, cuestión que también es considerada por nuestra legislación; por consiguiente podemos considerlas como limitaciones a los medios de prueba o limitaciones probatorias por tratarse de normas relativas a la admisibilidad o inadmisibilidad de pruebas. La prueba ilícita tiene íntima

relación con el concepto de medio de prueba prohibido o ilícito, que es aquel que proporciona elementos que permiten llegar a constatar la existencia de un hecho o la responsabilidad de un sujeto, pero que el ordenamiento jurídico lo prohíbe utilizar, por ser contrario a sus principios y garantías; es decir son pruebas obtenidas o utilizadas en contra de lo que señala la Ley y su consecuencia directa es la inadmisibilidad, sin importar de la clase de prueba.

Caracterizar La Prueba como ilícita u obtenida por medios ilícitos, va a variar de acuerdo a la legislación de cada país, en el nuestro hemos dicho ya que se le considera a la obtenida con violación a la Ley y a la Constitución, instrumentos normativos donde se consagran el debido proceso y la protección misma a las garantías del ciudadano, sobre todo en lo que involucra Derechos Humanos.

4.7.7. Las pruebas ilícitas pueden ser detectadas y examinadas en dos momentos procesales

4.7.7.1 En la etapa intermedia, durante la audiencia preliminar, éste es el momento en el que el Juez tiene mejor desempeño como garantizador del debido proceso; aquí se fijan las evidencias principales preprocesales o procesales que van a convertirse en el juicio, y es por ello que puede detectar si hay alguna prueba ilícita. En el sistema vigente, es difícil detectarlo, por que la prueba ya va preconstituida en un expediente

4.7.7.2. Al momento de dictar sentencia por parte del Tribunal Penal, luego de que se han presentado todas las pruebas de cargo y descargo, le corresponde al Tribunal analizarlas para ver cuáles le sirven para fundar su sentencia.

4.7.8. Efectos de las Pruebas Ilícitas

Es ilegal, por lo que no tendrá validez alguna, es nula e inadmisibile, sea Prueba para fundamentar la acusación o para llevar a convicción al Tribunal Penal.

Esta tacha de ilegalidad de las pruebas no implican solamente a los actos inmediatos con los que se viola la garantía constitucional, sino también a sus consecuencias, así Ricardo Vaca Andrade,(2004), de origen ecuatoriano, pone el siguiente ejemplo: "En una confesión del imputado receptada mediante tortura, confesión en la que menciona el lugar específico donde se encuentran determinados objetos que son parte del delito y que son incautados por las autoridades; pruebas que el momento de ser analizadas tendrán que ser desechadas por ilegales, ya que en cuanto a la confesión, ésta se logró a través de medios inadecuados y prohibidos y la incautación al ser consecuencia de la información inadmisibile también será nula" Esta tesis de causalidad de los elementos de prueba ilícitos, ha sido recogida por una buena parte de la doctrina y jurisprudencia internacionales, la jurisprudencia norteamericana la ha denominado como "tesis del fruto del árbol envenenado", mientras que otros como Maier, Julio B.J (195), la han llamado "regla de exclusión o la doctrina de

la fuente independiente", según la cual no puede aceptarse como válido que se utilicen pruebas directamente relacionadas con otros elementos de prueba ilícitos, para sustentar una posición contraria a la del imputado o acusado en el proceso penal.

4.7.9. Orden de Presentación de las Pruebas, según la doctrina

Las pruebas dentro del proceso penal deben ser producidas y presentadas en la etapa del juicio y ante los tribunales penales, para que ahí tanto las partes como los jueces puedan conocerlas, analizarlas, valorarlas y cuestionarlas, salvo lo que se refiere a pruebas urgentes o anticipos jurisdiccionales de prueba. Este es el momento en el que entran a regir con mayor magnitud los principios de oralidad, contradicción, inmediación, publicidad y concentración, que según la doctrina deben llevar el siguiente orden:

- a. Peritos.
- b Testigos
- c. Documentos, objetos y otros medios.
- d. Inspecciones personales y reconstrucción de la escena.

El procedimiento para la sustanciación de esta audiencia de juicio, establece un orden de presentación de las pruebas en el siguiente sentido:

- Testimonio del ofendido.
- Testimonio de los peritos solicitados por el Fiscal.
- Testimonio de los peritos solicitados por el acusador particular

- Testimonio de testigos pedidos por el Fiscal.
- Testimonio de los testigos pedidos por el acusador particular.
- Lectura de testimonios anticipados.
- Testimonio del acusado.
- Reconocimiento voluntario de objetos y vestigios por parte del acusado
- Testimonios de peritos pedidos por el defensor del acusado.
- Testimonio de los testigos pedidos por el defensor del acusado.
- Testigos solicitados en la audiencia
- Otras pruebas.

La presentación de pruebas no es rígida, esto es, en lo que se refiere a incorporar documentos u objetos, las partes pueden hacerlo en cualquier momento del juicio antes del debate, de acuerdo a lo que consideren oportuno; es decir, pueden incorporarlos en su intervención inicial o cuando se esté interrogando a los peritos, testigos, ofendido o acusado, luego de preguntarles sobre dichos documentos u objetos o hacerles reconocer. De la misma forma la Ley Adjetiva Penal reconoce el derecho del Presidente del Tribunal sin establecerle un momento para llamar a cualquier persona a que sea interrogada y ordenar que se exhiban ante el Tribunal documentos u objetos que éste crea necesarios para esclarecer el hecho que se investiga.

4.7.10. Anticipos de Prueba o Aseguramiento de pruebas prejudiciales

Aseguramiento de pruebas en nuestra legislación, en otras anticipo jurisdiccional de prueba que tiene un carácter siempre excepcional porque lo propio y natural es que las probanzas se practiquen directamente en el juicio oral, se introduce en el sistema procesal como una modalidad para asegurar elementos probatorios que por algunas circunstancias especiales, no pueden repetirse; realizarse o ser recibidos durante el juicio, pero que sin embargo, tienen el mismo valor de prueba que las presentadas en esa etapa. Generalmente estos anticipos de prueba se dan porque el testigo tenga que ausentarse del país y no sepa por cuanto tiempo o sea de forma indefinida, o porque exista el riesgo latente de que muera antes de que se realice la audiencia de juicio o caiga en incapacidad física o mental que impida receptar su testimonio con la misma nitidez que se requiere.

Por la trascendencia del acto y para no contrariar los principios mismos del juicio oral, sobre todo lo que se refiere a la contradicción, debe procurarse la participación de todas las partes en dicho acto, para que éstas puedan presenciar, analizar, cuestionar o impugnar todo aquello que estimen pertinente; ya que en caso de que no se les convoque estaríamos produciendo una prueba nula.

De acuerdo la doctrina, esta prueba será válida en el juicio siempre y cuando la persona que declaró no pueda asistir a tal audiencia porque falleció en fecha posterior a la declaración y anterior a la audiencia de juicio, porque es

imposible determinar su actual residencia o porque cayó en un estado de incapacidad física o mental que no le permite declarar nuevamente. Si no concurre alguna de éstas circunstancias, el testigo deberá dar su declaración en el juicio y ante el Tribunal, quedando sin valor alguno el anticipo de prueba recibido; mientras que si es aceptado, el momento de la audiencia deberá darse lectura para ser incorporado como prueba misma

4.7.11. Pruebas de acuerdo al debido proceso en un sistema acusatorio

Ahora con el Sistema Acusatorio, la prueba debe ser actuada en base a los principios constitucionales, respetándose las garantías del debido proceso, caso contrario, la actuación adolece de nulidad. La idea del nuevo sistema no es la de amparar al delincuente o impedir la investigación, como muchos lo pueden tomar; sino más bien promover una investigación justa, imparcial, sin condenar al sospechoso antes de averiguar la realidad de los hechos.

El fiscal busca evidencias que le ayuden a sustentar una tesis sobre el sospechoso y el hecho, en primer lugar, ver si es o no necesario que se inicie un proceso penal investigativo, y luego observar, si acusa o no al imputado del cometimiento de un determinado acto considerado por la Ley Penal como delito. Aquí, el fiscal investiga con el apoyo de La Policía Judicial y tiene la opción de acusar o abstenerse de hacerlo, dependiendo de los resultados de la investigación. Mientras tanto el Juez es un garantizador de los Derechos Constitucionales y las normas del debido proceso, es un depurador del proceso

que actúa previamente al juicio, sobre todo en la audiencia preliminar analizando todo lo que se ha actuado en la investigación fiscal, para ver si hay o no, procedimiento, competencia o prejudicialidad que afecten a la validez misma del proceso. El Tribunal, en tanto, es quien resuelve en base a la verdad procesal, a lo actuado y probado en la audiencia de juicio, donde la evidencia del Fiscal se convierte en prueba, analizando sobre todo si se comprobó o no suficientemente la existencia de la infracción y la responsabilidad penal del acusado.

En cuanto a la oralidad, ésta puede darse desde la investigación, porque ya no es necesario los autos, providencias o decretos para solicitar datos, antecedentes u otra información, ahora el Fiscal puede hacerlo verbalmente, por teléfono, fax, etc. obviamente salvo que se trate de limitación de derechos protegidos por la Constitución, (allanamiento, grabaciones, interferencias telefónicas, de correspondencia, vigilancias, etc.) el Juez Penal es el que tiene que autorizar la investigación de datos. La oralidad se manifiesta también en la audiencia previa, donde como ya lo hemos dicho, en líneas anteriores, se discute sobre los obstáculos prejudiciales, cuestiones de procedimiento y de competencia; además, el juez oralmente dice si hay llamamiento a juicio y por qué; las medidas cautelares personales se dan también oralmente, salvo cuestiones que tendrán que formalizarse por escrito como la prisión preventiva; Y por último, la oralidad se da eminentemente en la etapa del juicio.

La inmediación, según Zavala Baquerizo, (2002), es el contacto directo que toma el Juez o Tribunal con las partes procesales y con los terceros que intervienen en una u otra forma durante el desarrollo del proceso; es la forma de

entrar en relación directa con la prueba, con el medio de prueba y con el órgano de la prueba, (ejemplo, el medio de prueba es el testimonio, la prueba es su contenido y el órgano es el testigo) de manera que se puede valorar en forma integral. Éste es uno de los cambios fundamentales en el Sistema Acusatorio porque el Tribunal, ya no va a valorar una prueba que conoció y actuó otra persona, sino que llega a él por relación directa, es decir, va a conocer al testigo, perito, intérprete, traductor, etc. va a escucharlo, a ver la forma como declara; va a observar la prueba material, a palparla, a presenciar su reconocimiento, entre otros. Todo lo que le hace conocedor directo de los hechos y le va a ayudar a valorar la prueba en mejor forma porque no se remitirá simplemente a lo que leyó en un expediente. Aquí, lo ideal es que los miembros del Tribunal no lean el expediente que forma el Fiscal en la investigación, sino que a la audiencia de juicio vayan en cero y ahí conozcan todo, para que en base a eso tomen su resolución.

La contradicción se manifiesta en la posibilidad de una contra-examinación o contrainterrogatorio a la evidencia y a los testigos respectivamente; es un derecho que tiene la otra parte, para debatir la prueba que se presenta e incorpora. Sobre la evidencia puede atacarse a la forma como fue recogida y analizada por ejemplo, mientras que en lo que respecta a testigos y peritos, la contra parte puede comenzar con lo que algunos llaman la confrontación, es decir, la posibilidad de atacar no lo manifestado por el testigo o perito sino su credibilidad, ello involucra su experiencia, sus antecedentes ético profesionales, su desempeño en el pasado y en la actualidad, con el fin de

demostrar que se trata de un testigo que no merece credibilidad alguna y por tanto se lo anula o al menos se crea la duda, por ello es de suma importancia que quien presenta al testigo, primero lo venda ante el Tribunal, que trabaje sobre su credibilidad y luego sobre los hechos. En cuanto al contra interrogatorio sobre los hechos, generalmente las repreguntas formuladas exigen respuestas sumamente concretas, de sí o no, para no darle mayor opción al testigo de que se ponga a explicar las cosas

La publicidad se refiere en cuanto al derecho que tiene el imputado y el ofendido para acceder a todo el trámite y ser informados sobre el por qué de cada una de las actuaciones salvo audiencias de juicio en delitos sexuales y que tengan que ver con la seguridad del Estado.

Para los medios de comunicación hay acceso sobre el desarrollo del proceso y La Prueba, pero no les es permitido transmitir la audiencia de juicio. Algunos han considerado a la publicidad como la manera de democratizar el Proceso Penal y una forma de control social del público, respecto de las actuaciones de los funcionarios, se cree que a la faz de ese público interesado, es más difícil que impere la corrupción, pero lamentablemente la realidad nos ha demostrado que quien es corrupto, lo sigue siendo con o sin publicidad, la diferencia es que con ella se cuidan más y adquieren otros procedimientos o se valen de otros medios.

La concentración tiene como finalidad reunir todas las actividades procesales en la investigación, incluyendo las evidencias que en el momento procesal, oportuno, se transformarán en pruebas; de la misma forma la

presentación, incorporación y discusión de la prueba en la audiencia. El objetivo es que el proceso sea uno sólo, que se desarrolle sin interrupciones hasta que llegue a su fin, en una forma continua. Ello facilita el ejercicio de los demás principios, sobre todo la inmediación y la contradicción

La celeridad se da a través de la concentración, tratando de evitar incidentes que prolonguen sin razón el proceso.

Entrando al tema mismo de la forma de presentar la prueba tenemos que, una vez que se ha investigado y recogido la evidencia necesaria para llevar a una persona a juicio, hay que transformarla en prueba, de tal forma que sirva de sustento a nuestras alegaciones de culpabilidad o de inocencia del involucrado.

Así, tenemos, que primero, una vez que el Tribunal ha convocado a la audiencia de juicio, el Fiscal, acusador particular si lo hubiere y el defensor presentarán la lista de testigos, manifestando sus datos generales y dirección exacta, para que el presidente del Tribunal ordene su comparecencia y se los notifique oportunamente; de igual forma deben especificar las pruebas que quieren que se practique en la audiencia. Todo esto servirá al Tribunal de guía para el desarrollo mismo de la audiencia, manteniendo el orden de los testigos y de las pruebas.

Una vez instalada la audiencia, en sus exposiciones iniciales, el fiscal, el acusador particular y el defensor, terminarán solicitando la práctica de las pruebas que señalarán expresamente. El orden de su presentación será conforme a lo dispone la Ley Adjetiva Penal; es decir, luego de la exposición inicial del Fiscal, se recepta el testimonio del ofendido y pueden interrogarlo los

miembros del Tribunal y las partes, a continuación relata su exposición el acusador particular para posteriormente receptar los testimonios de los peritos y testigos solicitados por el fiscal y el acusador particular, tales testimonios se recibirán en el orden señalado en las listas que presentaron al tribunal antes de la audiencia de juicio y podrán ser contra interrogados por la parte contraria; luego se dará lectura a los testimonios anticipados y después declarará el acusado, quien a su vez puede reconocer voluntariamente objetos y vestigios de la infracción; posteriormente relata su exposición inicial el defensor y luego se reciben los testimonios solicitados por éste

Terminado esto el Presidente del Tribunal mandará llamar si lo hubieren, a testigos que no estaban incluidos en la lista pero que se solicitaron en la audiencia, existiendo también la posibilidad de que aquí se pida una ampliación de los testimonios rendidos de testigos o peritos. Por último el Tribunal puede solicitar otras pruebas como la recepción de nuevos testimonios o la exhibición de objetos o documentos que creyeren necesarios para esclarecer el hecho

Dice Zavala Baquerizo, (2002) " ..la inmediación de la prueba con el tribunal juzgador no se produce, pues basta que el fiscal presente ante el Tribunal lo practicado por él en la primera etapa del proceso, es decir, en la instrucción fiscal, para que el expediente adquiera el valor de prueba " según este autor la Ley debería decir que dichas investigaciones y pencias no sólo sean presentadas, sino también practicadas en el juicio, que de esta forma se solucionaría la confusión

Ahora, en cuanto a, qué pasaría si un perito muere o es imposible dar con su domicilio, no es que la diligencia efectuada queda sin efecto sino que tendría que nombrarse a unos nuevos peritos para que analicen, estudien y comparezcan a la audiencia de juicio a opinar sobre el informe emitido por el perito o los peritos desaparecidos. Tampoco resulta lógico ponernos en la posición extrema que toman algunos de estos defensores diciendo que si la prueba tiene que practicarse en la audiencia, eso representa que el perito vaya a hacer la autopsia o el reconocimiento ahí, a eso no se refiere la Ley, sino al sentido de ir a sustentar o sostener lo manifestado en el informe que consta en el documento, a reconocer y autenticar por ejemplo los instrumentos u objetos sobre los que hizo la experticia, a relatar la forma cómo los encontró, recogió, embolsó, reconociendo su firma o sus iniciales en el envase en que se haya guardado la evidencia, a contar los detalles y sobre todo a esclarecer cualquier duda que pudiera existir en las partes o el Tribunal; de manera especial, la terminología de los informes periciales

No debemos olvidar que hay documentos como las partidas del Registro Civil que basta con presentarlas para probar el estado civil de una persona, aquí no se requiere la presencia del Jefe del Registro Civil

En concreto, una vez admitida la evidencia hay que darle el valor de prueba presentándola en el juicio y esto se logra principalmente en el caso de las pericias e investigaciones con la presencia del experto que explique todo lo necesario al tribunal y, con los testigos, cuando los escuche el tribunal y aprecie

en forma original, inmediata y viva sus testimonios rendidos y la forma en que lo hicieron. Es decir, en todo momento de la audiencia de juicio prima la inmediación y con mayor razón respecto de la evidencia física y testimonial que ayudarán a probar la existencia de la infracción y la responsabilidad de quien la cometió.

En el Sistema Acusatorio el examen a los testigos y peritos deben hacerlo las partes, obviamente con la autorización del Presidente del Tribunal, quien califica las preguntas y permite o niega la contestación por parte del interrogado.

4.7.12. La Libre Valoración De La Prueba En El Proceso Penal Acusatorio

La valoración de la prueba constituye, indudablemente, una operación fundamental, de gran importancia en todo proceso y, más aún en el proceso penal, puesto que de ella depende que el tribunal llegue o no a una certeza; es decir va a determinar el carácter absolutorio o condenatorio de la sentencia para el acusado. Esta valoración de la prueba, como dice Ricardo Vaca Andrade,(2004), "tiene por objeto establecer la utilidad jurídica y legal de las diversas pruebas que se han incorporado al proceso penal En nuestra Ley Procesal, se produce en momentos precisos, como en la etapa intermedia, antes de que se dicte el auto, o después de la audiencia de juzgamiento; en el Juicio, como paso previo al momento de dictarse sentencia".

José García Falcón, (2002), en lo que se refiere a la valoración de la prueba dice que "Es una operación intelectual, destinada a establecer la eficacia

conviccional de los elementos de la prueba recibidos...es en este momento en donde el juez, no sólo pone al servicio de la justicia, su intelecto, su sabiduría y experiencia; sino sobre todo su honestidad".

Devis Echandia, (1988), por su parte, la califica de momento culminante y decisivo de la actividad probatoria, consistente en aquella operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que puede deducirse de su contenido. Mediante la misma, dice, "se trata de determinar la eficacia o influencia que los datos o elementos probatorios aportados al proceso, mediante los oportunos medios de prueba, tendrán en la formación de la convicción de juzgador"

Consecuentemente, tenemos que como lo dice García Falconí, (2002) "la prueba de cargo y descargo no habla por sí sola, está llena de detalles, de inconsistencias, concordancias, versiones y matices que arrojan diversos caracteres para valorarlas y para fundamentar la sentencia a dictarse, y que por ello la prueba debe ser necesaria, legal, oportuna, libre, controvertida y practicada en la etapa del juicio".

El ideal es que esta actividad intelectual que realiza el Órgano Jurisdiccional, deba coincidir con el fin mismo de la prueba propuesta y admitida; ya que en ocasiones sucede que se presenta una prueba con determinado objetivo y se la percibe en otro sentido, es decir, no cumple eficazmente su cometido, y, es ahí donde radica principalmente la labor de los abogados en el juicio oral, al examinarla, confrontarla y hasta valorarla por su cuenta el

momento de los debates, con la intención de que la prueba practicada tome su verdadero rumbo y guíe al Tribunal hacia la convicción.

La apreciación probatoria realmente no se da al final de la audiencia, sino que se inicia desde el momento en que el Tribunal entra en contacto con el medio de prueba, en virtud del principio de inmediación, salvo obviamente los anticipos de prueba. Desde este instante el juzgador irá formando su juicio acerca de la credibilidad y la eficacia de cada medio de prueba, para al final confrontar todas las pruebas receptadas, depurarlas y tomar una decisión, esto es valorarlas en conjunto para sentenciar en base a la convicción lograda luego de dicha valoración

El sistema de La Prueba Legal o tasada, como ha quedado dicho anteriormente, es aquella donde la ley procesal establece cuándo el Juez debe o no darse por convencido del acometimiento de una infracción y de la responsabilidad de un individuo; aquí involucra el cumplimiento o no de ciertas condiciones y es la ley la que señala el carácter y valor jurídico de las pruebas, además de la forma, número y tipo de hechos que se prueban.

El sistema de la libre valoración de la prueba o íntima convicción en cambio, es aquel donde la Ley no establece ninguna regla para la apreciación de las pruebas, el juez o tribunal es libre de convencerse según su íntimo parecer de la existencia o inexistencia de los hechos: así como de la responsabilidad del acusado, según como le hubiesen impactado las pruebas presentadas

Por último, el sistema de la sana crítica racional (que para legislaciones como la panameña este sistema es el de la libre convicción con la aplicación de

este método), señala que el Juez deberá valorar, las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica y el criterio racional; es decir, de acuerdo con las reglas de la lógica, de la psicología, de la sociología y de la experiencia. Aquí, el Juez o Tribunal se convence de los hechos y de la responsabilidad en base a las pruebas presentadas que son valoradas con libertad pero enmarcadas a dichas reglas. Como lo sostiene el autor Vaca Andrade, (2004) " .que las conclusiones a las que se llegue sean el fruto racional de las pruebas en las que se las apoye".

Tiene su razón de ser en el hecho de que el Tribunal tiene que fundamentar debidamente su decisión, explicando suficientemente, de conformidad a la garantía constitucional que ordena la motivación en toda resolución de poder público que afecte a las personas, y no simplemente fallar de tal o cual forma porque así lo cree o porque esa es su apreciación, la resolución tiene que fundarse en las pruebas válidas, presentadas e incorporadas al proceso en forma legal y oportuna.

El sistema de libre valoración de la prueba es intrínseco al proceso penal acusatorio y una exigencia del mismo, partiendo de la base que en tal sistema se trata de apreciar la actividad probatoria de los intervinientes sin que el Juez, como ha señalado la jurisprudencia alemana, "se encuentre vinculado a reglas probatorias, es decir, a disposiciones legales acerca de la eficacia de las pruebas ni a disposiciones que establezcan los presupuestos bajo los cuales un hecho debe considerarse acreditado"

En este sistema el Juez tiene libertad para alcanzar o no la convicción de un hecho en tanto no se cuestione máximas de experiencias generalmente reconocidas o se trate de decisiones absurdas o arbitrarias.

El Código Procesal Penal Colombiano recoge el sistema de libre valoración de la prueba en el artículo 297, en cuyo inciso 1º se encuentra la norma fundamental del mismo, en cuanto señala que:

“Los Tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados”. En esta norma se señala que los jueces tienen libertad de valoración, pero que esa libertad reconoce tres limitaciones. 1) los principios de la lógica, 2) las máximas de experiencias y 3) los conocimientos científicamente afianzados. Lo que me interesa resaltar, para lo que se dirá más adelante, es la idea que el legislador procesal le impone a la libre valoración del juez sólo esas limitaciones y no otras”

José Martínez Ríos, (2005) vinculado con el contenido transcrito del mismo Código relativa al grado de convicción que deberá alcanzar el Tribunal para dictar una sentencia condenatoria, el que reconoce que “dicha convicción debe alcanzarse con la apreciación libre que efectúe el Tribunal sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral”

4.7.13. El Estado o presunción de inocencia

Este estado o derecho a la presunción de inocencia radica en el respeto a la dignidad personal del imputado, por lo que se le reconoce durante todo el

proceso un estado jurídico de no culpabilidad respecto del delito que se le imputa, recogido en el artículo 2 de Proyecto del Código Procesal Penal de 1999 que al efecto señala que “p
movimiento incumbe a la acusación y, al estar la inocencia asistida por el postulado de su presunción hasta prueba en contrario, esa prueba contraria debe aportarla quien niega aquélla formulando la acusación, (*nulla accusatio sine probatione*).

Ello no excluye, por cierto, el derecho del imputado a acreditar su inocencia mediante la introducción de pruebas de descargos.

El juicio de culpabilidad deberá ser inducido o deducido de datos probatorios objetivos. Ciertos autores coinciden en que nunca se a deducido de presunciones que se pretendan inferir de la negativa expresa del imputado a colaborar con el proceso, ni de su silencio, ni de sus explicaciones insuficientes o mentirosas, o de otras situaciones similares.

Es por esto, que el principio de inocencia será vulnerado tanto por una sentencia condenatoria dictada sin la evidente y probada concurrencia de los extremos objetivos y subjetivos de la imputación, como también por la aplicación de figuras penales que repriman comportamientos penales inocuos sólo por que ellos permitan presumir la comisión (no probada) de un delito o su futura comisión (delito de sospecha), o que pongan implícita o expresamente en cabeza del acusado la carga de probar su inocencia

Señala José Martínez Ríos, (2005), que “sólo la convicción firme y fundada en pruebas de cargo legalmente obtenidas sobre la existencia del delito y la culpabilidad del acusado, permitirá que se aplique la pena prevista, pues sólo así habrá quedado destruido el principio de inocencia”.

Dicho de otra forma, para dar por destruida la inocencia será necesario que la acusación haya sido confirmada por un conjunto de pruebas de cargo concordantes con ella, no desvirtuadas por ninguna prueba de descargo, y que además descarten la posibilidad de alguna conclusión diferente o hipótesis en competencia, es decir, cuando las pruebas hagan inevitable la condena.

4.7.14. Las Presunciones en un Sistema Penal Acusatorio

Para José Martínez Ríos, (2005), “las presunciones son propias del sistema de prueba legal o tasada, de ninguna manera son o pueden ser consideradas un medio de prueba, como erróneamente se entiende desde antiguo en nuestra legislación. Es así como sería absolutamente inimaginable, por ejemplo, que una de las partes durante el juicio oral señalara que va a rendir su “prueba de presunciones”.

Se ha señalado que las presunciones son normas de *onus probandi*, o sea, normas que alteran las reglas generales sobre carga de la prueba, no obstante, parece más acertada aquella opinión que sostiene que ello no es exacto, en estricto rigor, puesto que las presunciones son normas sobre valoración de la prueba que son aplicadas por el juzgador al momento del pronunciamiento de la sentencia.

En efecto, las presunciones se enmarca dentro de lo que Ferrajoli Luigi, (1995), denomina “pruebas legales positivas” que son aquellas en presencia de las cuales la ley prescribe al juez que considere probada la hipótesis acusatoria aunque contraste su libre convicción.

Coinciden los tratadistas en opinión que las presunciones son naturales y coherente en un Sistema Inquisitivo y de prueba legal tasada, propia de un Derecho Penal máximo, cuyo objetivo es que ningún culpable quede impune (a diferencia del Derecho Penal mínimo cuyo objetivo es ningún inocente sea condenado), y en donde el legislador señala al Juez pormenorizada y detalladamente el valor que debe atribuir a cada medio de prueba y, en el caso de las presunciones, cuales son las conclusiones que tiene que deducir o inferir al probarse sus presupuestos.

Existe una contradicción insalvable existente entre la lógica y fundamentos de un sistema inquisitivo, en donde cabe y se encuadran las presunciones, y la de un Sistema Acusatorio en donde aquellas no tienen cabida

En efecto, el sistema de libre valoración de la prueba, el Juez tiene libertad para apreciar la prueba, en la medida que no contradiga los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados Pero se critica, por que el juez bajo determinados supuesto, está obligado a dar por establecidos ciertos hechos, entonces debemos de aceptar que el Juez perdió su libertad de valoración, puesto que es el Legislador quien está valorando la prueba, es éste quien hace un razonamiento lógico de

deducción y de inducción; y no el juzgador. Es el Legislador sentado en la silla del Juez quien valoró

En consecuencia, al aceptar una presunción en un proceso acusatorio implica pasar por sobre el artículo el artículo 207 del Proyecto del Código de 1999 y en el artículo 781 del Código vigente que establece la libertad de valoración por el Juez y sus límites, (dentro de las que no se señalan las presunciones)

Pero, además, en un sistema acusatorio un sujeto no podrá ser condenado, sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible, objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la Ley sobre la base de la prueba producida en el juicio oral deriva inequívocamente que es el Tribunal quien debe adquirir y formar la convicción, no el Legislador, es el tribunal quien libremente debe efectuar los razonamientos lógicos de inducción y de deducción; no el legislador.

Las presunciones, no tienen cabida en un Sistema Acusatorio, el juez “debe considerar” tal o cual cosa, con independencia de su convicción en cuanto si “realmente” sucedió de esa manera o no

Asimismo, el imperativo en orden a que la formación de la convicción del tribunal se funde en “la prueba producida en el juicio oral”, niega posibilidad a que la convicción se funde en presunciones establecidas por el Legislador.

La importancia de rechazar la posibilidad de que el Juez funde su sentencia en base a los imperativos de las presunciones cobra especial importancia en aquellos casos en que el Juez en virtud de la prueba producida en el juicio oral no tenga la convicción de que los hechos han ocurrido como lo sustenta la acusación, es decir, tenga duda razonable sobre la ocurrencia de los mismos, pero no se ha rendido prueba que desvirtúe las conclusiones a las que debe de arribar por causa de la presunción. Esta situación genera la disyuntiva de rechazar la presunción o aceptar su procedencia. Ahora si nos inclinamos por la última alternativa debemos aceptar una condena que no se ha producido sobre la base de la libre apreciación de la prueba y sobre la convicción del tribunal, elementos que, según hemos visto, están íntimamente ligados a la esencia de un sistema acusatorio del Proceso Penal.

4.8. PROPUESTAS DE REFORMA PARA LA AGILIZACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL EN PANAMÁ

Según la comisión encargada de este menester, consideró que la propuesta fue evaluada de acuerdo a criterios objetivos y efectivos, que promueven cambios estructurales, en periodos de corto plazo

En el Anteproyecto de Ley de agilización de la Justicia Penal de 2005,

“por la cual se dictan normas para la simplificación de los trámites y el impulso de los procesos penales”, tiene como objetivo adoptar disposiciones dirigidas al impulso de los procesos penales ordinarios, procurando la simplificación de trámites y la economía procesal, sin soslayar los derechos reconocidos a favor del imputado y de la víctima, como garantía de una administración de justicia expedita, eficaz, imparcial y con igualdad a las partes, tomando como el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada mediante ley 15 de 1977, integrada al bloque de la constitucionalidad, al igual que todos los otros convenios sobre Derechos Humanos aprobados por La República de Panamá, exigen garantizar un Proceso Penal ante autoridad competente, justo, imparcial, culminando en plazo razonable.

En el Anteproyecto de Ley, recomienda que los operadores de justicia tengan en cuenta los derechos del imputado y la víctima. La libertad es una garantía de los procesados y en la fase preparatoria o de instrucción sumarial, la detención preventiva solo corresponderá cuando existan exigencias excepcionales y, en el plenario, la aplicación de sanciones de prisión en centros penitenciarios será la última alternativa, cuando no se le conceda al Juez otras opciones. La víctima tiene derecho a ser informada y oída en todo el proceso penal, y en virtud del principio de igualdad de las partes, tienen los mismos derechos que el imputado.

4.8.1. Resumen de las Disposiciones Penales

Dentro de su sanciones contempla comunitario supervisado, no retribuido,

en obras comunitarias, que tendrá una duración entre 10 y 90 jornadas de trabajo y obliga al condenado a prestar jornadas diarias de trabajo físico o intelectual, no será menor de cuatro (4) horas y no podrá exceder de ocho (8) horas, de acuerdo al tipo de trabajo asignado, y se desarrollará en los lugares y horarios que determine el Juez o Tribunal correspondiente, ya sea en establecimientos públicos o en organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro con proyección social en la comunidad.

El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado y supervisado por la Institución del Estado correspondiente, que remitirá los reportes a la Dirección Nacional del Sistema Penitenciario, hasta tanto se cree la figura del Juez de Cumplimiento, la cual podrá establecer los convenios oportunos para tal fin y no se supeditará al logro de intereses económicos

Se confiere a los tribunales la facultad de suspender condicionalmente de oficio o a petición de parte, la ejecución de la pena cuya duración no exceda de tres (3) años de prisión.

El término de esta suspensión será de tres (3) a seis (6) años a partir de la fecha en que la sentencia quede ejecutoriada y atendida las circunstancias del hecho y la extensión de la pena impuesta. Cuando no procede la suspensión, puede reemplazarla por servicio comunitario supervisado o conversión a días multas. El artículo 77 del C. Penal vigente contiene esta proposición en el periodo de dos (2) años. La pena de prisión que no exceda de un año podrá ser

sustituida por la reprensión pública o privada, o por días multa no menor de 50 ni mayor de 150, el artículo 84 del C. P Vigente, las contiene en 25 y 75 días multas.

4.8.2. Inicio de la Acción Penal

Los procesos penales se tienen que iniciar con plena garantía de su defensa. Corresponde al Ministerio Público, en la fase plenaria, solicitar la absolución o demostrar en la audiencia la responsabilidad de los procesados llamados a juicio.

Toda norma legal que limite la libertad personal, el ejercicio de los poderes conferidos a los sujetos del proceso o que establezcan sanciones procesales será interpretada restrictivamente. En Caso de duda razonable se debe favorecer al reo.

Presentada la denuncia o la querella, el Juez o el Agente del Ministerio Público, tiene la obligación de informarle a las partes la existencia de los métodos alternos de solución y de los centros reconocidos, ya sea público o privado. De ser aceptada por las partes el Juez derivará el proceso al centro escogido por éstas. Sólo será aplicable a los delitos que admiten el desistimiento de la pretensión punitiva. Las partes podrán solicitar al Juez en cualquier momento o fase procesal que su causa sea ventilada, a través de los métodos alternos de solución de conflictos. El incumplimiento de los acuerdos logrados en

la mediación conlleva la continuación del Proceso Penal.

4.8.3. Terminación del Procesos por Desistimiento

A continuación transcribimos el artículo 21 del Anteproyecto Ley que modifica al Código Judicial

“Artículo 21: Se modifica el artículo 1967 del Código Judicial para que quede así

Artículo 1967. (1984-B) También podrá terminarse el proceso y ordenarse su archivo, en los delitos de retención indebida, por desistimiento de la persona ofendida, cuando el imputado remita las cuotas obrero-patronales o los descuentos voluntarios a la entidad correspondiente, antes de la audiencia preliminar.

También podrá terminarse el proceso por desistimiento, a través de la conciliación o mediación o cualquier otra forma alterna de resolución de conflictos y el perdón de la víctima en los delitos permitidos por la ley

En los casos de violencia doméstica y maltrato al niño, niña y adolescente se estará sujeto a las condiciones que establece el artículo 1966 del código judicial, para que opere el desistimiento”.

Las actuaciones de los Agentes del Ministerio Público podrán ser objetadas por las partes mediante incidente de controversia

El sumario deberá estar perfeccionado dentro de los cuatro meses siguientes a su iniciación o desde la aplicación de una medida cautelar restrictiva de la libertad personal, término que podrá prorrogarse hasta por dos meses más cuando sean varios los imputados o los hechos punibles.

En general, los delitos con pena mínima de cinco años de prisión, en cuyos procesos no existan vinculados, no se concluirá el sumario hasta tanto se

agote la investigación, previa autorización del Juez de la causa, el cual no podrá exceder a los tres años, luego de lo cual se ordenará el reemplazo de la medida cautelar.

4.8.4. Investigación de los hechos

A este respecto, el artículo 25 del proyecto modifica el artículo 2045 para que quede así.

“Artículo 2045. El funcionario de instrucción averiguará con toda claridad y exactitud las cualidades y circunstancias que constituyan la clase de delito conforme lo designa y clasifica el código penal”

Toda diligencia que requiera la participación del imputado se debe notificar por edicto a las partes. La inobservancia de lo anterior acarrea la nulidad de lo actuado. El edicto será desfijado transcurrida las 48 horas de su fijación.

4.8.5. Pruebas que puede hacer uso el funcionario de instrucción para comprobar los hechos

El hecho punible se comprueba con el examen que se haga por facultativo o peritos de las personas, huellas, documentos, rastros o señales que haya dejado el hecho, o con deposiciones de testigos, indicios, medios científicos o cualquier otro medio racional que sirva a la formación de la convicción del Juez, siempre que no estén expresamente prohibidos por la Ley,

ni violen Derechos Humanos ni sean contrarios a la moral o al orden público

En los casos de flagrancia, practicar requisas o registros en las ropas de las personas siempre que no lesionen la dignidad ni el pudor del sujeto

Dicha designación se efectuará en una diligencia donde se precisen las razones que motivan la realización de la intervención y señalará la persona de confianza del procesado que pueden participar en ella y el defensor del imputado.

4.8.6. Pruebas Prohibidas

No podrá utilizarse para la exploración del imputado, técnicas o pruebas clínicas tales como narcoanálisis, psicoanálisis, psicometría, hipnosis y otros semejantes que afecten la conciencia o la libertad del imputado, promesas, coacción o amenazas para obtener que el imputado declare, así como toda pregunta capciosa o sugestiva.

Serán admisibles las intervenciones corporales para la constatación de circunstancias de importancia para descubrir la verdad. Tales, como mínimas intervenciones para la extracción de sangre y otros fluidos o todo tipo de secreciones corporales, de piel, corte de uñas o cabellos, tomas de fotografías, huellas dactilares, constatación de tatuajes, deformaciones, alteraciones o defectos, palpaciones corporales y, en general, todas aquellas que no provoquen ningún perjuicio para la salud, siempre que sean autorizados por el

Tribunal

La preexistencia y propiedad de las cosas sustraídas, se podrá acreditar la deposición jurada del consorte, hijos, hermanos o quienes le prestan servicios personales a la víctima. A falta de otras pruebas en caso de turistas o personas que estén en tránsito se tendrá como pruebas la declaración jurada del interesado, la declaración indagatoria, mediante el uso de video conferencia o cualquiera otra tecnología similar.

El artículo que a continuación se transcribe ayuda a la agilización de los proceso y lo permite de la siguiente manera:

“Artículo 39. Se adiciona un artículo 2195a del Código Judicial para que quede así

Artículo 2195^a. Desde la diligencia de declaración indagatoria hasta antes de calificar la fase intermedia, el procesado podrá solicitar, por una sola vez, que se dicte sentencia anticipada cuando la prueba de la culpabilidad sea evidente, por tanto, si fuere necesario, podrá ampliar la indagatoria y practicar pruebas dentro de un plazo máximo de ocho días, entonces el expediente será remitido al Tribunal competente quien en un término de diez días hábiles dictará la sentencia de acuerdo a los hechos y circunstancias aceptadas, siempre que no hubiere violación de garantías fundamentales. En estos casos el procesado tendrá derecho a una disminución de una cuarta a una tercera parte de la pena por razón de haber aceptado su culpabilidad”.

4.8.7. Acto de Audiencia

La comisión investigadora presenta modificaciones y solicita la “aprobación de un nuevo Código de Procedimiento Penal, desvinculado de toda

relación con el Procedimiento Civil y actualizado con las nuevas teorías y corrientes doctrinales que sustentan el Sistema Acusatoria”; pero, a mi entender y al comparar lo que a continuación vamos a describir con un Sistema de Corte Acusatorio Puro, en donde el Juez pueda observar en el desarrollo de la audiencias las pruebas que incriminan al sindicado, no hay semejanza, el Sistema Acusatorio del Derecho Comparado que describimos en capítulos que siguen en este trabajo es diferente, y en este proyecto, todavía el Juez depende del sumario que no lo hacen en presencia de él ni de una u otra manera; el Juez depender de la información recopilada y posiblemente manipulado por el funcionario de instrucción sumarial, para mejor observación transcribimos el siguiente artículo del Proyecto del Código Penal:

“Artículo 40: Se reforma el artículo 2201.

Artículo 2201(2007-A): “Llegado el día y hora señalados, el Juez declarará abierta la sesión y hará leer por la Secretaría la Vista Fiscal enviada por el Ministerio Público y el escrito de oposición de la defensa, si lo hubiere.

Luego, el Juez concederá la palabra al representante del Ministerio Público, quien expondrá los resultados de la instrucción sumarial y los medios de prueba que justifiquen la solicitud contenida en La Vista Fiscal, y al defensor para que sustente su escrito de oposición, si lo hubiere

Si el imputado estuviere presente podrá solicitar se le interrogue sobre los cargos atribuidos, teniendo presente lo dispuesto en los Artículos 2237 y 2239 de este Código.

A continuación, el Juez concederá la palabra por una sola vez, y por un término no mayor de treinta minutos, al Ministerio Público, al querellante si lo hubiere y el defensor, para que formulen los alegatos que consideren convenientes antes de que el Tribunal resuelva el mérito

del sumario.

Cuando fueren varios imputados, el Ministerio Público puede disponer de una hora adicional por cada imputado

En casos dificultosos o de evidente complejidad, a solicitud de parte interesada el Juez podrá extender el periodo de alegatos hasta por un hora".

El Juez, después de concluido el período de alegatos, en la misma audiencia decidirá lo que corresponda en derecho, pero en ningún momento la norma exige que las pruebas deben ser practicadas en presencia de juzgador; por consiguiente, la convicción del Juez para comprobar el hecho punible y descubrir a los autores o partícipes, está atada al sumario realizado por otra persona diferente, que en la mayoría de las veces se enamoran de los casos y se parcializan en la investigación, trayendo como consecuencia el acúmulo de escritos sin ningún sentido jurídico que solo trae volumen para ocupar espacios en los archivos de oficinas

4.8.8. La Audiencia Preliminar

Para hacer uso de ese derecho tienen que estar de acuerdo el imputado o su defensor para pedir que el proceso se sustancie y decida en la audiencia preeliminar, cuando la investigación esté completa y la prueba resulte evidente.

Según el Proyecto de Ley, la solicitud podrá ser presentada en el acto de audiencia preeliminar, antes del inicio de la fase de alegatos; además, podrán presentar en el acto, testigos con el objeto de ser repreguntados o aquellos que,

habiendo sido aducidos durante el sumario, no pudieron recurrir a rendir declaración por causa previamente comprobada en el expediente. También podrán solicitar la recepción de testimonios que considere conducentes al juez, siempre y cuando, se encuentren presentes en el acto para evacuar la práctica probatoria.

El Juez podrá dictar la sentencia una vez concluidos los alegatos y el anuncio de la decisión tendrá efecto de notificación a las partes.

4.8.9. Flagante Delito

El artículo que a continuación se transcribe señala el procedimiento a seguir en aquellos casos en se sorprenda a una persona en flagante delito y lo establece de la siguiente manera:

“Artículo 58. Se modifica el artículo 2530 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2530. Cuando el imputado sea sorprendido en flagrante delito, esté detenido preventivamente o sujeto a otra medida cautelar personal y exista al menos confesión de su parte, el funcionario de instrucción remitirá inmediatamente el expediente con la vista fiscal, solicitando el proceso directo.

En los casos que se sigan mediante el proceso directo la pena será disminuida entre una sexta parte y una tercera parte luego de considerar todas las circunstancias del hecho punible.

Tanto el imputado como su defensor podrán solicitar este procedimiento”

En todos estos procedimientos existe una decisión de enjuiciamiento y un

juzgamiento de antemano. Así lo señal el artículo siguiente.

“Artículo 59: Se reforma el artículo 2532 para que quede así:

Artículo 2532: La solicitud acompañada del sumario y de las demás piezas procesales, se presentará al juez quien determinará si se trata de situación de flagrancia y si existe confesión en cuyo caso dictará inmediatamente el auto de enjuiciamiento”.

CAPÍTULO QUINTO:
DERECHO COMPARADO

5.1. DOBLE INSTANCIA PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN EL SISTEMA ACUSATORIO COLOMBIANO.

Jaime Granados Peña (2002), considera importante reformas constitucionales referentes a los procesos penales de los miembros del Congreso de La República de Colombia especialmente el sistema de procesamiento criminal para adecuarlo a los principios del sistema acusatorio y, además, garantizar el respeto del principio de la doble instancia, en consecuencia, deberá:

“Replantearse el rol, hoy en día inexistente, de la Fiscalía General en este tipo de procesos, reestructurar el funcionamiento de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia para poder garantizar la doble instancia ”

“La concentración de funciones que se presenta hoy en día en La Corte Suprema de Justicia vulnera abiertamente las garantías de imparcialidad e independencia en la toma de decisiones judiciales que afectan los derechos fundamentales del procesado, ya que en el evento de procesos penales que se surtan en contra de los miembros del Congreso, la Corte es quien impulsa la investigación teniendo que evaluar la hipótesis que ella misma ha elaborado como investigador, examinando por sí misma el peso de su propia investigación y decidiendo sobre los derechos del imputado, al tiempo que es quien dirige el proceso como juez”.

A este respecto existen diferentes Tratados Internacionales relativos a los Derechos Humanos consagran expresamente el principio de la doble instancia, de ahí que Panamá debe seguir estos tipos de procedimientos para evitar que empresas poderosas, económicamente, obtengan fallos favorables por

considerar La Constitución Vigente que los fallos de la Corte no se pueden revisar

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 Art. 14 num. 5 (consagra el derecho de toda persona a que el fallo condenatorio y la pena que se le hayan impuesto, sean sometidos a un Tribunal Superior)

Convención Interamericana sobre Derechos Humano, de 1969, Art. 8, num 2, lit. H (toda persona tiene derecho de recurrir el fallo ante un Juez o Tribunal Superior; además, existe un consenso a nivel internacional en la materia.

Los estatutos penales internacionales de tribunales especiales o ad hoc consagran esta garantía de la doble instancia; por ejemplo, el estatuto de roma de 1998, se refiere a la Sala de Apelaciones en Primera y Segunda Instancia Art. 64, 74, 81 num. 1, lit. b, y 83, estatuto del tribunal internacional para la antigua yugoslavia de 1991, consagra el principio de la doble instancia, a través del establecimiento de una Cámara de Apelaciones Art. 25 "

De ahí que resulte necesario implementar un sistema de procesamiento criminal que permita cumplir materialmente las disposiciones contenidas en esos instrumentos internacionales, de manera que la parte dogmática de la Constitución encuentre realmente un correlativo desarrollo en su parte orgánica

5.2. LA REGULACIÓN DE LA DOBLE INSTANCIA EN EL DERECHO COMPARADO

En España se adoptó un Sistema Mixto con tendencia acusatoria. Mientras que en Colombia se mantiene un sistema acusatorio, ya que el Tribunal Supremo es el encargado de investigar y juzgar a los Senadores y Diputados, el Ministerio Fiscal (Fiscalía General de la Nación en Colombia) interviene en el proceso como requirente, y además, hace parte del proceso un funcionario instructor, quien es uno de los magistrados de la Corte Suprema, cuyas funciones equivalen a las de un Juez de Instrucción, a quien le está prohibido participar en el juicio.

En Alemania, la legislación ordena el nombramiento de un Juez Instructor en la Sala Penal del Tribunal Supremo Federal, lo cual hace referencia al principio acusatorio. Las decisiones de este Juez son recurribles en segunda instancia en los casos establecidos por la Ley.

En Venezuela establece un Sistema Acusatorio y el Principio de la Doble Instancia, a través de los artículos 377 a 381 del Código de Procedimiento Penal de 1998. Las decisiones del Tribunal Ordinario son recurribles ante La Corte de Apelaciones.

Argentina: La Ley 24.050 de 1991, art. 6 establece que uno de los ministros (de Colombia se les llama magistrados), miembro de La Corte

Suprema, será nombrado Juez de Instrucción para los casos de competencia originaria de La Corte, dicho Juez de Instrucción no podrá intervenir en el juicio.

Uruguay, en la Constitución divide el sistema: Si se trata de un delito común no grave, el sistema es de antejuicio; el Congreso determina el desafuero del congresista y éste se somete a la jurisdicción ordinaria, (artículo 114 Superior).

Si se trata de "violación de la Constitución colombiana u otros delitos graves", la Cámara de Representantes acusa ante el Senado, sin importar a qué cámara pertenece el acusado (artículo 93 Constitucional).

Artículo propuesto en el proyecto de Acto 237 Cámara y 12 Senado Colombiano de 2002.

Artículo 234. La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y se compondrá del número impar de magistrados que determine la ley. Ésta dividirá la Corte en salas, señalará a cada una de ellas los asuntos que deba conocer separadamente y determinará aquellos en que deba intervenir la Corte en pleno.

La ley determinará el número de magistrados que conforman la Sala Penal, lo mismo que la forma como se dividirá para garantizar el control de garantía constitucional respecto de las medidas judiciales limitativas de derechos fundamentales que se toman dentro del proceso penal.

Artículo 235. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia

1. "Actuar como Tribunal de Casación en el estudio de sentencias ejecutoriadas. La ley podrá determinar mecanismos sumarios de respuesta con el fin de lograr la unificación de la jurisprudencia, la protección de las garantías fundamentales y la restauración del derecho vulnerado.

2. Juzgar al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174, por cualquier hecho punible que se les impute, conforme al artículo 175 numerales 2º y 3º.

3. Juzgar mediante la Sala Penal, en primera instancia, previa acusación del Fiscal General de la Nación, a los miembros del Congreso de la República. Senadores y Representantes a la Cámara.

4. Juzgar mediante la Sala Penal, en primera instancia, previa acusación del Fiscal General de la Nación, al Vicepresidente de la República, a los ministros del despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales; a los directores de los departamentos administrativos, al Auditor General, al Contralor General de la República, a los embajadores y jefes de misión diplomática o consular, a los gobernadores, a los magistrados de tribunales y a los generales y almirantes de la fuerza pública, por los hechos punibles que se les imputen.

5. Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el derecho internacional.

6. Darse su propio reglamento.

7. Las demás atribuciones que señale la ley.

Parágrafo. Cuando los funcionarios antes enumerados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero sólo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas. La intervención de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia podrá ejercerla el Fiscal General de la Nación o, por delegación suya, el Vicefiscal General o los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia."

5.3. EL CONTROL JUDICIAL EN ACTUACIONES QUE AFECTEN LA LIBERTAD Y EL DERECHO A LA INTIMIDAD

Un cambio fundamental que introduce la reforma Colombiana, es que el fiscal no podrá decretar órdenes de captura, sino que deberá solicitarlas ante el Juez de control de garantías, con fundamento en elementos probatorios. Frente a interceptaciones, allanamientos y demás injerencias en los derechos del sindicado, la decisión se toma por parte de La Fiscalía, pero sobre ella existirán dos controles: en primer lugar, un control al interior de la misma Fiscalía (que podría ser similar al diseñado para el ejercicio del principio de oportunidad), y además, un control judicial posterior, que debe darse dentro de las 36 horas siguientes a la toma de la decisión. El funcionamiento orgánico de este control sin exceder este término es todo un reto para el sistema, pero la ventaja de su inclusión constitucional es que la inobservancia de este término producirá la nulidad de pleno derecho de las pruebas que por medio de la injerencia gubernamental se obtengan, además de los cargos disciplinarios que resulten contra el responsable de la dilación. Ello garantiza que el término se respetará.

Análisis del control posterior de las medidas que afectan el Derecho a la Intimidad, en el Derecho Comparado

El Pacto Europeo de Derechos Humanos (art. 8) considera que “no podrá haber injerencia de autoridad pública en la vida privada o familiar, en el domicilio o la correspondencia, a menos que se trate de una autorización prevista en la Ley y que constituya una medida necesaria en una sociedad democrática”.

El Desarrollo jurisprudencial destaca lo importante y decisivo no es la

intervención judicial previa, sino la existencia del Control Judicial que impida la arbitrariedad y garantice la tutela efectiva del derecho.

5.4. JURISPRUDENCIA MÁS RECIENTE DE LA CORTE EUROPEA

En materia de interceptación de correspondencia, registros, allanamientos e interceptaciones, resulta válido adelantar por parte de la autoridad administrativa o del Ministerio Fiscal sin mediar orden judicial previa, así lo han aceptado los siguientes países en fallos recientes Suiza, Reino Unido, Alemania, Italia.

La evolución de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos ha permitido y validado el adelantamiento de registros y allanamientos sin previa orden judicial, (Coolidge vs. New Hampshire (1971)) Casos: Stop and Frisk [Terry vs. Ohio (1968)]; registros en aeropuertos [United States vs. Mendenhall (1980)]; registros incidentales al arresto [Chimel vs. California (1969)], registros administrativos en casos como incendios o problemas sanitarios (Michigan vs. Tyler (1968))

La "Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea" adoptado el 2 de octubre de 2000 en el seno de la Unión Europea, no hace alusión a la cláusula de reserva judicial como mecanismo de protección del Derecho a la Intimidad.

Artículos propuestos en el Proyecto Penal Colombiano autoriza a la

Fiscalía General de la Nación para:

“1. Solicitar al juez de control de garantías el proferimiento de las medidas que aseguren la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal
Excepcionalmente, la ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar capturas administrativas. En estos casos, el juez de control de garantías lo realizará a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.

El juez de control de garantías, no podrá ser en ningún caso, el juez de conocimiento.

2. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones En estos eventos, el juez de control de garantías deberá realizarlo, a más tardar, dentro de los treinta y seis (36) horas siguientes”.

5.5 LA CREACIÓN DE LA FIGURA DEL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS

El Dr. Luis Paulino Mora Mora en 1991 consideraba que “el Juez debe autorizar todas las medidas de coerción, la intervención de los interesados en el procedimiento (factor civil, demandado civil, querellante), así como las decisiones que extinguen o imposibilitan el ejercicio de la acción penal o civil. También deben ser celebrados por el Juez los actos definitivos e irreproducible”.

Jaime Granados Peña destaca como aspectos importantes de la reforma Colombiana de 2002, lo que a continuación se transcribe:

“lo relativo al establecimiento de la función de control de

garantías en cabeza de los jueces ordinarios que laboran en lo penal. Si bien es cierto que, a diferencia del modelo chileno, no se piensa crear una nueva categoría de funcionarios judiciales, no es menos evidente que el desarrollo de la función de control de garantías implicaría un enorme incremento de la actividad jurisdiccional, especialmente, a nivel de los jueces municipales y de circuito penal”.

“Para los asuntos que tienen como instancia de juzgamiento un juzgado de circuito, la función de jueces de garantías la ejercerán los Jueces Municipales de manera que la audiencia de alzada sea de competencia de los Jueces de Circuito.

Los asuntos de competencia de los Juzgados del Distrito, cuando el proceso en primera instancia se lleve a cabo ante los Jueces de Distrito, los jueces de garantías serán los de circuito, y el recurso de apelación será de competencia de los Jueces del Distrito

Los asuntos de competencia de la Corte Suprema de Justicia

En los casos en los que la Corte sea la encargada de juzgar, el control de garantías lo ejercerá los Jueces de Distrito y la apelación estará a cargo del Tribunal (Es necesario modificar este aspecto en el Proyecto de Acto Legislativo)

2. Referencias al Derecho Comparado de la figura del Juez de Garantías”.

En la Comisión de seguimiento de la Reforma Procesal Chilena, en octubre 2001, se sugirió que se eliminara la figura de los jueces de garantía, entendida como funcionarios distintos a los demás jueces, y se propuso que la función que estos ejercían pasara a la competencia de los demás jueces, quienes ejercerían esta función mediante una mecánica basada en la rotación

Artículo propuesto en el Proyecto de Acto 237 Cámara y 12 Senado de 2002.

Artículo 250. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, (...)

“1. Solicitar al juez de control de garantías las medidas que aseguren la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, las que procuren la conservación de la prueba y la protección de la comunidad; así mismos aquellas necesarias para la asistencia inmediata a las víctimas y hacer efectivo el restablecimiento del derecho.

Excepcionalmente, la ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar capturas administrativas. En estos casos, el juez de control de garantías lo realizará a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.

El juez de control de garantías, no podrá ser en ningún caso, el juez de conocimiento

Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos eventos, el juez de control de garantías efectuará el control posterior respectivo, a más tardar, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes contadas a partir de su conocimiento Solicitar al juez de control de garantías la autorización para acusar.”

5.6. LA INTRODUCCIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

Con la finalidad de hacer más partícipe a las víctimas en el Proceso Penal, y de cumplir con todos los postulados que caracterizan un sistema acusatorio, se ha planteado la introducción del Principio de Oportunidad. De acuerdo con este postulado, no toda noticia criminis que dé mérito para acusar, será llevado hasta el juicio Obviamente no pretendemos que ésta sea una

determinación discrecional del Fiscal, con lo cual se abstendría de acusar sin control. Debe haber una reglamentación legal, y debe diseñarse un control al interior de la Fiscalía que apruebe la decisión del Fiscal de no acusar, sobre todo en algunos casos particulares como los delitos sin víctima

5.7. LA RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS

Resulta complejo el tema de los recursos que proceden en contra de las providencias. Desde el punto de vista de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, los únicos recursos que la Ley está obligada a regular son los que proceden contra la sentencia condenatoria, y los medios de control (que no necesariamente tienen que ser recursos en sentido estricto) cuando se priva a la persona de la libertad. Si se prevé la posibilidad de interponer recursos contra demasiadas decisiones, aumentará la dilación del proceso sin contribuir al esclarecimiento de la verdad procesal. Por otra parte, aunque no sea mandatorio por los instrumentos internacionales mencionados, debe haber siempre recursos contra las decisiones que involucren pruebas

La acusación no tendrá recursos, la sentencia absolutoria tampoco, en respeto del principio del *ne bis in idem*.

5.8 LA AUDIENCIA PREPARATORIA

De otra parte, la realización de la audiencia preparatoria como antesala del juicio oral corresponderá a los jueces de conocimiento, similarmente a lo que ocurre hoy; con todo, se espera un mayor desarrollo del principio de

concentración en esta etapa, por cuanto las peticiones probatorias y de nulidades serían verdaderamente orales.

5.9 LA ORALIDAD DEL JUICIO

Si bien, la fase procesal que más afectada se verá con el cambio es la de instrucción, en Colombia existe el juicio oral normativamente; pero, en la práctica, no tiene nada que ver con la verdadera oralidad. En este sentido, deben canalizarse esfuerzos con el fin de que los jueces entiendan la oralidad en su verdadera dimensión.

En primer lugar, los fiscales están acostumbrados a que en la etapa de investigación recaudan únicamente la prueba necesaria para acusar, y pretenden que se despliegue todo el resto de la labor probatoria durante la etapa de juicio, con la obvia dilación del proceso que esto produce y convirtiendo al Juez en el director de la investigación, en esta fase procesal. Si bien la prueba que se requiere para acusar no debe ser nunca la misma que se requiere para condenar, debe enfatizar en el hecho de que la etapa de investigación es para eso, para que la Fiscalía busque los elementos probatorios que necesita introducir al debate. En otras palabras, antes de que empiece la etapa de juicio, incluso antes de decidirse por la acusación, el fiscal ya debe tener en mente todos los elementos probatorios de cargo que desfilarán en la audiencia.

En segundo lugar, debe atenderse al calendario judicial, con el fin de desarrollar el principio de concentración de la prueba. Dicho principio no se

cumple cuando una audiencia en curso se aplaza por meses. No se pretende que la etapa de juicio se agote en una sola sesión, es evidente que es necesario suspender las sesiones, pero un juicio debe desarrollarse en sesiones seguidas, es decir, fijadas para días consecutivos, en lugar de aplazarlas para fechas lejanas.

La Corte Europea de Derechos Humanos, tutela con gran firmeza el derecho de quien se encuentre privado de su libertad, a tener un juicio en un tiempo razonable (o a ser liberado mientras se dicta sentencia.) De igual manera, la Convención Europea consagra el derecho a una audiencia ante el tribunal competente en un tiempo razonable. El primero implica el derecho a gozar de un sistema ágil que evite demoras que puedan perjudicar al interesado, mientras que el segundo, implica el derecho a acceder a la justicia

Al respecto, lo invitamos a ver los dos últimos pronunciamientos de la Corte Europea de derechos Humanos: Caso kalashnikov vs. Rusia, del 15 de julio de 2002; Caso Västberga Taxi Aktiebolag y Vulic vs. Suecia, de julio 23 de 2002

La idea es que con la implementación de la oralidad y la concentración, aspectos esenciales en la introducción de un sistema acusatorio, se logre una mayor agilidad y una reducción de los tiempos procesales, de manera que el derecho de los sindicados y procesados a un juicio en un tiempo razonable, goce de una protección real

Entre otras funciones del Juez dentro de las tareas de dosificación punitiva éste deberá apoyarse en informes de especialistas (trabajadores sociales, expertos en penología, psicólogos, etc), los cuales se rendirán luego de emitido el sentido del fallo judicial o veredicto y antes de la redacción de la sentencia condenatoria.

En ese mismo orden de ideas, habrá que fortalecer las funciones de los jueces de ejecución de penas, pues, el procedimiento será oral y deberá contar con el apoyo de funcionarios expertos en el seguimiento del cumplimiento de la condena, en especial si ésta es alternativa.

5.10. EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE DEFENSORÍA PÚBLICA

Los colombianos consideran que debido a las características descritas, el Proceso Acusatorio, este exige de los abogados defensores mucha más capacidad y profesionalismo. Frente a países, como Panamá y Centroamérica con notables problemas de pobreza, ello significa un reto particular para el Sistema de Defensoría Pública, ya que las personas carecen de los medios para costear su propia defensa, más aún si esta defensa debe estar a la altura de un ente investigador realmente profesional.

Al respecto se ha pronunciado la Corte Europea de Derechos Humanos, en los más recientes fallos, caso Ezeh y Connors vs Reino Unido del 15 de julio de 2002; y Meftah y otros vs. Francia del 26 de julio de 2002), que un Sistema

Acusatorio tiene que contener garantías fundamentales del sindicado representado a través de la defensa, permitiendo que dichas garantías se encuentre permeada por todos los aspectos que hacen parte de dicha garantías, como lo es el derecho a ser asistido por un traductor, a que la formulación de la imputación sea completa, es decir integrada con todos los indicios que la justifican, de forma que el imputado tenga la posibilidad de refutarlos, que la acusación sea notificada oportunamente, de manera expresa y formal, entre otras.

5.11. EL IMPACTO DE LA REFORMA EN LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIANA DEDICADA A LA INVESTIGACIÓN

El cambio fundamental que se propone es hacia una Fiscalía investigativa, esto es, que no tome decisiones que hagan tránsito a cosa juzgada, contra las cuales proceden recursos, esto es, que tengan las características de decisiones judiciales. En consecuencia, por carecer de estas funciones, no existe el expediente oficial en la etapa investigativa, por lo cual no hay control de las resoluciones que emite el fiscal encargado del caso por parte de su superior. En otras palabras, no habrá recursos en contra de las resoluciones de la Fiscalía, porque en esta etapa aún no hay proceso penal como tal.

Consecuencialmente, se producirá un cambio radical en la labor de quienes conforman el grupo de apoyo del Fiscal. En general, las personas que trabajan tanto en las fiscalías como en los organismos que apoyan la labor

investigativa (Cuerpo Técnico de Investigación, Policía Judicial, etc) no tendrán que dedicarse a labores documentales (memoriales, resoluciones, citaciones, etc), pues, no habrá expediente en esta etapa. Por ello, estas personas se podrán dedicar al trabajo investigativo en sentido estricto, recolección de pruebas, etc Para una implementación inicial del sistema no haría falta, en principio, aumentar el número de funcionarios de apoyo del fiscal, ya que sería viable aprovechar la nómina que actualmente se encuentra vinculada a la Fiscalía y los organismos de apoyo. Lo que sí debe variar sustancialmente, con el fin de garantizar la permanente comunicación de los miembros del equipo, es el Sistema que se usa para darle asistencia al fiscal: el grupo de apoyo respectivo debe estar a cargo del coordinador de la unidad, con el fin de que no sea necesario librar un oficio y esperar su respuesta para obtener un grupo de apoyo, sino que ello lo tramitaría directamente el coordinador de la unidad especializada, mediante la confección de una agenda de trabajo que congloba todos los fiscales y todos los auxiliares de la unidad.

Según el Sistema Acusatorio no existe Proceso Penal durante la investigación, ya que en esta etapa el trabajo fundamental consiste en la búsqueda de información. Por ello, el fiscal tendrá que redirigir sus esfuerzos, ya no se concentrará en contestar las solicitudes de los sujetos procesales, sino en orientar a su equipo investigativo en la búsqueda de esa información con miras a su eventual utilidad dentro de un proceso penal, coordinar el trabajo de la policía judicial, valorar la madurez de la información dirigida a la acusación, con el fin de

llegar hasta la audiencia pública. Debe resaltarse que despojar al fiscal de la labor de confeccionar un expediente, responder y decidir por escrito y todo lo que ello implica, le deja mucho más tiempo para la consecución de información que eventualmente se convertirá en prueba de cargo, una vez fortalecida en el debate público. Por ello, no solamente se conseguirá más material probatorio, sino que el fiscal será capaz de cumplir con los términos legales impuestos a la fase de instrucción.

5.12 EL MISMO FISCAL SERÁ EL QUE ACTÚE EN LA INVESTIGACIÓN Y EN EL JUICIO

El fiscal que dirige la investigación será el mismo que soporte la acusación en la etapa de juzgamiento. A este respecto también existen otros sistemas, en los cuales el fiscal es relevado para la etapa pública. Conociendo la experiencia colombiana, no parece muy conveniente este esquema, ya que nadie mejor que quien sustanció el proceso para defender su propio trabajo, además quien dirigió la investigación recuerda los detalles y pormenores que nadie más conoce y que pueden ser aprovechados en el juicio. En todo caso, los fiscales deben reportar su trabajo permanentemente, previendo la posibilidad de faltas involuntarias.

5.13. LA DISTRIBUCIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA FISCALÍA.

Frente a la distribución de las fiscalías, los penalistas Colombianos consideran prudente mantener las unidades especializadas

Frente a su fortalecimiento se ha propuesto que de acuerdo con la estructura jerarquizada que existe hoy en día, pueda haber una autonomía al interior de la institución, que permita una mecánica en dónde los superiores den instrucciones y directrices a los demás.

5.14. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS FISCALÍAS EN EL DERECHO COMPARADO

En Alemania: La ley orgánica de los Tribunales de 1975, estableció que la Fiscalía es una autoridad de la justicia estructurada jerárquicamente. Sus funciones son ejercidas por el Procurador General Federal, quien a su vez está subordinado al control, la dirección del Ministerio Federal de Justicia, quien se encuentra facultado para dar instrucciones a los Fiscales Federales.

Para Francia: al interior de la Fiscalía se encuentran los llamados fiscales de sala, quienes se encuentran subordinados jerárquicamente y pueden recibir instrucciones o directrices por parte de sus superiores o, incluso, ser reemplazados en cualquier momento.

Estados Unidos de América y Puerto Rico: Régimen de Estado federal - Department of Justice (Federal) o las District Attorneys (D.A.) Federales y Estatales La tendencia es la existencia de estructuras jerarquizadas, pues reciben instrucciones

Tribunal Penal para ex Yugoslavia: El Fiscal General según el estatuto en

su artículo 16 es independiente, dirige todas las investigaciones que establece el poder de dirección jerarquizada en cabeza de aquel y de su asistente.

5.15. LA CADENA DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS

El tema de la cadena de custodia es crítico en todos los sistemas latinoamericanos. Se ha despreciado el hecho de que un juicio justo debe garantizar que el elemento que pretende convertirse en prueba es efectivamente aquél que fue recaudado en su momento, que no ha sido sustituido o alterado.

Los penalistas colombianos consideran que debe idearse un esquema que supere las dificultades de identificación y almacenamiento que actualmente existen, porque la conservación de los elementos probatorios hasta la audiencia pública significa el éxito de las investigaciones con prueba técnica. La dirección del sistema debe estar a cargo de la Fiscalía, pero la Ley debe fijar las pautas que deben seguirse para que la Policía Judicial las cumpla.

En ningún caso, el Juez de garantías podrá intervenir en el desarrollo de la cadena de custodia, salvo para verificar que ésta exista y se haya manejado correctamente. No puede haber una intervención mayor por parte del juez de garantías, ya que esto llevaría a convertirlo en Juez de conocimiento, tampoco podrá dar orientaciones sobre la instrucción, no podrá decretar pruebas de oficio, celebrar audiencias no pedidas, es decir, ultrapetita

5.16. LA POLICÍA JUDICIAL

De conformidad con las prescripciones contenidas en la Carta Política, artículos 250-3, el Estado colombiano ejerce el monopolio de la Acción Penal por conducto de la Fiscalía General de la Nación para el debido desarrollo de esa responsabilidad, al ente acusador se le confía, entre otras, la misión de dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que estén a cargo de la Policía Nacional o de los demás organismos que defina la ley

El artículo 33 de la Ley de Policía en relación a la dirección, coordinación y control de las funciones de policía judicial señala lo que a continuación se transcribe:

“El Fiscal General de la Nación o sus delegados tienen a su cargo dirigir, coordinar y controlar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional, demás organismos previstos en la Ley y los restantes entes públicos a los cuales de manera transitoria el Fiscal General les haya atribuido tales funciones, todas las cuales ejercerá con arreglo a la ley, de manera permanente, especial o transitoria directamente o por conducto de los organismos que ésta señale

La omisión en el cumplimiento de las órdenes, directrices, orientaciones y términos que imparta la Fiscalía para el cumplimiento de las funciones de policía judicial, constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, penal y civil del infractor

El Fiscal General de la Nación, bajo su responsabilidad, separará en forma inmediata de las funciones de policía judicial al servidor público que omita el cumplimiento de tales órdenes, directrices, orientaciones y términos. Si tal servidor no es funcionario o empleado de la Fiscalía, el Fiscal que dirija la investigación lo pondrá a disposición de su nominador quien iniciará el proceso disciplinario correspondiente, sin perjuicio de las demás investigaciones

a que haya lugar.

PARÁGRAFO. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo la estructura y funciones de Policía Judicial de la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con lo señalado por el artículo 277 de la Constitución Política”.

Señala la Corte Constitucional colombiana, que el artículo 33 se encarga de conceder algunas facultades que, no sólo son de naturaleza disciplinaria, sino que se convierten en instrumento efectivo para que el fiscal general de la Nación pueda ejercer las labores de dirección y coordinación de la policía judicial, de forma tal que los responsables de investigar y acusar conozcan y puedan decidir oportunamente acerca de las gestiones que se adelanten respecto de un asunto en particular.

La omisión en el cumplimiento de las órdenes, directrices, orientaciones y términos que imparta la Fiscalía para el cumplimiento de las funciones de policía judicial, constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, penal y civil del infractor.

Las decisiones disciplinarias que al respecto adopte el fiscal general, siempre deberán respetar el derecho fundamental de defensa y de contradicción, integrantes del debido proceso, el cual es aplicable tanto a los asuntos de orden penal como, en este caso, a los administrativos

En el Sistema Acusatorio propuesto, Gustavo Morales Marín, (1992), sostenía que “ si los fiscales, los defensores y los jueces no están despiertos,

es decir, si no están formados profesionalmente para desempeñar su función dentro del sistema acusatorio, entonces, la voz del derecho queda desvalda y lejana, como las inaccesibles voces de los sueños”.

Consideran los colombianos que el sistema actual permite concluir que es necesaria la modificación del mismo, la modernización del sistema y por tanto la adopción de un sistema de justicia penal en el cual quede afirmado el ideal democrático y se consolide un eficaz control social acerca de la función.

En respuesta a este anhelo, consideramos que el proyecto del Código Penal Panameño, debe contener y distinguir, claramente, las actividades de acusador, acusado y juez. El acusador demanda la intervención del juez con la finalidad de que imponga la pena que corresponde al acusado. Este, a su turno, se opone a la pretensión del acusador y demanda del juez una decisión favorable a su interés. Por tanto, entre acusador y acusado se establece una relación jurídica en virtud de la cual el primero pretende que el segundo sea sometido a una pena. El juez, luego de escuchar a ambas partes por igual, decide lo que sea justo según su convicción sobre la verdad de lo alegado y probado en el juicio.

Los tratadistas penales sostienen que el Proceso Acusatorio contemporáneo debe fundamentarse en los principios que comprenden el de la legalidad del juez, que se refiere tanto al juez profesional como a los jurados, pues ambos surgen de la creación legal. El de imparcialidad, que tiene fundamento en la equidad, esto es, en la justicia del caso concreto. El juzgador, por tanto, debe desprenderse de las consideraciones subjetivas. No puede ser

parte, ni personalmente, ni en nombre del Estado. Juzga con base en lo alegado y probado, sin tener en cuenta ninguna otra consideración.

No puede existir proceso sin un actor que lo promueva, sin la acusación formulada por la parte acusadora. La desconcentración de funciones, en el proceso acusatorio, entre la defensa y juzgamiento, son atribuidas a órganos independientes; la primera al titular del ejercicio de la acción penal quien, para ejercerla, necesita investigar. La segunda se atribuye al acusado y la tercera al titular del órgano jurisdiccional penal.

La controversia o contradicción es consubstancial al proceso acusatorio; las partes presentan sus afirmaciones y sus pruebas. Cada una lleva su investigación de las pruebas, que presenta ante al juzgador. De esta manera se conocen los dos aspectos de la averiguación y, por tanto, la investigación resulta de doble vía.

La igualdad de las partes en el proceso acusatorio significa que estas deben estar provistas de las mismas facultades y oportunidades. El juzgador, además, debe oír de igual manera a ambas partes. Esta igualdad debe ser cualitativa y cuantitativamente, privilegios y ventajas para una parte, violan los principios de garantías fundamentales reconocidos en la Constitución, Leyes y Doctrinas. Por esto es necesario fortalecer la defensoría pública pues el Estado debe garantizar el derecho de los ciudadanos a contar con una defensa técnica.

El respeto a la dignidad humana, consiste en el reconocimiento de que el acusado es una persona, esto es, un sujeto de derechos, con misión moral y

jamás como un objeto o un medio. Significa respeto y consideración hacia las opiniones y prácticas ajenas.

La defensa obligatoria, como derecho a ejercerla personal y directamente, o por medio de un apoderado; debe tratarse de una actuación dinámica y substancial.

La verdad histórica, debe fundarse en la reconstrucción figurada, pero verdadera del hecho cuya comisión se atribuye al acusado; por tanto, la averiguación debe descubrir todos los hechos que sirven de base a esa reconstrucción.

La convicción reflexiva debe examinar por parte del juez, concienzudamente todo el material procesal aportado por las partes. Por eso en la sentencia debe señalar claramente las razones y los motivos en que funda su convicción.

El in dubio pro reo, significa que si el juzgador no llega a obtener la convicción reflexiva, con base en las pruebas aducidas, sobre la responsabilidad del acusado, debe absolverlo. Como se estima en el proceso anglo norteamericano, el Juez debe estar convencido de la culpabilidad, más allá de toda duda razonable.

En el proceso acusatorio, la acusación delimita el objeto del debate judicial. El condenado o absuelto no puede ser acusado ni juzgado, nuevamente, por el mismo hecho en que se fundó la primera acusación, según el principio non bis in ídem

El Proceso Penal acusatorio es siempre público; en consecuencia, está caracterizado por la publicidad.

En el Proceso Acusatorio, la acusación con la cual se inicia el proceso es escrita Incluso la investigación previa a la formulación de la acusación y a la vista pública, puede ser en forma sucinta, escrita Pero el juzgamiento, que es propiamente el proceso judicial, es oral y público

El Sistema Acusatorio, entendido en la dimensión propuesta, ha de comprenderse como el derecho que efectivamente asegura la justicia, mediante un proceso que garantice la protección a la víctima, su acceso a conocer la verdad, a obtener el restablecimiento de sus bienes afectados, el resarcimiento de los perjuicios, la oportunidad al imputado para ejercer la defensa en plano de igualdad frente al ejercicio severo, profesional, especializado de los fiscales, cuya función y misión es la de investigar los delitos y descubrir a sus autores, y solo ella, para expresarlo en lenguaje de moda oficial. investigar, investigar e investigar; su actividad va a concentrarse en el trabajo de campo, acompañando a los especialistas en policía judicial en las técnicas de laboratorio, a los científicos forenses, dactiloscopistas, grafólogos, a los que con precisión aportarán el acervo de evidencias, frente al juez para que se constituyan en prueba irrefutable de las acusaciones que se formulen con el objeto de que se juzgue y condene a los responsables de las conductas punibles, conforme a lo establecido en un sistema acusatorio moderno.

Ahora queda el reto del diseño del proceso de implementación, para lo cual debe dirigirse la mirada a los países latinoamericanos que han dado el paso

de reforma, y aprender de sus aciertos y de sus desaciertos, pues las expectativas sobre los resultados del nuevo esquema son inmensas. Ninguno de nosotros, jueces, fiscales, abogados, estudiantes, puede ser inferior al compromiso con el país, que demanda una justicia pronta y cumplida, garantista, cara al público, en juicio oral concentrado y contradictorio. Si queremos la paz debemos alcanzar una justicia sólida y alcanzada, su consolidación sólo se cumple con la excelencia.

5.17. AMNISTÍA INTERNACIONAL LA EJECUCIÓN INMINENTE DE ABU-ALI ABDUR'RAHMAN ESTADOS UNIDOS 3 DE JUNIO DE 2003

Un miembro del jurado en el proceso seguido contra Abu-Ali Abdur' Rahman en 1987. Declaración jurada, realizada el 26 de mayo del 2001 manifestó lo siguiente:

“Lo que me inquieta fundamentalmente es que se nos ocultara toda esta información cuando teníamos que tomar una decisión de la que dependía la vida de este hombre. Es una decisión muy difícil y considero que se nos debería haber facilitado toda la información.”

En junio del 2000, la Universidad de Colombia publicó un estudio pionero sobre el sistema de aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos. El estudio, basado en casos de pena de muerte de un periodo que abarcaba 23 años, concluyó que el sistema estaba plagado de errores graves y que las cortes de apelación habían detectado errores que exigían una reparación judicial en

casí siete de cada diez casos. Según el estudio, las causas más frecuentes de esos errores fueron la actuación de “abogados defensores deplorablemente incompetentes que ni siquiera buscaron y manifiestamente pasaron por alto pruebas importantes de que el acusado era inocente o no merecía la muerte» y de «agentes de policía o fiscales que descubrieron pruebas de este tipo pero las eliminaron, continuando con el ocultamiento al jurado”.

El estudio planteaba serias dudas sobre la capacidad las cortes para detectar todos los errores de esta naturaleza. El caso de Abu-Ali Abdur’Rahman, sobre el que pende la amenaza de ejecución inminente a manos de los verdugos estatales, es ilustrativo a este respecto

Este hombre de 52 años, de ascendencia mixta negra e indígena estadounidense, lleva 16 años en el pabellón de los condenados a muerte en Tennessee Llegó allí por decisión de los 12 miembros del jurado, tras un juicio caracterizado por una asistencia letrada inadecuada y alegaciones de conducta indebida del fiscal

Si uno de los jurados hubiera votado a favor de la cadena perpetua, éste hubiera sido el resultado Sabiendo ahora que se les ocultaron pruebas exculpatorias y atenuantes hace 16 años, ocho de los miembros del jurado del juicio contra Abu-Ali Abdur’Rahman han firmado declaraciones juradas en las que manifiestan claramente que ya no están seguros de que su veredicto al determinar la pena fuera correcto. No obstante, salvo que sus abogados consigan que las cortes dicten una suspensión de la ejecución o que el

gobernador del estado lo indulte, Abdur'Rahman será ejecutado mediante inyección letal el 18 de junio del 2003

Las posibilidades de que triunfe la primera opción son escasas, si tenemos en cuenta los tecnicismos legales y de procedimiento que el estado ha invocado con éxito para evitar que las cortes de apelación revisen el caso en su totalidad. En abril del 2002, la Corte Suprema de Estados Unidos dictó una suspensión de la ejecución de Abu-Ali Abdur'Rahman 36 horas antes del momento en el que debía llevarse a cabo, a fin de estudiar la posibilidad de que las denuncias de conducta indebida del fiscal fueran examinadas por tribunales de instancia inferior. Tras una vista en la que se examinaron cuestiones jurídicas francamente esotéricas se podría perdonar a cualquier lego que, tras asistir durante una hora a tal examen, no se hubiera dado cuenta de que la vida de un hombre dependía de su resultado. La Corte Suprema anunció, que su decisión de estudiar el caso había sido imprudente y desestimó el recurso de apelación.

Se fijó una nueva fecha para la ejecución y un nuevo gobernador tiene ante sí una petición de indulto de Abu-Ali Abdur'Rahman. Phil Bredesen, asumió el cargo de gobernador del estado en el 2003, es partidario de la pena de muerte, pero sabe que «cualquier presunto delincuente tiene derecho al debido proceso legal». Durante los procesos de apelación, varios jueces han manifestado que el juicio contra Abu-Ali Abdur'Rahman careció de las debidas garantías procesales, principalmente a causa de su inadecuada defensa. Es una triste ironía que Abu-Ali Abdur'Rahman corra peligro de ser ejecutado en el año

en que se conmemora el 40 aniversario de la histórica resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos que estableció que “el derecho de un acusado indigente sometido a juicio penal a obtener asistencia letrada es un derecho fundamental connatural a la justicia procesal” El abogado defensor de Abu-Ali Abdur’Rahman ni siquiera presentó una petición para que se declarase indigente a su cliente ni solicitó a la corte fondos para llevar a cabo una investigación o para peritos, lo que constituyó un error importante, en palabras de un juez federal que ha calificado el caso de “error judicial”

El ejecutivo debe actuar ante un error judicial. El gobernador Bredesen no puede, en conciencia, basarse en la decisión tomada por el jurado al determinar la condena. Debe conmutar esta pena de muerte en bien de la imparcialidad, la decencia y la reputación de su cargo, de su estado y de su país



En lo referente a las normas internacionales y pena de muerte por ejemplo la Comisión Derechos Humanos de las Naciones Unidas en los años de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 consideraron que “La abolición de la pena de muerte contribuye a elevar la dignidad humana y desarrollar progresivamente los derechos humanos” El caso de Abu-Ali Abdur’Rahman

cuestiona una vez más el compromiso de Estados Unidos con las normas internacionales de justicia y decencia.

5.17.1. PRUEBAS PARA LA CONDENA CAPITAL

Las Salvaguardias de las Naciones Unidas también establecen lo siguiente: “sólo se podrá imponer la pena capital cuando la culpabilidad del acusado se base en pruebas claras y convincentes, sin que quepa la posibilidad de una explicación diferente de los hechos”. Existen dudas residuales sobre la culpabilidad de Abu-Áli Abdur’Rahman. El fiscal del caso escribió también en el mismo memorando interno elaborado antes del juicio en el que hizo constar la existencia de un informe pericial potencialmente exculpatario, que “no se trata de un caso claro en materia de culpabilidad”

5.17.2. FUNCIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS FISCALES

El caso se ha visto salpicado por diversas denuncias de conducta indebida del fiscal, incluida la relacionada con el informe pericial antes citado

Las Directrices de las Naciones Unidas sobre la función de los fiscales establece que: “Los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los Derechos Humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del Sistema de Justicia Penal” También exigen a los fiscales que eviten todo tipo de discriminación En este caso, como en muchos otros surgidos en Estados Unidos a lo largo de los

años, existen pruebas de que la selección del jurado estuvo enturbiada por las tácticas racialmente discriminatorias del Fiscal.

5.17.3. PRUEBAS DOCUMENTALES QUE DESCONOCIERON LOS JURADOS

Los miembros del jurado tampoco tuvieron conocimiento de que Abdur'Rahman tenía un historial clínico de problemas mentales, tales como el trastorno de estrés postraumático, posible consecuencia de los espantosos abusos sufridos en la infancia y de los abusos sufridos en prisión. En el informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias no sólo se ha establecido que en todos los casos se deben respetar las salvaguardias y las debidas garantías del proceso, tanto en la etapa anterior al juicio como durante el juicio propiamente tal, con arreglo a lo dispuesto en diversos instrumentos internacionales, sino que también deben tenerse en cuenta todas las circunstancias atenuantes.

En diversas resoluciones, la más reciente de ellas de fecha 17 de abril del 2003, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha instado repetidamente a todos los países retencionistas a que no impongan o ejecuten la pena de muerte en ningún caso en que el acusado «sufra una forma de trastorno mental». En su resolución de abril del 2003, la Comisión manifestó su preocupación porque «varios países, al imponer la pena de muerte no tienen en cuenta las salvaguardias que garantizan la protección de los derechos de los condenados a

la pena de muerte» Estados Unidos es uno de esos países y éste es uno de esos casos.

En general, al revisar las peticiones de hábeas corpus de los presos condenados por un estado, las cortes federales de Estados Unidos pueden no examinar los asuntos que pretenden la revocación de una sentencia o condena si esos asuntos no se ventilaron en las instancias estatales. El hecho de no presentar una demanda en los procedimientos anteriores dará lugar a quebrantamiento de forma y las cortes de apelación no estudiarán el fondo del asunto

En la Opinión discrepante del Juez Birch (1998) señaló que tratándose de un caso de pena de muerte, es claramente deshonesto reflexionar sobre nuestros errores, declarar que tenemos las manos atadas y, seguir permitiendo la ejecución de Abdur'Rahman. Nuestra obligación es luchar con tesón para conseguir un resultado justo»

Otra de las pruebas que desconoció el jurado fue que Patrick Daniels murió apuñalado el 17 de febrero de 1986, con un cuchillo de su propia cocina, en el apartamento de Nashville en el que vivía y al que habían acudido Devalle Miller y Abu-Ali Abdur'Rahman. Éstos eran miembros del *Southeastern Gospel Ministry* (SGM), Organización Cristiana que, entre otras cosas, lucha contra el abuso de drogas en la comunidad negra del norte de Nashville. La organización

pensaba que Patrick Daniels había vendido drogas a menores y adultos del barrio en su apartamento. Según se dijo, Miller y Abdur'Rahman acudieron al domicilio de Patrick Daniels con la intención de asustarlo para que abandonara esa actividad y llevaban pistolas descargadas proporcionadas por los líderes del SGM, quienes también les ayudaron tras el crimen

Se encontraban asimismo en el apartamento Norma Norman y sus dos hijos de corta edad. La mujer fue apuñalada, pero logró sobrevivir (los niños estuvieron encerrados en otra habitación durante la agresión). Norma Norman no pudo especificar cuál de los dos hombres había usado el cuchillo, ya que tanto a ella como Patrick Daniels los ataron y les vendaron los ojos con cinta adhesiva antes del apuñalamiento.

Dos días después, Abu-Ali Abdur'Rahman, que a la sazón se llamaba James Lee Jones, fue detenido. Devalle Miller huyó del estado y no fue detenido hasta más de un año después en Pensilvania.

A Abu-Ali Abdur'Rahman lo juzgaron por asesinato en julio de 1987. En esa fecha, Devalle Miller se había convertido en el testigo esencial de la fiscalía, y era la única persona que podía precisar si Abdur'Rahman era el agresor. Inicialmente se habían presentado contra él, cargos de asesinato en primer grado, agresión con intento de homicidio y robo, por lo que se enfrentaba a una posible pena de muerte o de prisión durante al menos 90 años, sin posibilidad de obtener la libertad condicional. Sin embargo, antes del juicio, el fiscal del condado de Davidson hizo un trato con él a cambio de su testimonio, con arreglo

al cual se declaró culpable de asesinato en segundo grado y de robo a mano armada. Seis años después, quedaría en libertad condicional.

5.17.4. PREPARACIÓN DE TESTIGOS

En la oficina del Fiscal General del Distrito, Vigésimo Distrito Judicial, en relación a las directrices del sistema de aplicación de la pena de muerte publicadas el 18 de octubre del 2001, es digno de destacar que el fiscal pasó 13 horas con Devalle Miller durante la semana previa al juicio, lo que contrasta con el poco tiempo del que dispuso el abogado defensor para la preparación de testigos para el juicio. La escasa fiabilidad del testimonio de los acusados por el mismo delito queda reflejada en las normas recientemente adoptadas por la fiscalía del condado de Davidson. En ellas se estipula que "no se pedirá la pena de muerte en los casos en los que las pruebas consistan en el testimonio no corroborado de un único testigo presencial o en la cooperación de un cómplice u otro individuo acusado por el mismo delito". Si esta norma hubiera existido en 1987, es probable que el fiscal ni siquiera hubiese podido pedir la pena de muerte para Abu-Ali Abdur'Rahman.

5.17.5. PRUEBAS PARA EXCLUIR JURADOS Y PEDIR LA PENA CAPITAL

Abdur'Rahman fue uno de los siete acusados condenados en casos de pena capital entre 1978 y 1987 en el condado de Davidson, jurisdicción en la que el 23 por ciento de la población es de raza negra, cuya pena fue decidida

por jurado. Los siete acusados eran de raza negra El jurado en la causa contra Abu-Ali Abdur-Rahman estaba compuesto por 11 blancos y un negro

Existen pruebas de que la fiscalía excluyó a los candidatos negros al jurado en razón de su raza En las notas del fiscal relativas a la selección del jurado se clasificaba a los posibles miembros del jurado en una escala de 1 a 4, en función de sus probabilidades de estar a favor de las tesis de la acusación.

En una resolución de febrero del 2003 sobre un caso de pena de muerte, la Corte Suprema de Estados Unidos encontró indicios evidentes de discriminación racial en la selección del jurado y manifestó por mayoría que La suposición de que la raza constituyó un factor influyente, está corroborada por el hecho de que los fiscales indicaron la raza de cada posible miembro del jurado en sus fichas correspondientes

También se dejó constancia de la raza de la persona, lo que en sí mismo indica que la raza era importante para el Fiscal. Se excluyó a uno de los candidatos negros a pesar de habérselo clasificado con el mismo grado de apoyo a las tesis de la fiscalía que cinco de los candidatos blancos que se seleccionaron para el jurado y con un grado superior al de otros cinco candidatos blancos que asimismo fueron elegidos Al impugnarse esta decisión, el fiscal adujo como motivo neutro, ajeno a la raza, que el posible candidato negro había dado muestras de ser una persona sin formación y no muy comunicativa. El Fiscal no había hecho ninguna anotación al respecto sobre este posible miembro del jurado Sí que las había hecho en el caso de uno de los

candidatos blancos, al que se calificó de tonto y no muy inteligente, que fue seleccionado para formar parte del jurado

Uno de los motivos que adujo el fiscal para excluir a otra candidata negra fue que esta mujer dio “respuestas cortas y enigmáticas” y que “evitaba la mirada directa” del fiscal. Se seleccionó por lo menos a dos candidatos blancos de los que el fiscal había anotado que no eran comunicativos y que respondían a las preguntas con dificultad.

El Juez Birch de la Corte Suprema de Tennessee escribiría en el año 2002 que “las respuestas de esta candidata negra. eran comprensibles ante preguntas complejas y tendenciosas formuladas por la fiscalía, algunas de las cuales ocuparon un párrafo o más en las actas”. En vista del distinto trato de que, al parecer, fueron objeto los distintos candidatos al jurado, el Juez puso en duda que los motivos esgrimidos por la fiscalía para excluir a esta candidata negra fueran “sinceros, ya que podía tratarse de meros pretextos”. No obstante, la mayoría de los jueces desestimaron la apelación

Una vez seleccionado el jurado, el juicio duró tres días. El segundo día, el 14 de julio de 1987, el jurado condenó a Abu-Ali Abdur’Rahman por el asesinato de Patrick Daniels. La declaración inaugural del abogado defensor constó de tres párrafos que ocupan una sola página en la transcripción del juicio. La defensa no llamó a declarar a ningún testigo. El 15 de julio, la fase de determinación de la pena duró menos de un día, incluidas la declaración inaugural, las conclusiones finales, las instrucciones al jurado y sus

deliberaciones. Los 12 miembros del jurado votaron unánimemente a favor de la pena de muerte

En el informe que resume el documento titulado ESTADOS UNIDOS No será en nombre del jurado: La ejecución inminente de Abu-Ali Abdur'Rahman (Índice AI. AMR 51/075/2003/s) publicado por Amnistía Internacional en junio del 2003, señala lo siguiente:

“Si Abu-Ali Abdur'Rahman se hubiese ejecutado según estaba previsto, se convertiría en el segundo preso –el primero de raza negra– ejecutado en Tennessee desde 1960 (el estado reanudó las ejecuciones en abril del 2000 dando muerte a Robert Glen Coe) Desde 1909 hasta el momento de redactar este informe, se han producido más de 135 ejecuciones en Tennessee Dos tercios (90) de los reos eran de raza negra. De los 25 presos ejecutados que fueron juzgados en el condado de Davidson, (el 80 por ciento) eran negros”.

Todd Campbell, Juez Federal de Distrito, abril de 1998, consideraba que la actuación de la defensa en la fase de determinación de la pena se debe a que La defensa tenía un contenido pasmosamente breve y adolecía de falta de calidad y cantidad

En la sentencia que se dictó en el caso de Strickland vs Washington, (1984), se dejó sentado que en Estados Unidos, para que prospere una apelación basada en la asistencia letrada inadecuada, el acusado no sólo debe mostrar la ineficacia del abogado defensor, sino que ésta predispuso negativamente el resultado del juicio Es una exigencia muy difícil de satisfacer,

especialmente si se tiene en cuenta que el examen judicial de la actuación de los letrados debe realizarse con gran deferencia y estar marcado por una firme presunción de que su conducta se inserta en el amplio marco de lo que se considera asistencia profesional razonable

5.17.6. TESTIMONIOS

El único Juez del caso de Abu-Ali Abdur'Rahman que ha escuchado el testimonio directo de todos los testigos a los que no se convocó en el juicio original concluyó en términos inequívocos que debía anularse la condena a muerte. Después de oír el testimonio de 20 testigos en el transcurso de la vista probatoria de dos semanas de duración que tuvo lugar en febrero de 1998, el Juez Federal de Distrito Todd Campbell concluyó que Abu-Ali Abdur'Rahman se había visto seriamente perjudicado por una asistencia letrada totalmente ineficaz durante la vista de determinación de la pena celebrada 11 años antes. El Juez Federal hizo constar que los dos abogados defensores que testificaron en la vista admitieron la mayor parte de la deficiencias denunciadas.

5.17.7. OPINIÓN DEL JUEZ CAMPBELL SOBRE LA PRUEBAS DOCUMENTALES

El Juez Campbell (1998), escribió que estaba convencido de que.

“De haber presentado la defensa las otras pruebas de los antecedentes e historial de problemas mentales del demandante, existe una probabilidad más que razonable de que al menos un miembro del jurado hubiera votado en

favor de una pena de cadena perpetua en lugar de en favor de la pena capital. Sólo hace falta que un miembro del jurado piense que las pruebas atenuantes [...] son más convincentes que las circunstancias agravantes establecidas por el fiscal. En la fase de determinación de la pena del demandante, la defensa no presentó ninguna prueba atenuante, por lo que no es de extrañar que el jurado optara por la pena de muerte.

No se trata aquí de un caso en el que la defensa recopilara y presentara pruebas atenuantes importantes pero simplemente no pudiera obtenerlas todas. Se trata de un caso en el que no se presentó ante el jurado ninguna de las pruebas atenuantes, pese a su disponibilidad y abundancia. El abogado defensor fue sumamente ineficaz y, debido a ello, el demandante no contó con las garantías procesales constitucionales]

La Corte no llega a esta conclusión con ligereza. La Corte es consciente de la importancia de la soberanía del estado de Tennessee y de la necesidad de respetar la certeza y el carácter definitivo de las sentencias judiciales. Esta Corte no tiene interés en cuestionar las decisiones de las cortes del estado. Pero la naturaleza abrumadora de las pruebas presentadas ante ella, una parte importante de las cuales no se presentó ante el jurado o las cortes del estado, y la ausencia casi total de argumentación por la defensa en la vista de determinación de la pena del demandante, obliga a la Corte a sacar la conclusión de que la condena a muerte no puede mantenerse”

Sin embargo, la condena a muerte se ha mantenido. En septiembre del 2000, una junta de tres Jueces de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito anuló la decisión dictada por el Juez Campbell en 1998 y restituyó la condena a muerte, alegando que Abdur'Rahman no había demostrado que se había visto perjudicado por la ineficacia de su abogado. Uno de los tres jueces discrepó enérgicamente de esta decisión, citando que la defensa había sido constitucionalmente ineficaz durante la fase de imposición de la pena debido a que no hizo el mínimo esfuerzo por investigar o presentar las pruebas

atenuantes disponibles El Juez de Circuito Cole opinó que la conducta del abogado menoscabó de tal forma el funcionamiento correcto del Sistema Acusatorio que no puede pensarse que el resultado de la vista de determinación de la pena produjera un resultado justo. Los otros dos jueces que votaron a favor de restituir la pena de muerte eran, según un escrito de la apelación fechado en diciembre del 2001, dos de los jueces más conservadores del Sexto Circuito que habían votado sin excepción en contra de conceder reparación en todos los casos de pena capital en los que habían participado Corte de Apelaciones del Sexto Circuito, 13 de septiembre del 2000.

Los abogados de Abu-Ali Abdur'Rahman solicitaron la celebración de una nueva vista ante el pleno de 12 Jueces del Sexto Circuito, en lugar de ante una Junta de tres Jueces Se cree que la Corte votó a favor de la nueva vista por seis votos contra uno y que cinco Jueces se abstuvieron, al contarse las abstenciones como votos en contra, se consideró que el resultado era de empate a seis votos y se denegó el recurso.

En enero del 2002, un Juez de La Corte Suprema de Tennessee hizo constar que ni siquiera los dos Jueces del Sexto Circuito una escueta mayoría que habían votado a favor de reinstaurar la condena a muerte habían rebatido seriamente la conclusión de que Abdur'Rahman había recibido una asistencia letrada deficiente. El Juez Adolpho Birch añadió "Ciertamente no parece coherente con las nociones viscerales de imparcialidad y justicia que este estado imponga la pena máxima e irreversible de la muerte a un hombre cuya oportunidad de defenderse ante un tribunal se vio comprometida por la ineptitud

demostrada de sus abogados. Por su causa, el jurado nunca tuvo conocimiento de ninguna de las pruebas de enfermedad mental y de graves abusos que Abdur'Rahman podía haber presentado en el juicio como atenuantes". El Juez Birch concluyó haciendo constar en acta que el gobernador de Tennessee debía conmutar la condena de muerte.

Atenuantes que el jurado no conocía.

"La fiscalía puede haber proporcionado información engañosa, pero era mi obligación investigar el caso. Los errores del caso se deben a mi falta de investigación y a mi falta de preparación"

Abogado defensor de Abu-Ali Abdur'Rahman, al expresar la opinión de la Corte Suprema de Estados Unidos en un caso de pena de muerte en 1989, la juez Sandra Day O'Connor escribió: "Para que el tribunal sentenciador pueda hacer una valoración individual de la adecuación de la pena de muerte, es importante contar con pruebas del historial y carácter del acusado debido a la creencia, arraigada desde hace mucho tiempo en esta sociedad, de que la culpabilidad de los acusados que cometen actos delictivos que son atribuibles a un pasado desfavorecido o a problemas emocionales o mentales es menor que la de los que no tienen esa disculpa". En un discurso pronunciado 12 años más tarde, la juez O'Connor manifestó: "Después de ejercer durante 20 años en la Corte Suprema, debo reconocer que existen serios interrogantes sobre la imparcialidad de la aplicación de la pena de muerte en este país". Estos

interrogantes se han planteado con relación al juicio de Abu-Ali Abdur'Rahman.

5.17.8. TESTIGOS EN LA AUDIENCIA DE ABDUR'RAHMAN

Si apenas se les proporcionó información sobre la persona que iban a condenar a muerte. En la fase de determinación de la pena, sólo escucharon el testimonio de dos testigos de la defensa: el del acusado y el de su esposa, de la que estaba separado. Ninguno de los dos supo que iba a comparecer como testigo hasta la mañana en que se celebró la vista, por lo que no tuvieron tiempo de prepararse para testificar. El interrogatorio al que se sometió a la esposa de Abdur'Rahman se centró en el hecho de que hubiera expedido cheques sin fondos mientras su esposo estaba en prisión. Uno de los abogados defensores describiría posteriormente el testimonio del acusado, que sufrió una crisis nerviosa durante el interrogatorio y era incapaz de expresarse durante el contrainterrogatorio, como "una de las cosas más tristes a las que he asistido en mi vida profesional". Si se ejecuta el veredicto del jurado, la injusticia será aún más trágica.

Durante su infancia, Abdur'Rahman había sufrido abusos espantosos a manos de su padre, un agente de la policía militar que, entre otras cosas, lo encerraba en un armario, desnudo, atado y sujeto a un gancho con un trozo de cuero mojado, que encogía al secarse, atado alrededor del pene, y lo golpeaba en éste con un bate de béisbol, en una ocasión lo obligó a comerse un paquete de cigarrillos como castigo por fumar y, cuando vomitó, lo obligó a comerse el vómito. Abu-Ali Abdur'Rahman se escapó de casa varias veces y, finalmente, se fue definitivamente cuando tenía 15 años. Un experto que testificó en la vista

de 1988 ante el juez de distrito Campbell declaró que Abdur'Rahman's era «el peor caso de abuso con el que me he encontrado en 25 años de ejercicio como psicólogo académico [.] Ni siquiera puedo recordar algo que guarde una semejanza remota con algunas de las cosas que leí» En el año 2000, el Juez Cole, del Sexto Circuito, escribió que «los abusos que sufrió en la infancia Abdur'Rahman [] fueron inhumanos y espantosos». El jurado no supo nada de estos abusos.

5.17.9. PRUEBAS QUE NO SE PRACTICARON

El Juez de Circuito Cole no tenía ninguna duda de que la actuación del abogado defensor fue “constitucionalmente inadecuada” durante la fase de imposición de la pena y enumeró algunos de los defectos

“La defensa no pidió a la corte que declarara que Abdur'Rahman era indigente ni le solicitó fondos para llevar a cabo una investigación o para peritos, no contrató a un especialista independiente en salud mental, no investigó el carácter de las condenas anteriores de Abdur'Rahman; no se puso en contacto con los testigos disponibles de su familia ni presentó su testimonio en la fase de determinación de la pena, no investigó los abundantes antecedentes de salud mental, educativos, militares y penitenciarios de su cliente; no investigó los antecedentes del estado de Tennessee sobre la salud mental o el pasado de Abdur'Rahman ni presentó pruebas de éstos en la vista de determinación de la pena En definitiva, la defensa no investigó ni presentó en absoluto el historial de salud mental de Abdur'Rahman, sus antecedentes institucionales ni ninguna otra prueba atenuante ”

Abu-Ali Abdur'Rahman tenía un historial clínico de problemas mentales

graves. De hecho, inmediatamente después de su detención dio muestras de posible enfermedad. La policía consideró necesario recluirle en una celda acolchada durante dos días porque había comenzado a golpearse la cabeza contra las paredes y la mesa. No se informó a la defensa de este comportamiento. En el contexto de los recursos presentados tras su condena, seis especialistas en salud mental diagnosticaron a Abu-Ali Abdur'Rahman trastorno de estrés postraumático o trastorno de personalidad leve o fronterizo.

Sus expedientes académicos, militares y penitenciarios indican que había sido objeto de evaluación psicológica en diversas ocasiones. En los expedientes de su adolescencia y juventud, se lo caracteriza como "muy enfermo", "necesitado de internamiento inmediato en una institución", "con necesidad perentoria de terapia" y "gravemente perturbado". Había intentado suicidarse en varias ocasiones. Otros indicios de enfermedad mental que el abogado defensor no investigó eran que Abdur'Rahman creía que él y su mujer tendrían un hijo que sería el próximo Mesías, que había mantenido conversaciones con personas y animales inexistentes y se había golpeado la cabeza contra la pared en diversas ocasiones. El jurado también desconocía el historial de enfermedad mental que había en su familia. Su hermana intentó suicidarse muchas veces y fue objeto de tratamiento psiquiátrico en varias ocasiones. Y desde la celebración del juicio, su hermano se ha suicidado.

En 1969, a la edad de 18 años, Abu-Ali Abdur'Rahman fue detenido por agresión con arma peligrosa y enviado a un centro de reclusión para jóvenes,

donde se suponía que iba a recibir “tratamiento y supervisión”. Según los informes, no recibió ni uno ni otra. En su lugar, al ser joven y no muy corpulento, se convirtió en víctima de sucesivas violaciones homosexuales a manos de otros internos. Intentó suicidarse en varias ocasiones; también le diagnosticaron episodios de “ceguera histérica”, una forma de bloqueo mental causado por estrés del cual el paciente no recuerda lo que ha sucedido. Es digno de mención que Abdur’Rahman no niega haber estado implicado en el delito contra Patrick Daniels y Norma Norman en 1986, pero ha afirmado que no recuerda el apuñalamiento en sí, lo cual es indicio de un posible episodio de este tipo.

En 1972, a la edad de 21 años, después de que las autoridades de la prisión desoyeran al parecer sus peticiones de que lo protegieran de las violaciones de que era objeto, y en este contexto, Abu-Ali Abdur’Rahman causó la muerte por apuñalamiento a otro recluso. En su juicio por asesinato, que duró un día, la defensa presentó testimonios psiquiátricos para apoyar su argumento de que Abu-Ali Abdur’Rahman había perdido el dominio de sí mismo en el momento del homicidio debido a los abusos de que era víctima. El jurado rechazó el argumento de locura temporal y emitió un veredicto de culpabilidad por homicidio en segundo grado. No obstante, el Juez recomendó “ingresar al acusado en una institución en la que pudiera recibir tratamiento psiquiátrico”. Sin embargo, Abu-Ali Abdur’Rahman acabó internado en una prisión federal en la que sólo esporádicamente le administraban medicamentos antipsicóticos y de otro tipo. Siguió siendo víctima de violación. Al parecer, en 1973 sufrió otro

episodio de ceguera histérica cuando lo obligaron a practicar sexo oral con otros internos. El expediente de la prisión también indica que intentó suicidarse y otros actos de automutilación.

En la opinión formulada en 1998, en la que mantenía que debía anularse la condena a muerte de Abu-Ali Abdur'Rahman, el Juez de distrito Campbell escribió que "sin ninguna información que atenuara la gravedad de su homicidio anterior [en 1972], no había nada que oponer a la probable idea del jurado de que, dado que el demandante había matado a alguien anteriormente, no merecía ninguna indulgencia. El jurado no tuvo conocimiento de estas pruebas. También éste fue un fallo notable de la defensa".

Abu-Ali Abdur'Rahman salió en libertad condicional en 1983, trabajó de limpiador e inició una relación con una mujer cuáquera. Participó como voluntario en actividades comunitarias de los cuáqueros, desarrollando su trabajo con jóvenes pobres. El Juez de distrito Campbell subrayó que «la defensa podría haber presentado pruebas de que, a pesar de sus problemas mentales, el demandante había actuado como miembro productivo de la sociedad [y que] era trabajador y generoso []. Pero el jurado no escuchó decir nada parecido a ningún testigo. Éste fue un fallo muy importante de la defensa».

El Juez Campbell continuó "El jurado de este caso no escuchó a ningún testigo al que le importara que Abu-Ali Abdur'Rahman viviera o muriera, aunque dichos testigos estuvieran disponibles y la defensa tuviera conocimiento de ello. Éste fue un error sumamente grave".

Según los informes, en el pabellón de los condenados a muerte, el comportamiento de Abu-Ali Abdur'Rahman ha sido el de un preso ejemplar, con un expediente disciplinario intachable. Ha sido asesor de los internos durante muchos años y trabaja con las autoridades para resolver las quejas de los presos. Se convirtió al Islam en 1988 y está interesado en las principales confesiones religiosas. Ha seguido formándose y ha terminado varios cursos. Se dice que está especialmente interesado en los niños que crecen en ambientes en los que se practican abusos y ha escrito varios artículos sobre los efectos de éstos.

Alegaciones de conducta indebida del fiscal

“La búsqueda de la justicia no es compatible con el engaño. Los fiscales no pueden ocultar hechos ni faltar conscientemente a su obligación de revelar lo que la ley exige que revelen. En ninguna circunstancia de nuestro sistema legal es más vital la observancia estricta de estos principios que en los casos en los que el Estado solicita la pena de muerte”

Ex fiscales que pedían justicia para Abu-Ali Abdur'Rahman, 2002.

El informe de los ex fiscales James F. Neal, W. Thomas Dillard, Quenton I. White, Juez John J. Hestle, Ralph E. Harwell, y Charles Fels, (2002), consideraban que además de estar representado por abogados que hicieron poco por protegerlo de la pena de muerte, Abu-Ali Abdur'Rahman tuvo ante sí a un fiscal que en su afán de lograr una condena a muerte incurrió al parecer en conducta indebida. Seis ex fiscales que habían actuado como fiscales estatales o federales en el estado de Tennessee, presentaron a la Corte Suprema de Estados Unidos un informe de *Amici Curiae* (amigos de la corte) sobre el caso

de Abu-Ali Abdur'Rahman. Aducían que el caso "muestra que el fiscal adoptó una conducta de engaño que privó [a Abdur'Rahman], y en última instancia al jurado, de información que habría cambiado radicalmente el resultado de la fase judicial de determinación de la pena".

Según un informe pericial del Departamento de Investigación de Tennessee (TBI), no se halló sangre en las ropas de Abu-Ali Abdur'Rahman, incluido el largo abrigo de lana que vestía el acusado (las ropas de Devalle Miller nunca llegaron a analizarse), a pesar de que el lugar del delito estaba lleno de sangre. El Fiscal conocía el informe del TBI y lo calificó de punto débil en la causa contra Abdur'Rahman. En un memorándum interno dirigido a un ayudante del Fiscal, escribió "En las fotografías de la casa del fallecido se aprecian salpicaduras de sangre por toda la cocina, . si el acusado no se quitó el abrigo durante todo el tiempo, es evidente que no estaba presente cuando se produjo el apuñalamiento". Sin embargo, el fiscal no informó al que acabó siendo abogado de Abu-Ali Abdur'Rahman de la existencia del informe del TBI. Tampoco se le entregaron a la defensa los informes policiales en los que se describía el lugar del delito.

Tanto Norma Norman como Devalle Miller declararon en el juicio que Abdur'Rahman llevaba puesto un largo abrigo de lana negra durante el crimen, el fiscal no presentó pruebas de que se lo hubiera quitado. No sólo parece que el fiscal ocultó al abogado defensor definitivo de Abdur'Rahman el hecho de que el abrigo fuera una prueba potencialmente exculpatória, sino que intentó

utilizarlo como agravante, y lo describió constantemente ante el jurado como el “abrigo de gángster” del acusado.

En la vista celebrada ante La Corte Federal de distrito, un perito patólogo testificó que, en su opinión, el agresor tenía que haberse manchado el cuerpo y la ropa de sangre procedente de las heridas de la víctima. También manifestó que las manchas de sangre no podían haberse eliminado limpiando el abrigo y que, en cualquier caso, los análisis del TBI hubieran detectado sangre aunque se hubiera lavado la prenda.

El hecho de que la fiscalía no notificara a la defensa el contenido del informe pericial es uno más de los ejemplos de conducta indebida atribuidos a este Fiscal en este caso, como son las alegaciones de ocultamiento y tergiversación de pruebas sobre la salud mental de Abu-Ali Abdur’Rahman. Debido a los obstáculos de procedimiento, ninguna corte se ha ocupado de todas estas alegaciones de conducta indebida del Fiscal en la causa contra Abdur’Rahman.

En la decisión de 1998 en que anulaba la condena a muerte de Abu-Ali Abdur’Rahman, el Juez de distrito Todd Campbell resolvió que “no podía abordar la mayoría de las alegaciones de conducta indebida del Fiscal porque no se habían agotado las vías legales en Las Cortes Estatales”.

El Juez Campbell sólo examinó dos de las denuncias de conducta indebida del Fiscal. Concluyó que el hecho de que no comunicara al abogado defensor el contenido del informe pericial del TBI sobre las ropas de Abdur’Rahman no constituía conducta indebida porque había facilitado el

informe al primer abogado del acusado que abandonó el caso debido a un conflicto de intereses. Sin embargo, cuando el abogado sustituto solicitó al fiscal toda la información de carácter exculpatorio, éste no comunicó a la defensa la existencia del informe del TBI. En cualquier caso, ya se trate de conducta indebida o de asistencia letrada inadecuada, el resultado final fue que el jurado no tuvo conocimiento de las pruebas relacionadas con el abrigo. En las declaraciones juradas que hicieron posterioridad a la condena, varios de los miembros del jurado expresaron su preocupación por no haber conocido las conclusiones del informe pericial. Los estudios han demostrado que, para los miembros del jurado, las dudas residuales sobre la culpabilidad de un acusado de un delito punible con la muerte son el factor atenuante más poderoso contra la pena capital.

La segunda alegación de conducta indebida del Fiscal analizada por el Juez del distrito fue el hecho de que aquél no entregara al abogado defensor la transcripción del juicio por asesinato celebrado en 1972 contra Abdur'Rahman. El Fiscal había comunicado al abogado defensor que el origen del crimen se debía a las actividades de las bandas de la cárcel relacionadas con las drogas, en lugar de inscribirlo en el contexto de las agresiones homosexuales de que era objeto Abdur'Rahman. En el informe de *Amici Curiae* presentado por los ex fiscales se subrayó que la transcripción señalaba que "hubiera dejado claro a la defensa que el acontecimiento anterior no estaba relacionado con bandas o drogas, como había afirmado el fiscal, sino que era consecuencia de las agresiones homosexuales sufridas [por Abdur'Rahman] en prisión. Además, en

la transcripción figuraba el testimonio de dos psiquiatras, uno de ellos testigo del Estado, en los que se especificaba que Abdur'Rahman era incapaz de controlar su comportamiento, información ésta que hubiera resultado esencial en la vista de determinación de la pena” Varios de los miembros del jurado expresaron en las declaraciones juradas que hicieron con posterioridad a la condena su preocupación concreta por no haber conocido esta información.

El Juez de distrito Todd Campbell concluyó que “no hay duda de que el fiscal tuvo en su poder esta transcripción antes de que comenzara el juicio. También es indiscutible que no entregó la transcripción a la defensa”. No obstante, el Juez Campbell manifestó que “aunque la información retenida era favorable al acusado, esta retención no suponía por sí sola una infracción constitucional”.

En el informe de *Amici Curiae* presentado por los ex fiscales ante La Corte Suprema de Estados Unidos se arguyó que “como la corte de distrito no tuvo en cuenta el resto de los abundantes indicios de conducta indebida del caso, no abordó la relación de estas dos cuestiones con la denuncia de Abdur'Rahman de que el fiscal había llevado a cabo un esfuerzo coordinado para ocultar y tergiversar pruebas que sabía que dificultarían la condena a muerte La Corte tampoco tuvo en cuenta el efecto global que tuvo la conducta indebida tanto en la defensa, durante la fase de determinación de la pena, como en la determinación de la verdad por parte del jurado Ninguna corte federal ha abordado en su totalidad las alegaciones de conducta indebida del fiscal”

De la declaración jurada efectuada en el año 2001 por el portavoz del

jurado en la causa contra Abu-Ali Abdur'Rahman, ocho de los nueve miembros del jurado original con los que se han puesto en contacto con los abogados actuales de Abu-Ali Abdur'Rahman manifestaron con toda claridad que "ya no consideraban correcto el veredicto alcanzado hace 16 años en la vista de determinación de la pena".

En sus declaraciones juradas, en las que se alude a James Jones, que era el nombre de Abu-Ali Abdur'Rahman antes de su conversión al Islam in 1988, aparecen las siguientes manifestaciones

- Bonnie M. Meyer, (1997), "durante la fase del juicio de determinación de la pena, yo no era partidaria de condenar a muerte al acusado, porque pensaba que las pruebas no eran suficientemente concluyentes. Fui uno de los miembros del jurado que mostraron resistencias hasta el final para votar a favor de la pena de muerte. Si hubiera sabido algo sobre el historial del acusado, que había sufrido abusos en la infancia y que podía padecer trastorno o enfermedad mental que explicaran en parte porqué hizo lo que hizo, no creo que hubiera votado a favor de la pena de muerte".
- Alice Stoddard, 2001 "Me hubiera gustado conocer [en 1987] el historial de enfermedad mental del Sr Jones, así como la naturaleza de los hechos relacionados con su condena por asesinato en 1972 en el contexto de las agresiones homosexuales que sufría. Me hubiera llamado la atención el hecho de que no se encontrara sangre en el abrigo del Sr Jones y, concretamente, pienso que, como miembros del jurado, deberíamos haber conocido con cierto detalle los datos sobre los abusos sufridos en la infancia y la enfermedad mental que generaron. Hubiésemos querido tomar todas estas pruebas en consideración. Creo que hubiera votado a favor de condenar al Sr Jones a cadena perpetua en lugar de a la pena capital si hubiera tenido conocimiento de las

pruebas objetivas que acabo de mencionar. No se nos debería haber ocultado esta información”

- Jimmy Swarner, 2001. “Me hubiera gustado conocer en detalle la vida del Sr. Jones antes de tomar una decisión sobre su condena, saber todo sobre el trato que le dispensaba su padre y sobre sus problemas mentales. No quiero que sea ejecutado. Me gustaría que el gobernador le perdonara la vida. Teníamos que haber conocido toda la información sobre el Sr. Jones”.
- Scarlett McAllister Smith, 2001. “Por supuesto que me hubiera gustado acceder al informe del laboratorio del TBI que demostraba que no se había hallado sangre en la ropa del Sr. Jones. Me hubiera gustado tener información completa sobre el amplio historial de problemas mentales del Sr. Jones, en el que figuraran los tratamientos, diagnósticos e intentos de suicidio. Nos deberían haber informado sobre los abusos sufridos cuando era niño a manos de su padre. Hubiera querido escuchar el testimonio de su esposa sobre su costumbre de mantener conversaciones con personas y animales inexistentes, así como informarme sobre los problemas mentales de su familia. No tuvimos acceso a esta información en el momento de determinación de la pena. Si entonces hubiera sabido todo esto, es posible que mi decisión hubiera sido distinta”.
- Yolanda Howard, 2001. “Desconocía por completo que James Jones tuviera antecedentes de enfermedad mental muy grave y de hospitalizaciones para el tratamiento de sus problemas. Me parece que los abogados defensores no comentaron nada de esto, ni tampoco nos informaron de los problemas de su familia. No conocía los terribles abusos a los que había sometido a este hombre su padre y, desde luego, me hubiera gustado tener en cuenta todo esto a la hora de tomar una decisión respecto a su condena. Creo que hubiera votado a favor de condenar al Sr. Jones a cadena perpetua en lugar de condenarlo a muerte si hubiera contado con información detallada sobre la vida de este hombre y la magnitud de su enfermedad mental. No tuvimos la oportunidad de comprender al Sr. Jones porque no se nos facilitó información. Otro detalle que realmente me inquieta es que no se nos mostrara el informe del laboratorio del TBI sobre las pruebas de sangre. Es importante que hubiéramos

sabido que no se encontró sangre en la ropa del Sr. Jones, especialmente cuando nos mostraron fotos que parecían demostrar lo contrario. La vista de esas fotos me afectó profundamente. Mi opinión podría haber sido muy distinta si hubiera oído el testimonio sobre la ausencia de sangre en la ropa del Sr. Jones. Lo que me inquieta fundamentalmente es que se nos ocultara toda esta información cuando teníamos que tomar una decisión de la que dependía la vida de este hombre. Es una decisión muy difícil y considero que se nos debería haber facilitado toda la información".

- Loretta Galloway Simpson, 2001. "No se nos facilitó información en la que se expusieran en detalle la enfermedad mental y las hospitalizaciones del Sr. Jones. Francamente, me inquieta que se nos ocultara toda esa información. La ausencia de manchas de sangre en la ropa del Sr. Jones según el informe del laboratorio del TBI, el espantoso historial de abusos padecidos en la infancia, la verdad sobre su condena previa, que estaba relacionada con las amenazas homosexuales de las que era objeto en prisión, por citar parte de lo que me preocupa. Si se tratara de mí en lugar del Sr. Jones, no me hubiera gustado que mi causa se manejara de esta forma, sino que se presentara toda la información disponible sobre mí. Me opongo a que se ejecute al Sr. Jones en estas condiciones. Como miembro del jurado, hubiera querido conocer toda la información disponible sobre el Sr. Jones antes de decidir cuál debía ser la condena: cadena perpetua o pena de muerte. Teniendo en cuenta todos los antecedentes de enfermedad mental del Sr. Jones, hubiera votado a favor de una pena de cadena perpetua. Indudablemente, éste hubiera sido mi voto también entonces. Creo que hay que ayudar a las personas con problemas".
- James Wimberley, 2001. "Hago esta declaración porque creo que el jurado de la causa contra James Jones debería haber conocido las pruebas de enfermedad mental y la información referente a los abusos que sufrió en la infancia. Especialmente pienso que deberíamos haber conocido los pormenores de su condena previa por asesinato, que estaba relacionada con las amenazas homosexuales que sufría en prisión. Esa condena previa fue la que me decidió a votar a favor de la pena de muerte. El resultado podría haber sido distinto en la fase de

imposición de la pena si hubiera conocido la verdad de los hechos”

- Everett C. Stone, portavoz del jurado, (2001). “tras revisar diversas pruebas en relación con el Sr Abu Ali, también conocido como James Jones, opino que este testimonio habría supuesto una diferencia notable en la fase de determinación de la pena. Es más, dada la naturaleza del testimonio, propondría que se considerara anular la condena a muerte en este caso”.

Los miembros del jurado no son los únicos que han mostrado honda preocupación por el veredicto de determinación de la pena. El diario *Nashville City Paper*, (2003), por ejemplo, ha solicitado el indulto y señala que “por primera vez creemos que la aplicación de la pena de muerte en el caso concreto de Abu-Ali Abdur’Rahman constituiría un error judicial”. “Creemos que el gobernador Bredesen debe estudiar con atención este caso cuando le presenten la petición de indulto. Pensamos que cuando analice el caso Rahman la única conclusión posible es que en esta ocasión es necesario conceder el indulto”

Editorial, *The Tennessean*, (19 de junio del 2002), titulaba una noticia así: “El indulto ejecutivo como remedio del error judicial” y seguía informando que.

“Las cuestiones planteadas por los jueces en todos los niveles de esta causa nos llevan una y otra vez a la cuestión de la justicia. Abdur’Rahman ha sido condenado por un crimen espantoso y debe pagar por ello con su libertad. Pero no se hará más que agravar la injusticia si Abdur’Rahman es ejecutado a causa del “total fracaso” de sus abogados defensores. [El gobernador] debe evitar esta atrocidad”

El 2 de mayo del 2003, la Junta de Libertad Condicional para Adultos del Estado de Ohio decidió, por seis votos contra dos, recomendar el indulto de un preso condenado a muerte al que estaba previsto ejecutar una semana después de la fecha prevista para la ejecución de Abu-Ali Abdur'Rahman. Aunque la mayoría de los miembros del organismo seguían estando convencidos de la culpabilidad de Jerome Campbell, pensaban que los abogados encargados de la apelación habían "presentado pruebas convincentes suficientes como para que la mayoría de los miembros de esta junta se cuestionaran el seguir manteniendo la recomendación del jurado a favor de una condena a muerte"

La mayoría de la junta de Ohio escribió que "Es imposible decir (de hecho, es imposible saber) exactamente cómo esos mismos miembros del jurado habrían considerado, sopesado, evaluado y deliberado y a qué conclusión habrían llegado respecto a las pruebas circunstanciales restantes. La posible imposición de la pena de muerte exige que esta Junta base su recomendación en algo más que una conjetura o una suposición de que el jurado habría pronunciado "probablemente" o "muy probablemente" o "sin duda" el mismo veredicto o la misma recomendación de pena de muerte. Al imponer la pena de muerte el Estado debe proceder con cautela"

En el caso de Abu-Ali Abdur'Rahman, la mayoría de los miembros del jurado han firmado declaraciones juradas que deben dar al estado de Tennessee tiempo para pensar. Es evidente que ocho de los miembros del jurado ahora albergan dudas sobre la decisión tomada respecto a la condena, el estado tampoco puede considerarla correcta. Después de todo, si uno de los

miembros del jurado hubiera votado a favor de la cadena perpetua, ésta hubiera sido la condena resultante

En el caso de Jerome Campbell, en Ohio, la mayoría de los miembros de la Junta de Libertad Condicional también consideraban que Las Cortes de Apelación habían negado a Jerome Campbell, por motivos técnicos y de procedimiento, un examen justo y exhaustivo de las nuevas pruebas. Asimismo, manifestaron que no deberían estar obligados por “nociones judiciales restrictivas” de las normas que rigen la pertinencia y admisibilidad de pruebas ni por “quebrantamiento de forma” “No podemos limitarnos a aplazar el tratamiento de todas las cuestiones importantes en los casos de pena capital hasta que lleguen a las cortes de apelación Tenemos la obligación de hacer nuestro propio análisis independiente y establecer nuestra opinión en los casos penales en los que hay que elegir entre la vida y la muerte”.

El Estado de Tennessee ha logrado que Las Cortes de Apelación no revisen el caso de Abu-Ali Abdur’Rahman en su totalidad. En el 2002, un Juez de la Corte Suprema de Tennessee expresó su profunda preocupación sobre esta cuestión.

“Me veo obligado a comentar, para que conste en acta, sobre el que considero el mayor de los problemas que afectan a este caso. A medida que esta Corte examinaba las cuestiones que se han presentado ante ella, se hacía cada vez más patente que la revisión judicial falló en la etapa posterior a la condena La revisión que realizó la Corte de Apelaciones en lo Penal de Tennessee de la denuncia de asistencia letrada ineficaz en el caso de Abdur’Rahman, sólo puede describirse como superficial El caso lo revisaron sólo dos jueces, en lugar de los tres habituales, siendo uno de ellos un juez especial cuya experiencia era fundamentalmente de ámbito civil El

dictamen que elaboró esa corte apenas constaba de tres páginas, y sólo se dedicaron dos párrafos a analizar la ineficacia de la asistencia letrada. Desgraciadamente, esta corte se negó a conceder permiso para recurrir esa resolución. Paradójicamente, cuando la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito anuló la resolución, extensa y pormenorizada, de la Corte federal de Distrito, en la que se mantenía que Abdur'Rahman se había visto «seriamente perjudicado» por una asistencia letrada «totalmente ineficaz», su principal razonamiento era que las conclusiones de la corte estatal posteriores a la condena, tal como confirmaba la Corte de Apelaciones en lo Penal, «se suponen correctas». Por tanto, la revisión superficial citada con anterioridad fundamentalmente impidió que el caso de Abdur'Rahman se examinara debidamente en el ámbito federal. En mi opinión, este resultado es inaceptable. Lamentablemente, algunos opinarían, a pesar de las evidentes deficiencias que concurren en este caso, que el asunto de la asistencia letrada ineficaz ya ha sido objeto de litigio y que está zanjada como cuestión de derecho, independientemente del resultado, y que las carencias de nuestro sistema judicial, por muy evidentes que sean en retrospectiva, ya no pueden corregirse. Sin embargo, yo creo que, tratándose de un caso de pena de muerte, es claramente deshonesto reflexionar sobre nuestros errores, declarar que tenemos las manos atadas y seguir permitiendo la ejecución de Abdur'Rahman. Nuestra obligación es luchar con tesón para conseguir un resultado justo”

El poder del Ejecutivo para concedió el indulto, precisamente para compensar la rigidez de los tribunales, el Gobernador Phil Bredesen debe utilizarlo para lograr un resultado justo. Debe evitar que Abu-Ali Abdur'Rahman sea ejecutado

CONCLUSIONES

Si queremos un procedimiento democrático, con el cual el pueblo pueda tener la tranquilidad de que se dictan sentencias justas, necesitamos que éste procedimiento se ventile ante el Juez, que sea un procedimiento público, oral, que haya igualdad de las partes; que él se traslade de los reparos a los juzgados, que empiece aquí y que el proceso no llegue ya “precocido”

Para que haya justicia tiene que haber una buena acusación. No puede haber justicia si no tenemos un Fiscal que tutele los intereses de la sociedad, pero tampoco hay justicia si no interviene un buen defensor por parte del acusado, todo ello de acuerdo con los fines apuntados del Derecho Penal: proteger a la sociedad del delito (función de la acusación) y al inculpado de la injusticia (función de la defensa). Igualmente, para garantizar al mismo tiempo el combate al delito y la tutela de los inocentes se requiere, sin duda, un Juez imparcial sobre las partes.

La averiguación previa generalmente es distinta a los adscritos a los juzgados donde se ventilan los casos. Sucede entonces que los conocimientos que adquirió el Ministerio durante la averiguación previa no sirven de nada, ya que otro agente ministerial tiene que llegar a conocer el expediente en la siguiente etapa procesal. Hay una fragmentación en la función acusatoria, hay ineficacia.

Cuando se carece de esta forma de control, que opera de manera natural en todos los casos a partir de la interacción del Juez y de las partes a lo largo del proceso, lógicamente se produce una pérdida de confianza de la población en los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley. La ausencia de

controles procesales, sin duda, ha favorecido también las frecuentes alianzas entre agentes de la autoridad y delincuentes.

En el campo del Derecho Procesal Penal, concebido de la forma que lo está ahora, es donde más se ve reflejado el sentido y el indudable peso que tiene la llamada Prueba, ya que gracias a la oralidad y a la inmediación fundamentalmente, tanto las partes como el tribunal vivirán su práctica e incorporación, estarán atentos a lo que ella les trasmita para luego controvertir o deliberar, dependiendo si se trate de parte procesal o de juzgador

Las consideraciones que anteceden evidencian que nuestra práctica judicial está muy alejada de la normativa constitucional, pues La Constitución exige que la culpabilidad del imputado se obtenga como consecuencia de la apreciación, juzgador de la actividad desarrollada en el juicio público respectivo

Toda condena que se produzca a partir de la evaluación de un sumario que no represente la práctica de Pruebas en el juicio oral respectivo es contraria al texto constitución

Pasar de un Sistema Inquisitivo a un Sistema, verdaderamente, Acusatorio es una tarea mucho más compleja que pasar de un proceso secreto y escrito a uno oral y público, sino que impone el adoptar todas aquellas características inherentes a un sistema de esas características. Es por ello, que habiendo una decisión legislativa en orden a abandonar el Sistema Inquisitivo para pasar a uno Acusatorio, se debe efectuar una interpretación de las disposición legales en concordancia con los mismos, sobre todo en aquellos casos en que pueda existir contradicción entre normas del Código Procesal

Penal, inspiradas en una lógica acusatoria, y aquellas contenidas en otros cuerpos legales que, normalmente, razonan sobre una lógica coherente con un sistema inquisitivo fuertemente arraigado en nuestros textos legales

RECOMENDACIONES

La realización de esta investigación que hoy damos por culminada, entregamos a los interesados, en conocer un poco más sobre La Prueba Judicial, nuestras recomendaciones

1 **Modificar las Leyes de Procedimiento Penal de acuerdo al Modelo Acusatorio**

- permitiéndose recurrir en varias instancias superiores;
- señalándose que en primera instancia debe hacerse un sólo juicio y en el mismo dictaminar condena o absolución,
- legislar para evitar que sea vía preparativa para llamar a juicio,
- evitar caer en el mismo sistema tedioso demorado, que sólo sirve para llenar de expediente a los Tribunales que en nada resuelve La Administración de Justicia

2 **En la Admisión de Las Pruebas, el funcionario público debe evitar por todos los medios:**

- el ofrecimiento de rebajas de penas o libertades condicionales a cambio de acomodar expediente, con el objeto de obtener información de otra persona que al Estado u sociedad le interese castigar;

- esta práctica conlleva a la corrupción, tanto del funcionario público, como del testigos, ya que, se puede prestar para inventar declaraciones, acomodar expedientes y condenar a terceras personas,
- si los acusados han cometido delitos, deben tener Las Pruebas de su ilícito y ser condenados, sin necesidad de canjear información, a cambio de libertades que son contrarios al debido proceso contenido en el Sistema Garantista

ANEXOS

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

ALVARADO VELLOSO, Adolfo Debido Proceso Versus Prueba de Oficio.Bogotá, Editorial Temis, S A 2004

BARSALLO, Pedro Folleto de Derecho Procesal, Universidad de Panamá.
1998

BERNAL CUELLAR, Jaime. El Proceso Penal, Universidad Externado de Colombia, 1987

CASANOVAS, Jorge El Procedimiento Preparatorio en el Proyecto. La Cuestión Constitucional y el Propósito Unificador. Editorial de Palma Buenos Aires. 1988

CHIOVENDA, Guieseppe. Curso de Derecho Procesal Civil. Madrid, España
1953

DELGADO PEÑA, Nelson, Principios del Sistema Acusatorio, Ediciones nueva jurídica 2005

DESIMONI, Luís María La Prueba y su Apreciación en el Nuevo Proceso Penal. Buenos Aires, Editorial Abaco de Rodolfo Desalma 1994

DEVIS ECHANDÍA, Hernando **Compendio de Derecho Procesal. Pruebas Judiciales.** T.II Editorial ABC-Bógota, 1988

DEVIS ECHANDÍA, Hernando **Teoría General del Proceso** T I Editorial Universidad, Buenos Aires, 1984

DE SANTOS, Víctor. **Prueba Judicial, Teoría y Plática.** Editorial Universitaria. Buenos Aires 1994

DÍAZ MONCADA, José Revista Defensa No 5, **La Regla Constiucional de Exclusión de Pruebas.** 2004

ESER, Albin **De los Delitos y de las Víctimas,** Buenos Aires, Ad Hoc, 1992

FÁBREGA, Jorge Estudios Procesales, Editora Jurídica Panameña 1990

FERRAJOLI, LUIGI. **Teoría del Galantismo Penal.** Editorial Totta, Madrid, edición 5, 2001

FUNDACIÓN, Esquel **Guía de Aplicación para el Profesional del Derecho. Sistema Procesal Penal.** Imprenta P.P.L. Ecuador. 2003

GARCÍA FALCÓNI, José. **Manual, de Práctica Procesal Penal.** Primera Edición, Quito, Ecuador 2002

GIMENO SENDRA, Vicente, **Derecho Procesal Penal**, Colex, Madrid, 1999.

GRANADOS PEÑA, Jaime **La modificación del Sistema de Juzgamiento e implementación del Sistema Acusatorio en Colombia** Medellín, Colombia 2002.

GUNTER, Srratenwerth **El Futuro del Principio Jurídico Penal de Culpabilidad.** Instituto de Criminología de la Universidad Complutense Madrid 1980

GIUSEPPE, Bettiol, **Instituciones de Derecho Penal y Procesal**, Barcelona, Editorial Bosch, 1977.

LEONARDO, Frank, Jorge. **Observaciones y Comentarios sobre los Aportes y del Proyecto de CPP Nación.** Editoral De Palma Buenos Aires 1988

HIRSCH, WOLFGANG, **Tipo penal e impugnación objetiva**, Colex, Madrid. 1995.

LEVENE, Ricardo **El Proyecto de CPP Nación frente a las necesidades de la gran Reforma Procesal Penal que Anhelamos** Editorial De palma Buenos Aires 1988

LUIGI, Ferrajoli **Teoría del Garantismo Pénale, T. V** Editorial Trotta 1995

MAIER, Julio B. J. **La Víctima y el Sistema Penal**, Buenos Aire. 1992

MARÍN FUENTES, Jesús Antonio, **Historia de la aducción de la prueba hasta llegar al Sistema Acusatorio**, Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, Primer Congreso.

MARÍN VÁSQUEZ, Ramiro **Sistema Acusatorio y Prueba** Ediciones Nueva Jurídica Colombia, 2005

MARTÍNEZ RÍOS, José Revista, **Sin Defensa no hay Justicia** 2005

MUÑOZ POPE, Carlos **Anteproyecto de Ley del Código Judicial** 1999

- **Cuestiones sobre el Proceso penal**. Ediciones Panamá Viejo Panamá 1997

Mora Mora, Luis Paulino. **La Importancia del Juicio Oral en el Proceso Penal**. 1991.

MORALES MARÍN Gustavo **Sistema Acusativo** 1992

PARRA QUIJANO, Jairo. **Racionalidad e Ideología en las pruebas de oficios**.

ANEXOS

PROYECTO DE LEY QUE CREA LA JURISDICCION DE PAZ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tradicionalmente en nuestro país la justicia de causas menores ha estado a cargo de las denominadas autoridades de policía Corregidores, Alcaldes, Jueces Nocturnos y Gobernadores. Es en el Código Administrativo de 1917 en el que primeramente se establecen estas autoridades y sus competencias, siendo objeto de algunas modificaciones a lo largo de los años que no variaron fundamentalmente este sistema.

A pesar de la larga vida y utilidad del sistema de “justicia administrativa de policía”, el mismo revela desde hace ya varios años un agotamiento que se evidencia por las constantes denuncias de abusos y actuaciones irregulares de estas “autoridades de policía”.

La sociedad reclama cambios en este sistema de administración justicia, quizás el más importante y sensitivo para los sectores más desprovistos y marginados; de allí la necesidad de implementar reformas legislativas tendientes a garantizar el acatamiento de las garantías constitucionales como el debido proceso, el principio de legalidad, la presunción de inocencia y, en general, el respeto de los derechos fundamentales.

El proyecto propone la eliminación total de los Jueces Nocturnos y la conversión de los Corregidores en Jueces de Paz, adscribiéndolos al Órgano Judicial como el primer escalón de la pirámide jerárquica judicial por debajo de los Jueces Municipales, manteniendo gran parte de sus competencias actuales y su jurisdicción en la comunidad. En el orden penal, conocerán en primera instancia de las faltas establecidas en el Título II del Libro III Código Administrativo y en artículo 175 del Código Judicial.

Con esta medida se garantiza que estos funcionarios cumplan con los requisitos mínimos de idoneidad, exigiéndose en corregimientos de cierto tamaño el título de abogado; su salario sea acorde con la escala salarial del Órgano Judicial; su acceso a la función pública y el derecho a la estabilidad se maneje a través del régimen de carrera judicial, la formación y capacitación continua -independiente de aquélla que puedan ofrecer otras entidades-; se asegura la presencia de estos funcionarios en los lugares de difícil acceso, se les sujeta a la supervisión y evaluación de sus superiores; a los funcionarios se les garantiza independencia en el ejercicio de sus funciones y a los ciudadanos imparcialidad en la toma de decisiones; se asegura la estructura del personal subalterno idóneo y se facilita la coordinación con la Policía Nacional y las autoridades locales. El proyecto establece el Juzgado de Paz de Turno, que conocerán las infracciones en horas y días inhábiles en el Distrito, pero con la obligación de repartir al final del turno los casos a los Juzgados de Paz del corregimiento respectivo.

66

También se incorporan métodos alternos para la solución de conflictos como herramienta para estas nuevas autoridades, y por esa razón se contempla la fijación de una fecha de audiencia de conciliación de las partes o su remisión a un centro de mediación o conciliación.

El Sistema Penitenciario panameño aún no han aplicado detalladamente las Reglas Mínimas para la Clasificación de los Privados de Libertad, y como resultado de esto actualmente se mezclan infractores menores con reclusos de alta peligrosidad, por eso se propone la eliminación de la pena de arresto y su sustitución por días multa, salvo como medida de protección que no sobrepase las 24 horas en los casos de violencia doméstica. Por último, se mantiene en los Alcaldes algunas funciones judiciales como el conocimiento de los procesos de tránsito, en primera o segunda instancia, y los procesos establecidos en el Título III del Libro Tercero del Código Administrativo, denominado

Policía Material.

ANTEPROYECTO DE LEY

De de de 2005

Por el cual se crea la figura del Juez de Paz, se adicionan y modifican algunas disposiciones del Código disposic y se dictan otras disposiciones

La Asamblea Nacional

Decreta:

ARTÍCULO 1· Se modifica el Artículo 65 del Código Judicial, así

Artículo 65 (66) Para los efectos jurisdiccionales en lo judicial, divídase el territorio de la República en cuatro Distritos Judiciales Estos se dividirán en Circuitos Judiciales que a su vez se dividen en Municipios Judiciales y éstos en Corregimientos Judiciales

ARTÍCULO 2: Se modifica el Artículo 67 del Código Judicial, así·

Artículo 67 (68) Los Circuitos Judiciales se subdividen en Municipios Judiciales y éstos a su vez en Corregimientos Judiciales Los Municipios y Corregimientos Judiciales corresponden a cada uno de los distritos y corregimientos según la división política establecida en la Constitución

ARTÍCULO 3 Se adiciona el Capítulo IV al Título VI del Libro Primero del Código Judicial, así

67

CAPÍTULO IV

JUECES DE PAZ

ARTÍCULO 4: Se adiciona el artículo 182 A al Código Judicial, así

Artículo 182A Juzgados de paz Habrá un Juzgado de Paz en cada corregimiento de la República. La Corte Suprema de Justicia cuando lo considere conveniente puede, atendiendo a la distancia y al número de habitantes, extender la jurisdicción territorial de los juzgados de paz a más de un corregimiento o crear más de uno en un mismo corregimiento

ARTÍCULO 5. Se adiciona el artículo 182 B al Código Judicial, así·

Artículo 182B. Nombramiento Los Jueces de Paz serán nombrados por los Jueces Municipales en Sala de Acuerdo en aquellos distritos en que existan dos o más, indistintamente sean civiles, penales o mixtos.

En caso de que exista un solo Juez Municipal en el Distrito respectivo, corresponderá a éste realizar el nombramiento

Todos los nombramientos se sujetarán a las reglas de la Carrera Judicial y demás leyes sobre la materia.

ARTÍCULO 6: Se adiciona el artículo 182 C al Código Judicial, así·

Artículo 182C. Requisitos. Para ser Juez de Paz se requiere

1 Ser panameño (a)

2 Haber cumplido veintiún (21) años de edad

3 Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

4. Ser abogado (a) o estudiante de Derecho de los dos últimos años de la carrera En los corregimientos cuya población no supere los diez mil (10,000) habitantes, podrá ocupar el cargo aquella persona que haya culminado estudios secundarios y aprobado el curso de capacitación impartido por la Escuela Judicial para ser Juez de Paz

5 Ser residente del distrito en donde ejercerá sus funciones.

ARTÍCULO 7 Se adiciona el artículo 182 D al Código Judicial, así

Artículo 182D Personal del Juzgado Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 9 del

artículo 87, los Juzgados de Paz contarán como mínimo con el personal siguiente: un Secretario, un Oficial Mayor, un Estenógrafo y un Notificador. Corresponde al Juez de Paz nombrar a su personal subalterno con arreglo a la Carrera Judicial y su Reglamento.

68

ARTÍCULO 8. Se adiciona el artículo 182 E al Código Judicial, así:

Artículo 182E. Salario. Los Jueces de Paz percibirán un salario no inferior al que percibe el Secretario de Juzgado Municipal en el distrito que corresponda.

ARTÍCULO 9. Se adiciona el artículo 182 F al Código Judicial, así:

Artículo 182F. Residencia. Los jueces de paz tienen la obligación de residir en el distrito de su jurisdicción. Los jueces no pueden ausentarse de su jurisdicción sin el permiso correspondiente. El incumplimiento de éste artículo será considerado falta grave.

ARTÍCULO 10. Se adiciona el artículo 182 G al Código Judicial, así:

Artículo 182G. Atribuciones. Los Jueces de Paz conocerán en primera instancia:

1. En el orden civil, de la substanciación en primera instancia, fallo y ejecución de los procesos siguientes:

a) Ordinarios y ejecutivos cuya cuantía no exceda de quinientos balboas (B/ 500.00), con exclusión de las demandas de carácter mercantil

b). Servidumbres legales

c). Lanzamiento por intruso

2. En el orden penal, conocerán en primera instancia de las faltas establecidas en el Título II del Libro III Código Administrativo y en artículo 175 de este Código

3. Los demás que la Ley les atribuya

ARTÍCULO 11. Se adiciona el artículo 182 H al Código Judicial, así:

Artículo 182H. Juzgado de paz de turno. Los juzgados de paz de un mismo Municipio Judicial serán organizados de tal manera que por lo menos uno permanezca en funcionamiento en horas y días inhábiles, a fin de que haya un juez expedito para la práctica de diligencias que urgentemente demanden su intervención y para las sanciones económicas de los que sean detenidos por faltas fuera del horario regular. Cumplido el turno, se procederá con el reparto de los negocios ingresados al Juzgado de Paz que corresponda según el domicilio de las partes.

El sistema de turnos de los Juzgados de Paz será establecido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia

ARTÍCULO 12. Se adiciona el artículo 182 I al Código Judicial, así:

69

Artículo 182I. Equiparación. En todas aquellas normas o disposiciones legales en que se haga referencia al “Corregidor”, deberá entenderse que se refiere al “Juez de Paz”, siempre que esto no implique el ejercicio de atribuciones contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional

ARTÍCULO 13. Se modifica el artículo 578 del Código Judicial, así:

Artículo 578. (567) Todo allanamiento, para los efectos de que aquí se trata, se llevará a cabo entre las seis de la mañana y las siete de la noche, pero si hubiere temor razonable de que durante la noche se tomen medidas que frustrasen el objeto de la diligencia, el Juez podrá asegurar con cerradura los almacenes, habitaciones y otros locales donde se encuentren muebles, enseres o documentos, colocar sellos y adoptar las precauciones que estime conveniente, con el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario, procurando el menor inconveniente.

ARTÍCULO 14. Se modifica el artículo 1231 del Código Judicial, así.

Artículo 1231. Los procesos ordinarios de menor cuantía se dividen, para los efectos del procedimiento, en tres grupos, a saber

1. Los que tienen un valor que no exceda los quinientos balboas (B/ 500 00).
2. Los que tienen un valor que excede de quinientos balboas (B/.500) sin pasar de mil quinientos balboas (B/.1,500.00); y
- 3 Los que tienen un valor que excede los mil quinientos balboas (B/ 1,500 00) y no pasa de cinco mil balboas (B/.5,000 00).

ARTÍCULO 15. Se subroga el artículo 1232 del Código Judicial, así.

Artículo 1232 De las demandas correspondientes al primer grupo conocen los Jueces de Paz y de las correspondientes a los dos restantes los Jueces Municipales

ARTÍCULO 16. Se subroga el artículo 1233 del Código Judicial, así.

Artículo 1233 El que demande a otro ante un Tribunal Municipal o Juzgado de Paz, por cosa distinta de una cantidad de dinero, expresará en cuánto estima su pretensión, y el Tribunal, en vista de sus explicaciones y de las averiguaciones que haga, si lo tiene a bien, determinará el grupo a que pertenece la demanda.

ARTÍCULO 17 Se subroga el artículo 1234 del Código Judicial, así:

Artículo 1234. Si al Tribunal le pareciere que el valor de la demanda es menor de cinco mil balboas (B/.5,000.00), dispondrá que se siga la tramitación del tercer grupo, mientras el demandado no objete la competencia. Si la objetare, se procederá como dispone el artículo 663 de este Código

70

ARTÍCULO 18. Se modifica el artículo 1235 del Código Judicial, así

Artículo 1235 En los procesos ordinarios cuya cuantía no exceda de quinientos balboas (B/.500.00), el Tribunal hará comparecer a las partes, quienes pueden hacerse asistir por abogado, oír sus razones y procurará avenirlas amigablemente. Si no lo consigue, examinará los testigos y los documentos que las partes presenten y escuchará sus alegaciones sucintas.

Seguidamente, el Juez en la misma audiencia decidirá lo que corresponda y la decisión se notificará a las partes, sin perjuicio de ejercer la potestad que le confiere el artículo 793 de este Código

Si el Juez lo estima necesario, decretará un receso por dos días para preparar la resolución que corresponda, en cuyo caso procederá su notificación por edicto

ARTÍCULO 19 Se modifica el artículo 1242 del Código Judicial, así

Artículo 1242 En los Procesos Ordinarios cuyo valor pase de quinientos balboas (B/.500 00) y no exceda de mil quinientos balboas (B/ 1,500 00), la demanda debe proponerse por escrito mediante abogado, y el Juez correrá traslado de ella al demandado para que la conteste dentro del término de cinco días.

ARTÍCULO 20. Se adiciona el artículo 1242 A del Código Judicial, así:

Artículo 1242A. En los Procesos Ordinarios cuyo valor pase de mil quinientos balboas (B/.1,500.00) y no exceda de cinco mil balboas (B/.5,000 00), las decisiones que se dicten serán apelables de acuerdo a las reglas de los artículos siguientes.

ARTÍCULO 21. Se modifica el artículo 1246 del Código Judicial, así.

Artículo 1246: Contra la decisión que se dicte en estos procesos sólo cabe recurso de reconsideración.

ARTÍCULO 22. Se modifica el artículo 1325 del Código Judicial, así.

Artículo 1325. Los Jueces Municipales conocerán de los procesos de alimentos, a prevención con los Jueces de Paz, los Jueces de Familia, y los Jueces de Niñez y

Adolescencia.

ARTÍCULO 23. Se modifica el artículo 1396 del Código Judicial, así:

Artículo 1396. La demanda o aviso de desahucio debe promoverse por la persona con quien se haya celebrado contrato el arrendatario, pero si fuere el administrador, éste deberá acreditar su calidad de tal por escrito.

71

La solicitud de desahucio se dirigirá al Juez de Paz del Corregimiento en donde estuviese ubicada la finca o bien arrendado; pero si éste se extiende a más de un Corregimiento la solicitud se formulará ante el respectivo Juez Municipal y se extiende a más de un Distrito se interpondrá ante el Juez de Circuito. Si el bien estuviese ubicado en dos o más provincias, la solicitud se dirigirá a cualquiera de los jueces de Circuito de dichas provincias

ARTÍCULO 24. Se modifica el artículo 1402 del Código Judicial, así:

Artículo 1402. En el caso del ordinal 2 del artículo anterior, el arrendador podrá pedir el lanzamiento de acuerdo con las siguientes disposiciones.

1. El arrendador presentará al Juez una demanda escrita, acompañada del Certificado de Paz y Salvo del inmueble, del cual bastará con que quede en el expediente constancia de su presentación, el número del certificado y la fecha sin necesidad de que el documento sea agregado al mismo;

2. El Juez ordenará inmediatamente que ponga la demanda en conocimiento del arrendatario y concederá un término de cinco días, para que compruebe con el correspondiente recibo del último período de la renta, que no se halla en mora;

3. Transcurridos cinco días desde la notificación de la respectiva resolución sin que el arrendatario compruebe el pago de la renta, el Juez le señalará para la desocupación de la cosa arrendada un término de diez días si fuere predio urbano y de treinta días si fuere rústico

Transcurridos estos plazos, el lanzamiento se llevará a cabo

ARTÍCULO 25: Se modifica el artículo 1407 del Código Judicial, así.

Artículo 1407. Ejecutoriado el auto de lanzamiento se procederá a su ejecución de acuerdo a lo establecido en el artículo 1040 de este Código

ARTÍCULO 26. Se modifica el artículo 1409 del Código Judicial, así:

Artículo 1409. Cuando el bien se halle ocupado sin contrato de arrendamiento, el dueño, su apoderado o su administrador podrán solicitar al Juez que la haga desocupar y se la entregue. Si el ocupante o los ocupantes no exhibieren títulos explicativos de la ocupación, el lanzamiento se llevará a cabo inmediatamente.

ARTÍCULO 27 Se adiciona el Capítulo IA al Título IX del Libro Tercero del Código Judicial, así:

Capítulo IA

Proceso por Faltas

72

ARTÍCULO 28: Se adiciona el artículo 2463 A del Código Judicial, así:

Artículo 2463A. Corresponde a los Jueces de Paz conocer de los procesos por faltas

ARTÍCULO 29. Se adiciona el artículo 2463 B del Código Judicial, así:

Artículo 2463B. Las faltas pueden juzgarse de oficio o a petición de parte afectada u ofendida.

Cualquier persona puede denunciar la comisión de faltas, sin constituirse en parte del proceso ni obligarse a probar su relato

ARTÍCULO 30: Se adiciona el artículo 2463 C del Código Judicial, así:

Artículo 2463C Cuando el juez competente llegare a tener conocimiento que se ha cometido alguna falta mandará citar a las partes a una audiencia dentro de los cinco días siguientes, salvo que el imputado se encuentre detenido, caso en el cual citará a las partes dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.

ARTÍCULO 31: Se adiciona el artículo 2463 D del Código Judicial, así:

Artículo 2463D. La citación se hará por medio de una boleta en que conste el día y la hora en que debe comparecer el citado. La misma será entregada a éste por el secretario del juzgado o por algún agente de la autoridad. En la boleta a la que se refiere este artículo se hará constar el motivo de la citación.

Si el acusado no compareciere en el día y la hora señalados y no justifique su inasistencia, se librará boleta para hacerlo conducir por medio de los agentes de la autoridad a los estrados del juzgado

ARTÍCULO 32: Se adiciona el artículo 2463 E del Código Judicial, así:

Artículo 2463E Cuando sea posible por la existencia de personas ofendidas, la autoridad judicial competente convocará a las partes a una audiencia de conciliación en la que se realizarán las gestiones pertinentes para que lleguen a un acuerdo. También podrá remitir a un centro de mediación o conciliación debidamente acreditado.

Cuando las partes se hayan puesto de acuerdo, firmarán un documento en que así conste, con los compromisos que hayan adquirido. El juzgador homologará los acuerdos. A los treinta días calendarios contados a partir de la suscripción del acuerdo, se archivará la causa, con carácter de cosa juzgada, si ninguna parte ha presentado objeciones.

ARTÍCULO 33: Se adiciona el artículo 2463 F del Código Judicial, así:

73

Artículo 2463F. De no lograrse un acuerdo conciliatorio o de no respetarse sus condiciones, o cuando, por otros motivos, no sea posible la conciliación, la autoridad judicial convocará a las partes para que concurran con las pruebas de cargo y descargo a una audiencia.

ARTÍCULO 34: Se adiciona el artículo 2463 G del Código Judicial, así:

Artículo 2463G. La audiencia en los procesos por faltas se seguirán las siguientes reglas:

1. En aquellos casos en que las personas acusadas hayan sido conducidas al Juez de Paz por agentes de la Policía Nacional o de la Policía Técnica Judicial, el informe de dichos agentes será considerado como la prueba de cargo
2. De la audiencia se levantará un acta en la que solamente se hará constar los aspectos esenciales del acto, los planteamientos de las partes y las resoluciones del juez, evitando la transcripción total de lo ocurrido, de modo que no se desnaturalice su calidad de audiencia oral y sencilla.
3. Cuando el imputado reconozca el cargo, sin más trámite se finalizará la audiencia y se dictará el fallo
4. El juez podrá, de oficio o a pedido de alguna de las partes, prorrogar la audiencia por un término no mayor de diez días para la presentación o práctica de alguna prueba pertinente y conducente.
5. El acta será leída al finalizar la audiencia y será firmada por las partes, quedando de este modo debidamente notificada. No obstante, si el Juez estimare inconveniente dictar su fallo de inmediato, contará con un período de diez (10) días para pronunciar su sentencia. Dicha resolución será debidamente motivada y será notificada personalmente a las partes
6. En cuanto sean aplicables, regirán las reglas del proceso oral, adaptadas a la sencillez de

la audiencia

ARTÍCULO 35. Se adiciona el artículo 2463 H del Código Judicial, así:

Artículo 2463H. La sentencia dictada en los procesos por faltas será apelable, por el imputado y la víctima, ante el juzgado municipal penal respectivo.

Cuando se imponga sanción de días-multa o privativa de la libertad, el recurso de apelación se concederá en efecto suspensivo. Cuando se decreten medidas de amonestación o fianzas de paz y buena conducta, la apelación será concedida en el efecto devolutivo.

ARTÍCULO 36: Se adiciona el artículo 2463 I del Código Judicial, así:

Artículo 2463I. Podrá terminarse el proceso y ordenarse su archivo por desistimiento de la pretensión punitiva en aquellas faltas que requieran la querella de la persona afectada u ofendida

74

ARTÍCULO 37: Se adiciona el artículo 2463 J del Código Judicial, así.

Artículo 2463J. En materia de faltas excepcionalmente podrán aplicarse las medidas cautelares, cuando resulte indispensable para la protección de los intereses de las partes o de la justicia.

Artículo 2463K. En los procesos por faltas las parte pueden hacerse asistir por abogado para la mejor defensa de sus intereses.

ARTÍCULO 38: Se adiciona el artículo 2463 M del Código Judicial, así:

Artículo 2463M. En los procesos por falta las penas son:

1. Principal:

a. Días-multa

b. Trabajo comunitario, siempre que el sancionado consienta su imposición en lugar de la pena de días-multa.

c. Amonestación

2. Accesorias.

a. Fianza de paz y buena conducta

b. Comiso

En los procesos por faltas no habrá pena de arresto o prisión, salvo como medida de protección que no sobrepase las 24 horas en los casos de violencia doméstica.

En toda norma en que se señala pena de arresto o prisión por la comisión de una falta de competencia de los Jueces de Paz, se entenderá que la sanción es de días multa.

ARTÍCULO 39: La presente Ley deroga la Ley 112 de 1974, el Decreto 5 de 3 de enero de 1934, el Decreto 111 de 6 de julio de 1934, el artículo 8 de la Ley 19 de 3 de agosto de 1992 y el numeral 23 del artículo 4 de la Ley 2 de 2 de junio de 1987, y toda norma o disposición que le sea contraria.

ARTÍCULO 40: Esta ley empieza a regir a partir de su promulgación.

Comuníquese y Cúmplase:

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, Hoy de de 2005, por el
Suscrito

75

Anexo No. 3

PROYECTO DE LEY DE AGILIZACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL

ANTEPROYECTO DE LEY N°

(De de 2005)

“POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS TRÁMITES Y EL IMPULSO DE LOS PROCESOS PENALES”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El objetivo de la presente ley, es adoptar disposiciones dirigidas al impulso de los procesos penales ordinarios, procurando la simplificación de trámites y la economía procesal, sin soslayar los derechos reconocidos a favor del imputado y de la Víctima, como garantía de una administración de justicia expedita, eficaz, imparcial y con igualdad a las partes. Por estos motivos, es necesario tomar medidas urgentes para actualizar las normas en cuanto al impulso de los procesos penales ordinarios.

El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada mediante ley 15 de 1977, integrada al bloque de la constitucionalidad, al igual que todos los otros convenios sobre derechos humanos aprobados por la República de Panamá, exigen garantizar un proceso penal ante autoridad competente, justo, imparcial, culminando en plazo razonable

En la aplicación de la presente ley, los operadores de justicia tendrán en cuenta los derechos del imputado y la víctima. La libertad es una garantía de los procesados y en la fase preparatoria o de instrucción sumarial, la detención preventiva solo corresponderá cuando existan exigencias excepcionales y, en el plenario, la aplicación de sanciones de prisión en centros penitenciarios será la última alternativa, cuando no se le conceda al juez otras opciones. la víctima tiene derecho a ser informada y oída en todo el proceso penal, y en virtud del principio de igualdad de las partes, tienen los mismos derechos que el imputado.

En síntesis, el texto del proyecto procura

1. Adecuar la legislación procesal penal al texto actual de la Constitución, y a los Convenios y Tratados Internacionales;
2. lograr mayor efectividad en la persecución penal de los hechos punibles, sin descuidar las garantías de los sujetos procesales frente a la persecución, conforme a las leyes fundamentales de la Nación; y en particular, simplificar y agilizar los procedimientos y disminuir el tiempo de duración para arribar a la conclusión del proceso y la decisión final,

76

3. Reestructurar la organización judicial, y de todos los componentes que deben intervenir en el procedimiento penal, para lograr los dos objetivos anteriores, y un mejor aprovechamiento de recursos humanos y materiales

ASAMBLEA NACIONAL

DECRETA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES PENALES

Artículo 1- Por el cual se adicional el artículo 55-a del Código Penal

Artículo 55-A: El Servicio Comunitario supervisado, consiste en la prestación de trabajo, no retribuido, en obras comunitarias, que tendrá una duración entre 10 y 90 jornadas de trabajo y obliga al condenado a prestar jornadas diarias de trabajo físico o intelectual. La jornada no será menor de cuatro (4) horas y no podrá exceder de ocho (8) horas, de acuerdo al tipo de trabajo asignado, y se desarrollará en los lugares y horarios que determine el juez o tribunal correspondiente, ya sea en establecimientos públicos o en organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro con proyección social en la comunidad.

Se deberá observar además que no atente contra la dignidad del condenado y el trabajo deberá ser compatible con el sexo, edad, habilidades, destrezas, capacidad, preparación

académica y condición física del condenado. No están obligados a trabajar los reclusos mayores de sesenta y cinco años de edad, los que tuvieren impedimentos físicos y los que padecieren de enfermedad que les haga imposible o peligroso el trabajo.

El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado y supervisado por la Institución del Estado correspondiente, que remitirá los reportes a la Dirección Nacional del Sistema Penitenciario, hasta tanto se cree la figura del Juez de Cumplimiento, la cual podrá establecer los convenios oportunos para tal fin y no se supeditará al logro de intereses económicos.

Si el condenado incurre en tres ausencias no justificadas al trabajo, el juez correspondiente, ordenará que la sentencia se ejecute ininterrumpidamente hasta el cumplimiento de la condena, computándose en tal caso, un día de privación de libertad, por cada jornada no cumplida.

Artículo 2 Por el cual se modifica el numeral 5 y se adiciona el numeral 9 al artículo 66 del Código Penal para que quede así

Artículo 66.

Son circunstancias atenuantes comunes, cuando no estén previstas como elementos constitutivos o atenuantes específicas de un determinado hecho punible

1

77

5. La confesión del imputado hecha antes de la calificación del sumario

6.....

9. La delincuencia primaria

Artículo 3 Se modifica el artículo 77 del Código Penal

Artículo 77. Se confiere a los tribunales la facultad de suspender condicionalmente de oficio o a petición de parte, la ejecución de la pena cuya duración no exceda de tres (3) años de prisión

El término de esta suspensión será de tres (3) a seis (6) años a partir de la fecha en que la sentencia quede ejecutoriada y atendida las circunstancias del hecho y la extensión de la pena impuesta

Artículo 4 Se modifica el artículo 78 ordinal 2° del Código Penal para que quede así:

1.

2. Que no sea reincidente

3.

Artículo 5 Se modifica el artículo 82 del Código Penal para que quede así:

Artículo 82. Cuando no proceda la suspensión condicional de la pena y se trate de delincuente primario, el tribunal podrá reemplazar la pena de prisión impuesta no mayor de 3 años por una de las siguientes:

1 Servicio comunitario supervisado

2. Conversión a días multas.

Artículo 6. Se deroga el artículo 84

Artículo 7: Se modifica el artículo 83 del Código Penal para que quede así:

Artículo 83 La pena de prisión que no exceda de un año podrá ser sustituida por la reprensión pública o privada, o por días multa no menor de 50 ni mayor de 150.

La reprensión pública la recibirá personalmente el sancionado en la audiencia del Tribunal a puerta abierta.

La reprensión privada se hará, en cambio, a puerta cerrada ante el Tribunal constituido para este fin

La reprensión irá acompañada de la advertencia conminatoria de que si se delinque de nuevo en el plazo de un año, se le hará cumplir, junto a la nueva pena por el hecho en que se ha incurrido, la que le fue sustituida por la reprensión.

Artículo 8 Se modifica el artículo 127 del Código Judicial los numerales 4 y 5 para que quede así:

Artículo 127 Los Tribunales Superiores conocerán en primera instancia de los siguientes procesos:

78

4 De los procesos que se sigan por delito consumado de homicidio doloso, aborto provocado cuando sobreviene la muerte de la mujer

5. De los procesos que se sigan por delitos de terrorismo, los cuales se surtirán conforme a las reglas de los juicios en derecho.

Artículo 9. Se modifica el numeral 13 del literal c del artículo 159 del Código Judicial para que quede así

Artículo 159. Es competencia de los jueces de circuito conocer en primera instancia.

a....

c...

1... .

13. Procesos penales por robo, competencia desleal, delitos contra los derechos de propiedad industrial, delitos contra el derecho de autor y derechos conexos, peculado, procesos penales contra los Jueces y Personeros Municipales y los funcionarios en general que tengan mando y jurisdicción en uno o más distritos de sus respectivos circuitos judiciales, homicidio doloso en grado de tentativa, y cualquier otro delito que tenga señalada en la ley pena mayor de dos años de prisión; y

Artículo 10 Se modifica el artículo 174 literal a ordinal 2 para que quede así:

Artículo 174 Los jueces municipales conocerán en primera instancia:

A. De los siguientes procesos penales.

1.

2. Los procesos por delitos contra el honor, hurto simple, hurto en oficinas públicas, hurto con destreza, a viajeros o con abuso de confianza, apropiación indebida, usurpación, daños, retención indebida, y expedición de cheques sin suficiente provisión de fondos; y,

3.

Artículo 11: Se agrega un párrafo al artículo 329 del código judicial para que quede así.

Artículo 329 El Procurador de la Nación podrá crear nuevas agencias de instrucción o sustituir las existentes, sin que ello signifique alteración en la dotación presupuestaria vigente. En ejercicio de esta facultad también podrá disminuir o aumentar los números de dependencias del Ministerio Público que precise la ley, introducir cambios en el número, nomenclatura, organización administrativa y ubicación de las agencias del Ministerio Público, con la excepción de la Procuraduría de la Administración, sujeto a que ello se justifique por las necesidades del servicio y respetando la disponibilidad presupuestaria y las posibilidades económicas del Estado, al igual que el límite presupuestario asignado por la Constitución.

Artículo 12: Se reforma artículo 351 para que quede así:

Artículo 351 Son atribuciones especiales de los Fiscales Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación.

1 Instruir las sumarias, y en general, ejercer la acción penal por delitos contra la Administración Pública, por Retención Indevida y Evasión del Pago de Cuotas a la Caja

del Seguro Social. También conocerán los hechos en los que por cualquier circunstancia se encuentren afectados bienes del Estado, de instituciones autónomas o semiautónomas,

79

de los Municipios, Juntas Comunales, empresas mixtas en las que tenga participación económica el Estado, y, en general, de cualquier entidad pública, cuando la lesión patrimonial supere los cinco mil balboas (B/ 5,000 00)

2. Indagar a los sindicatos, ordenar la práctica de las diligencias que se consideren necesarias para el esclarecimiento del hecho delictivo y descubrir a los autores, cómplices o encubridores del mismo;

3 Investigar los delitos que por delegación le asigne el Procurador General de la Nación, incluyendo aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos cuya investigación le corresponde al Procurador General de la Nación;

4. Poner fuera del comercio bienes del Estado, de los Municipios, Juntas Comunales, Instituciones Autónomas y Semiautónomas y, en general, de cualquier entidad pública, a fin de recuperarlos y hacerlos ingresar a la posesión o el patrimonio al cual correspondan;

5. Poner fuera del comercio bienes de particulares provenientes del hecho punible que se investiga; y,

6. Exigir y ejercer la responsabilidad civil derivada de los delitos contra la administración pública que establece la Ley penal vigente.

Artículo 13. Se reforma artículo 352 para que quede así:

Artículo 352. Los Fiscales Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación ejercerán sus funciones en cualquier lugar del territorio de la República.

Artículo 14. Se reforma artículo 353 para que quede así:

Artículo 353. Los Fiscales Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación podrán promover acciones civiles o contencioso-administrativas en que sea parte la Nación, una vez cumplido los requisitos previstos en el artículo 377 del Código Judicial

Artículo 15· se derogan los artículos 354 a 358 del Código Judicial.

Artículo 16. Se modifica el artículo 429 para que quede así·

Artículo 429 En el ejercicio de sus funciones, el defensor de oficio podrá promover recursos y acciones que estime conveniente para la mejor defensa de los intereses de sus patrocinados. Ello incluye la presentación de las acciones de amparo de garantías constitucionales e inconstitucionalidad así como las advertencias de inconstitucionalidad, para ello no se le exigirá poder y bastará que presente copia autenticada de la providencia donde se designa como defensor principal del imputado.

El defensor de oficio no podrá ejercer las facultades de recibir y transigir.

En casos especiales, con autorización de representación y autorización expresa del juez, podrá transigir, conciliar, mediar o desistir

Artículo 17· Se adiciona al artículo 776 del Código Judicial el siguiente numeral.

Artículo 776. No serán recusables..... ..

1.

2 ...

80

5. Los jueces que propongan a las partes la utilización de los métodos alternos de resolución de conflicto.

Artículo 18. Se modifica el artículo 1944 para que quede así.

Artículo 1944 Nadie podrá ser juzgado, sino por Tribunal competente, previamente

establecido, conforme al trámite legal, y con plena garantía de su defensa.

Corresponde al Ministerio Público, en la fase plenaria, solicitar la absolución o demostrar en la audiencia la responsabilidad de los procesados llamados a juicio.

Artículo 19: Se adiciona un párrafo al artículo 1948

Artículo 1948: Toda norma legal que limite la libertad personal, el ejercicio de los poderes conferidos a los sujetos del proceso o que establezcan sanciones procesales será interpretada restrictivamente. En Caso de duda razonable se debe favorecer al reo.

Artículo 20: Adiciónese un artículo nuevo después del 1965 del Código Judicial

Artículo nuevo: Una vez presentada la denuncia o la querella, el juez o el agente del Ministerio Público, tiene la obligación de informarle a las partes la existencia de los métodos alternos de solución y de los centros reconocidos, ya sea público o privado. De ser aceptada por las partes el juez derivará el proceso al centro escogido por éstas. Sólo será aplicable a los delitos que admiten el desistimiento de la pretensión punitiva.

Las partes podrán solicitar al juez en cualquier momento o fase procesal que su causa sea ventilada a través de los métodos alternos de solución de conflictos. El incumplimiento de los acuerdos logrados en la mediación conlleva la continuación del proceso penal.

Artículo 21: Se modifica el artículo 1967 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 1967. (1984-B) También podrá terminarse el proceso y ordenarse su archivo, en los delitos de retención indebida, por desistimiento de la persona ofendida, cuando el imputado remita las cuotas obrero-patronales o los descuentos voluntarios a la entidad correspondiente, antes de la audiencia preliminar.

También podrá terminarse el proceso por desistimiento, a través de la conciliación o mediación o cualquier otra forma alterna de resolución de conflictos y el perdón de la víctima en los delitos permitidos por la ley.

En los casos de violencia doméstica y maltrato al niño, niña y adolescente se estará sujeto a las condiciones que establece el artículo 1966 del código judicial, para que opere el desistimiento.

Artículo 22: Se modifica el artículo 1993 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 1993. Las actuaciones de los Agentes del Ministerio Público podrán ser objetadas por las partes mediante incidente de controversia, el que será resuelto por el tribunal

81

competente para conocer del proceso en un término no mayor de 30 días. Exceptuase la orden de detención preventiva.

Tales incidentes se tramitarán sin interrumpir el curso del sumario ni la ejecución de la diligencia objetada. Contra esa resolución no procede recurso alguno.

Artículo 23: Se modifica el artículo 2033 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2033. El sumario deberá estar perfeccionado dentro de los cuatro meses siguientes a su iniciación, o desde la aplicación de una medida cautelar restrictiva de la libertad personal, término que podrá prorrogarse hasta por dos meses más cuando sean varios los imputados o los hechos punibles.

Transcurrido el término, se ordena el reemplazo de la medida cautelar, a quienes se encuentren detenidos preventivamente

En los casos de secuestro, extorsión, violación carnal, robo agravado, delitos financieros, contra la administración pública, delitos que afecten bienes o valores de Estado o de una entidad pública, delitos contra la seguridad colectiva que implique peligro común, terrorismo, tráfico de drogas y demás delitos conexos y en general los delitos con pena mínima de cinco años de prisión, en cuyos procesos no existan vinculados, no se concluirá

el sumario hasta tanto se agote la investigación , previa autorización del juez de la causa. En caso de haberse aplicado medida cautelar restrictiva de la libertad personal, el sumario deberá perfeccionarse dentro de año siguiente a su aplicación, termino que podrá ser prorrogado por el juez de acuerdo a la complejidad de la investigación , el cual no podrá exceder a los tres años, luego de lo cual se ordenará el reemplazo de la medida cautelar. No se tendrá en cuenta, para que el cómputo de los plazos establecidos en este artículo, el tiempo que la causa sufre dilaciones no imputables a la administración de justicia.

Artículo 24: Se agrega un párrafo al artículo 2040 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2040·

.....

En los casos de secuestro , extorsión, agravado, homicidio, delitos financieros, contra la administración pública , delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública, delitos contra la seguridad colectiva que implique peligro común terrorismo, tráfico de drogas y demás delitos conexos, que involucren organizaciones criminales, durante la investigación sumaria los abogados tendrá derecho a enterarse del Estado del proceso y a recibir copias de las constancias procesales que sean necesarias para la defensa y que no perjudiquen el resultado de la investigación.

Artículo 25. Se modifica el artículo 2045 para que quede así:

Artículo 2045. El funcionario de instrucción averiguará con toda claridad y exactitud las cualidades y circunstancias que constituyan la clase de delito conforme lo designa y clasifica el código penal.

82

Toda diligencia que requiera la participación del imputado se debe notificar por edicto a las partes. La inobservancia de lo anterior acarrea la nulidad de lo actuado. El edicto será desfijado transcurrida las 48 horas de su fijación

Artículo 26. Se modifica el artículo 2046 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2046. El hecho punible se comprueba con el examen que se haga por facultativo o peritos, de las personas, huellas, documentos, rastros o señales que haya dejado el hecho, o con deposiciones de testigos que hayan visto o sepan de otro modo, la perpetración del mismo hecho o con indicios, medios científicos o cualquier otro medio racional que sirva a la formación de la convicción del juez, siempre que no estén expresamente prohibidos por la ley, ni violen derechos humanos, ni sean contrarios a la moral o al orden público.

Podrán los agentes de la policía, en los casos de flagrancia, practicar requisas o registros en las ropas de las personas siempre que no lesionen la dignidad ni el pudor del sujeto. Si se trata de una persona de sexo distinto al del agente policial, deberá requisarla o revisarla un agente del mismo sexo, salvo situaciones de extrema de urgencia.

Artículo 27 Se modifica el artículo 2047 del Código Judicial para que quede así·

Artículo 2047. El funcionario de instrucción nombrará los facultativos o peritos que sean necesarios para el examen corporal o el reconocimiento que haya de practicarse y cuidará que este se realice en forma legal previo juramento de los mismos.

La intervención corporal deberá ser siempre practicada por un profesional de la medicina, de la odontología, o cualquier otro a fin, de acuerdo a la ley que regula dicha profesión y con el máximo respeto a la dignidad y pudor de la persona. Dicha designación se efectuará en una diligencia donde se precisen las razones que motivan la realización de la intervención y señalará la persona de confianza del procesado que pueden participar en ella y el defensor del imputado.

No podrá utilizarse para la exploración del imputado, técnicas o pruebas clínicas tales como narcoanálisis, psicoanálisis, psicometría, hipnosis y otros semejantes que afecten la conciencia o la libertad del imputado.

No obstante lo anterior, serán admisibles las intervenciones corporales para la constatación de circunstancias de importancia para descubrir la verdad. Tales como mínimas intervenciones para la extracción de sangre y otros fluidos o todo tipo de secreciones corporales, de piel, corte de uñas o cabellos, tomas de fotografías, huellas dactilares, constatación de tatuajes, deformaciones, alteraciones o defectos, palpaciones corporales y, en general, todas aquellas que no provoquen ningún perjuicio para la salud, siempre que sean autorizados por el Tribunal.

Estas pruebas serán, en todo caso, realizadas por peritos y siempre que éste no las considere riesgosas.

Esta petición se tramitará en forma similar a la fianza de excarcelación. Contra la decisión del Tribunal no procederá recurso alguno.

83

Artículo 28. Se modifica el artículo 2069 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2069.

1

8. La preexistencia y propiedad de las cosas sustraídas, se podrá acreditar la deposición jurada del consorte, hijos, hermanos o quienes le prestan servicios personales a la víctima. A falta de otras pruebas en caso de turistas o personas que estén en tránsito se tendrá como pruebas la declaración jurada del interesado.

Artículo 29.

Se adiciona un párrafo final al artículo 2089.

La declaración indagatoria, cuando así sea necesario para beneficio del proceso o por seguridad del imputado, podrá recibirse desde el centro penitenciario mediante el uso de video conferencia o cualquiera otra tecnología similar que tenga a su disposición el centro.

Artículo 30. Se modifica el artículo 2093 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2093. En la indagatoria se harán al imputado todas las preguntas conducentes a la averiguación de los hechos solicitándole que especifique si lo desea, en forma coherente, dónde estaba el día y la hora en que se cometió el delito; si sabe quiénes son los autores o partícipes del hecho que se averigua y todo lo demás que se crea oportuno para descubrir la verdad o lo que crea oportuno para su defensa, cuidando que no haya interrupciones innecesarias en el curso de la diligencia.

Artículo 31. Se modifica el artículo 2097 del Código Judicial para que quede así.

Artículo 2097. Es prohibido el empleo de promesas, coacción o amenazas para obtener que el imputado declare, así como toda pregunta capciosa o sugestiva. El funcionario que viole esta norma, incurrirá en la sanción disciplinaria correspondiente, sin perjuicio de la sanción penal que le pudiere corresponder.

El funcionario de instrucción debe garantizar el derecho a la defensa para la recepción de la declaración indagatoria.

El funcionario de instrucción pondrá en conocimiento del imputado el derecho que le consagra el artículo 2139 del Código Judicial.

Artículo 32. Se modifica el artículo 2127 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2127. Son medidas cautelares personales:

1 La prohibición del imputado de abandonar el territorio de la república sin autorización judicial,

2. El deber de presentarse periódicamente ante una autoridad pública

84

3. La obligación de residir en un determinado lugar comprendido dentro de la jurisdicción correspondiente:

4. La obligación de mantenerse recluido en su propia casa, habitación o establecimiento de salud, según sea el caso;

5. La detención preventiva.

Las medidas cautelares personales serán tramitadas en forma similar a la fianza de excarcelación.

La medidas cautelares personales serán controladas a través de los mecanismos electrónicos o de cualquier otra naturaleza establecidos para garantizar el cumplimiento de las restricciones impuestas al imputado.

El Ministerio de Gobierno y Justicia, adoptará, reglamentará y será responsable de los mismos con la supervisión del Tribunal o del agente de instrucción competente

Las resoluciones sobre medidas cautelares personales, no están sujetas a consulta y sólo admiten el recurso de apelación en el efecto diferido, cuando es negado el reemplazo de la detención preventiva por otras de menor gravedad.

Artículo 33. Se modifica el artículo 2128 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2128. Serán aplicables las medidas cautelares:

a. Cuando existan exigencias inaplazables relativas a las investigaciones, relacionadas con situaciones concretas de peligro para la adquisición o la autenticidad de las pruebas

b. Cuando el imputado se dé a la fuga o exista peligro evidente de que intenta hacerlo.

c. Cuando por circunstancias especiales o por la personalidad del imputado, exista peligro concreto de que éste cometa delitos graves mediante el uso de armas u otros medios de violencia personal

Artículo 34. Se modifica el último párrafo artículo 2135 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2135. El juez o funcionario de instrucción podrá ordenar al imputado el deber de no alejarse de su propia casa, habitación o establecimiento de salud o de asistencia donde se encuentre recluido.

Cuando sea indispensable, podrán ordenarse limitaciones o prohibiciones al derecho del imputado de comunicarse con personas distintas de las que cohabiten con él o lo asistan.

Si el imputado no puede proveerse para sus necesidades económicas o las de su familia, o si se encontrare en situación de absoluta indigencia, o en circunstancias especiales, el juez o funcionario de instrucción podrá autorizarlo para que se ausente del recinto penitenciario durante la jornada laboral, por el tiempo que fuere necesario para satisfacer esas exigencias; igualmente podrá autorizarle permiso escolar.

85

El Ministerio Público podrá controlar en todo momento el cumplimiento de las restricciones impuestas al imputado.

Para los efectos legales, el imputado sometido a medida cautelar personal consistente en la obligación de mantenerse recluido en su propia casa, habitación o establecimiento de salud, se computará como una detención preventiva en un centro penitenciario.

Artículo 35. Deróguese el numeral cuatro del artículo 2198 del Código Judicial.

Artículo 36 Se modifica el artículo 2141 del Código Judicial y queda así

Artículo 2141. La detención preventiva será revocada por el Juez sin más trámites, de

oficio o a petición de parte, cuando se exceda del término de dos (2) años, pero en los delitos que tengan señalada pena mínima de cinco o más años de prisión, podrá extenderse hasta el mínimo de la pena aplicable al caso, sin exceder de seis años. En éstos casos, la detención preventiva será sustituida por otra medida cautelar personal de las señaladas en el artículo 2127 del Código Judicial.

Las resoluciones que dicte el Órgano Judicial con el objeto de cumplir lo dispuesto en éste artículo, no admitirán recurso alguno.

Cumplido este periodo sin que se hubiese dictado sentencia el imputado será puesto en libertad y sometido a otra medida cautelar personal si fuere necesario y atendiendo a la circunstancia del caso.

Artículo 37: Se adiciona un numeral al artículo 2173.

Numeral 8 En los delitos de violencia doméstica o cualquier otro, en los cuales esté en peligro la vida de los victimas o sus familiares o de los testigos que rindieron testimonio en el proceso

Artículo 38. Se adiciona un párrafo al artículo 2195

Cuando el agente del Ministerio Público solicite sobreseimiento, reemplazará la detención preventiva por otra medida cautelar personal de menor gravedad que garantice la presencia del imputado en el proceso, antes de remitir el expediente al tribunal competente

Artículo 39 Se adiciona un artículo 2195a del Código Judicial para que quede así.

Artículo 2195a: Desde la diligencia de declaración indagatoria hasta antes de calificar la fase intermedia, el procesado podrá solicitar, por una sola vez, que se dicte sentencia anticipada cuando la prueba de la culpabilidad sea evidente, por tanto, si fuere necesario, podrá ampliar la indagatoria y practicar pruebas dentro de un plazo máximo de ocho días, entonces el expediente será remitido al Tribunal competente quien en un término de diez días hábiles dictará la sentencia de acuerdo a los hechos y circunstancias aceptadas, siempre que no hubiere violación de garantías fundamentales En éstos casos el procesado tendrá derecho a una disminución de una cuarta a una tercera parte de la pena por razón de haber aceptado su culpabilidad.

86

Artículo 40: Se reforma el artículo 2201

Artículo 2201(2007-A): Llegado el día y hora señalados, el Juez declarará abierta la sesión y hará leer por la Secretaría la Vista Fiscal enviada por el Ministerio Público y el escrito de oposición de la defensa, si lo hubiere.

Luego, el Juez concederá la palabra al representante del Ministerio Público, quien expondrá los resultados de la instrucción sumarial y los medios de prueba que justifiquen la solicitud contenida en la Vista Fiscal, y al defensor para que sustente su escrito de oposición, si lo hubiere.

Si el imputado estuviere presente podrá solicitar se le interrogue sobre los cargos atribuidos,

teniendo presente lo dispuesto en los Artículos 2237 y 2239 de este Código.

A continuación, el Juez concederá la palabra por una sola vez, y por un término no mayor de treinta minutos, al Ministerio Público, al querellante si lo hubiere y el defensor, para que formulen los alegatos que consideren convenientes antes de que el Tribunal resuelva el mérito del sumario.

Cuando fueren varios imputados, el Ministerio Público puede disponer de una hora adicional por cada imputado

En casos dificultosos o de evidente complejidad, a solicitud de parte interesada el juez

podrá extender el periodo de alegatos hasta por un hora

Artículo 41 Se modifica el artículo 2202 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2202 (2207-B): Concluido el período de alegatos a que alude el artículo anterior, el juez, en la misma audiencia decidirá lo que corresponda en derecho y el anuncio de la decisión tendrá efecto de notificación para las partes presentes.

Si el juez lo estima necesario, decretará un receso por veinticuatro horas, para preparar la resolución que corresponda, en cuyo caso procederá su notificación por edicto.

Contra el auto de enjuiciamiento no procede recurso alguno.

Cuando se decida incidentes de previo y especial pronunciamiento conforme al artículo 2277 de este Código, solo se concederá apelación contra la decisión que los niega, por lo que esta se surtirá en efecto suspensivo.

Las solicitudes de acumulación que el juez admita en el acto de audiencia también son recurribles en apelación que se concederá en el efecto suspensivo.

Artículo 42. Deróguese el artículo 2203 del Código Judicial

Artículo 43: Se reforma el artículo 526 del Código Judicial:

87

Artículo 526 (516): Toda diligencia o acto judicial se iniciará y cumplirá a partir del momento en que empiece la hora señalada. No se entenderá que ha transcurrido el tiempo hábil para comenzar a practicarla, sino hasta transcurrido 10 minutos de la hora fijada.

Artículo 44. Se modifica el artículo 2204 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2204 (2207-D). El incumplimiento de los términos señalados para la audiencia preliminar, constituye falta disciplinaria que será sancionada conforme a este Código.

Si las partes concurrieren antes de la hora fijada, el juez no tendrá que esperar el vencimiento del plazo fijado en el artículo 526 del Código Judicial.

Cuando las partes no concurrieran a la primera fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar, sin mediar causa justificada dentro de los treinta días hábiles con anticipación a la fecha de audiencia, el juez les impondrá una multa no menor de B/.50.00 ni mayor de B/.100.00 que deberá ser cancelada en un término máximo de 15 días al Tesoro Nacional. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Debe el juez, dada las circunstancias anteriores fijar fecha alterna para la celebración de la audiencia y nombrar defensor de oficio.

Artículo 45: Adiciónese un artículo nuevo al código judicial (2204-a)

Artículo nuevo: Al apoderado judicial o defensor del imputado, que sea reemplazado en la audiencia alterna por un defensor de oficio, se le impondrá multa de B/ 200.00 por dejar en indefensión a su representado, sino presenta memorial en el cual informa que no seguirá asistiéndolo en la causa, con 15 días calendarios de anticipación a la fecha de audiencia. Se exceptúa lo anterior, en caso de duelo de familiares cercanos o incapacidad por enfermedad debidamente comprobada.

Cuando se trate de ausencia no justificada del defensor de oficio además de la multa se le pondrá en conocimiento a su superior inmediato para que lo haga constar en el expediente personal del defensor.”

Artículo 46 Se modifica el artículo 2219 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2219. Luego que el tribunal competente haya concluido o recibido la diligencia para comprobar el hecho punible y descubrir a los autores o partícipes, si encontrare que hay plena prueba de la existencia del hecho punible y cualquier medio probatorio que ofrezca serios motivos de credibilidad, conforme a las reglas de la sana crítica o graves indicios contra alguno, declarará que hay lugar a seguimiento de causa contra estos. Si el

Fiscal de la causa y el querellante no presentan acusación, el juez no la elevara a la fase plenaria. Si se llama a juicio con base únicamente en la acusación presentada por la querella, el Ministerio Público continuará interviniendo en la proceso, pero no estará obligado a mantener la pretensión de aquel.

Artículo 47. Se modifica el artículo 2228 del Código Judicial para que quede así.

88

Artículo 2228. La audiencia será pública bajo pena de nulidad según los principios de oralidad, publicidad y unidad de acto

El juzgador podrá ordenar que se realicen mediante el uso de la tecnología de video conferencia o cualquier otra similar que tenga a su disposición desde el centro penitenciario cuando así lo considere en el beneficio del proceso; también podrá ordenar que las sesiones se realicen a puerta cerrada, cuando así lo exijan las razones de moralidad, de orden público, y el respeto a la persona ofendida por el delito o sus familiares. Esta decisión la tomará el juez, de oficio o solicitud de parte y no procederá en contra de ella recurso alguno.

Artículo 48. Se modifica el artículo 2302 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2302. al Agente del Ministerio Público se le notificarán todas las resoluciones que se dicten en el proceso. Les serán notificadas personalmente las resoluciones sobre fianza excarcelaria y las contempladas en los artículos 2301 y 2303. Las demás serán notificadas por edicto.

El edicto será fijado al día siguiente de dictada la resolución por el tribunal y su fijación durará 3 días

Este edicto se agregará al expediente con expresión del día y hora de su fijación y desfijación, y la notificación surtirá efectos legales desde la fecha y hora en la que fuere desfijado.

Los edictos llevarán una numeración continua y con copia de cada uno de ellos, se formará un cuaderno que se conservará en secretaría.

En el supuesto que el agente de instrucción comunique al tribunal que se da por notificado, antes de la desfijación del edicto, se entenderá surtida la notificación

El día de la fijación del edicto el Tribunal remitirá al Agente del Ministerio Público, una copia certificada de la resolución respectiva, con la constancia de la fecha de fijación.

Quedará surtida la notificación una vez desfijado el edicto.

Para los efectos de las notificaciones personales, este funcionario se considerará legalmente notificado transcurridas 48 horas, contadas a partir del ingreso del expediente a su despacho.

En todo caso el Agente del Ministerio Público deberá devolver inmediatamente el expediente al tribunal competente, dentro de las 24 horas siguientes a su notificación, salvo que se le hubiere corrido traslado de éste en los términos de la ley.

Artículo 49. El último párrafo del artículo 2303 del Código Judicial quedará así:

Artículo 2303..... ..

Las demás resoluciones se notificarán por edicto, el cual debe cumplir con lo contemplado en el artículo 2302.

89

Artículo 50: Adiciónese un párrafo al artículo 2318 de Código Judicial

.....

De ser declarado culpable el tribunal podrá disminuir la pena de prisión entre una sexta parte y una tercera parte, luego de considerar todas las circunstancias del hecho punible.

Artículo 51: Se modifica el artículo 2357 para que quede así: Artículo 2357: En las diligencias a las cuales se refiere los artículos 2344 y 2358, ordinales 1 de este código, el Presidente podrá designar un funcionario de su despacho para que lo represente, quien deberá ser idóneo para el ejercicio de la abogacía

Artículo 52. Se modifica el artículo 2395 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2395 Cuando no proceda la suspensión condicional de la ejecución de la pena en los términos previstos en el artículo 78 del Código Penal, el juez del conocimiento al momento de dictar sentencia o en cualquier tiempo después, a petición de parte o de oficio, podrá reemplazar la pena de prisión no mayor de tres años, siempre que no fuese un delincuente reincidente, por cualesquiera de las medidas establecidas en los ordinales 1 y 2 del artículo 82 del Código Penal, según lo que en derecho corresponda.

La resolución que reconozca esta medida es irrecurrible.

Artículo 53. Se modifica el artículo 2397 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2397. Cuando el juez del conocimiento haga uso de la facultad de otorgar motivadamente la remisión condicional que deja en suspenso la ejecución de la pena privativa de la libertad, cuya duración no exceda de tres años, así lo hará constar en la sentencia que le pone fin al juicio, debiendo adoptar en ella todas las medidas legales previstas en los artículos 77, 78 y 79 del Código Penal. También advertirá en la sentencia que la suspensión condicional de la pena será revocada en los casos previstos en el artículo 80 del Código Penal, incluida la declaración de que trata el último párrafo de dicho artículo.

Artículo 54. Se modifica el artículo 2402 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2402 El tribunal del conocimiento, al hacer uso de la facultad de conmutación por días multa o servicio comunitario supervisado, cuando a un delincuente no reincidente le ha impuesto pena de prisión que no exceda de tres años, así lo hará constar en la sentencia final, debiendo fijar el monto de la pena de los días multas, con sujeción a las condiciones económicas del condenado. El fallo respectivo debe estar debidamente motivado aun cuando no lo conceda.

Artículo 55. Se modifica el artículo 2412 del Código Judicial para que quede así.

Artículo 2412. En toda sentencia se computará como parte cumplida de la sanción que se aplique al imputado, el tiempo que haya estado detenido por ese delito

90

Cuando el imputado ha estado sometido a las medidas cautelares restrictivas de la libertad personal previstas en los literales b y c del artículo 2127 de este Código, en la sentencia se le computará cada cinco días de medida cautelar cumplida por un día de prisión

Artículo 56 Se modifica el artículo 2526 del Código Judicial para que quede así:

Artículo 2526. El imputado o su defensor podrán solicitar que el proceso se sustancie y decida en la audiencia preeliminar, cuando la investigación esté completa y la prueba resulte evidente

La solicitud podrá ser presentada en el acto de audiencia preeliminar, antes del inicio de la fase de alegatos.

Las partes podrán presentar en el acto, testigos con el objeto de ser repreguntados o aquellos que, habiendo sido aducidos durante el sumario, no hubieran podido recurrir a rendir declaración por causa previamente comprobada en el expediente. También podrán solicitar la recepción de testimonios que considere conducentes el juez, siempre y cuando se encuentren presentes en el acto para evacuar la práctica probatoria.

La decisión que tome el juez en cuanto a las pruebas en dicho acto no admite recurso alguno

El juez podrá dictar la sentencia una vez concluidos los alegatos y el anuncio de la decisión tendrá efecto de notificación a las partes.

Artículo 57. Se modifica el artículo 2529 del Código Judicial para que quede así.

Artículo 2529. Concluida la audiencia, el Juez dictará sentencia según lo preceptuado en el capítulo I, Título VI del Libro III de este código, pero los términos allí previstos se reducirán a la mitad.

En los casos sometidos al proceso abreviado, si el tribunal impusiere pena de prisión, esta será disminuida entre una sexta a una tercera parte, luego de considerar todas las circunstancias del hecho punible.

Artículo 58. Se modifica el artículo 2530 del Código Judicial para que quede así.

Artículo 2530. Cuando el imputado sea sorprendido en flagrante delito, esté detenido preventivamente o sujeto a otra medida cautelar personal y exista al menos confesión de su parte, el funcionario de instrucción remitirá inmediatamente el expediente con la vista fiscal, solicitando el proceso directo

En los casos que se sigan mediante el proceso directo la pena será disminuida entre una sexta parte y una tercera parte luego de considerar todas las circunstancias del hecho punible.

Tanto el imputado como su defensor podrán solicitar este procedimiento.

Artículo 59: Se reforma el artículo 2532 para que quede así.

91

Artículo 2532

La solicitud acompañada del sumario y de las demás piezas procesales, se presentará al juez quien determinará si se trata de situación de flagrancia y si existe confesión en cuyo caso dictará inmediatamente el auto de enjuiciamiento.

Artículo 60. Se modifica el artículo 23 de la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986, tal como fue modificado por la Ley 13 del 27 de julio de 1984, para que quede así

Artículo 23. Las medidas cautelares en los delitos relacionados con drogas serán aplicadas por el Agente Instructor o el Tribunal Competente, las cuales no serán consultadas, ni apeladas si son sustituidas por el Tribunal de la causa.

Capítulo IV

Disposiciones Finales

Artículo 61: En las disposiciones al Código Judicial, donde dice Fiscal o Fiscales Delegados, debe entenderse Fiscal o Fiscales anticorrupción, respectivamente

Artículo 62. Esta Ley empezará a regir desde su promulgación.

Comuníquese y Cúmplase.

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, Hoy de de 2005, por el
Suscrito

92

Anexo No. 4

PROYECTO DE LEY SOBRE PROCESO DISCIPLINARIO POR FALTAS ÉTICO
DISCIPLINARIAS

PROYECTO DE LEY No.

DE DE DE 2005

Por el cual se establece el Proceso Ético Disciplinario contra los Funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público.

LA ASAMBLEA NACIONAL

DECRETA:

ARTÍCULO 1: Se modifica la denominación del Título XII del Libro Primero del Código Judicial, Así:

TÍTULO XII: DE LOS PROCESOS CONTRA FUNCIONARIOS DEL ÓRGANO JUDICIAL Y DEL MINISTERIO PÚBLICO POR FALTAS ÉTICO - DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO 2: Se modifica la denominación del Capítulo I, del Título XII del Libro I del Código Judicial, Así:

CAPÍTULO 1. DE LOS PROCESOS POR FALTAS ÉTICO – DISCIPLINARIAS.

ARTÍCULO 3. Se modifica el Artículo 286 del Código Judicial, Así.

ARTÍCULO 286: De las causas constitutivas de las faltas ético – disciplinarias.

A. Faltas Leves:

- 1 Dirigir a los Órganos del Estado, a los funcionarios públicos o a las entidades oficiales o particulares, felicitaciones o censuras por sus actos;
2. Censurar injustificadamente, por escrito o verbalmente, la conducta oficial de otros Jueces o Magistrados o Agentes del Ministerio Público,

93

3. Sugerir o solicitar a Magistrados, Jueces, Fiscales o Personeros el nombramiento de una determinada persona;
4. Tomar parte en reuniones, manifestaciones o en cualquier acto de carácter político que no sea depositar su voto en los comicios electorales o cualesquiera consultas o plebiscitos populares de carácter oficial

B Faltas Graves:

- 5 Faltar el respeto, ya sea de palabra, por escrito o de obra, a los superiores en el orden jerárquico;
6. Al no ejercer sus facultades de dirección de conformidad con los deberes que le corresponden,
7. Introducir o portar armas de cualquier naturaleza durante las horas de trabajo, salvo que el funcionario cuente con la autorización para ello;
- 8: Dar a las partes o terceras personas, opiniones, consejos, indicaciones o información confidencial en relación con asuntos pendientes en sus despachos, que sean o puedan ser motivo de controversia;
9. Sugerir a Magistrados, Jueces, Fiscales o Personeros la decisión de negocios pendientes en juicios o en causas criminales;
- 10 Nombrar o contribuir al nombramiento de su cónyuge o de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de sus convivientes o parientes de sus convivientes dentro de los grados de consanguinidad indicados, para cualquier cargo judicial o de auxiliar de la jurisdicción,
- 11 Escoger a los curadores, síndicos, depositarios, peritos y otras personas que deban intervenir como auxiliares de la administración de justicia, mediando nepotismo y favoritismo;
12. Conceder entrevistas privadas a puerta cerrada y en esa forma oír argumentos o admita comunicaciones destinadas a influir en su actuación judicial;
13. Retrazar injustificadamente la tramitación de los asuntos que conozcan y se comprobare el cargo;
14. Nombrar funcionarios judiciales o de instrucción en los cargos de partidores, depositarios de bienes o en cualquier otro cargo que sean materia de procedimiento judicial o administrativo;

15. Desempeñar los cargos de partidores, depositarios de bienes que sean materia de procedimiento judicial o administrativo o cualquier otro cargo, cuando dicho

94

nombramiento le corresponda a los despachos judiciales o de instrucción o a las partes en el proceso,

16. Al no colaborar con la labor de Auditoría Judicial o de Instrucción o proporcionar información falsa;

17. Retardar, omitir o rehúsar injustificadamente actos propios de su cargo o instrucciones impartidas por sus superiores jerárquicos, siempre que éstas no violen las leyes;

18. Utilizar el tiempo y recursos del Estado en beneficio propio.

C. Faltas Gravísimas:

19. Faltar al despacho tres días o más en un mes, o más de un lunes en el mismo lapso, sin causa justificada;

20. Ejecutar actos de irrespeto, abuso de autoridad, de violencia o coacción contra subalternos, compañeros de trabajos u otras personas o incitar a cometerlos;

21. Revelar a terceros o medios de comunicación, sin autorización expresa, información que emane de los asuntos jurídicos que se ventilan en la Institución, así como de la información administrativa de carácter restringido;

22. Marcar la tarjeta de tiempo de otro empleado al iniciar o terminar la jornada de trabajo;

23 Utilizar en provecho propio, para fines de especulación, los informes que lleguen hasta él por razón de sus funciones;

24 Ejercer por si o por interpuesta persona la abogacía, el comercio o cualquier otro cargo o actividad, aunque no sea retribuido a excepción de la docencia universitaria, misma que estará sujeta a la evaluación del desempeño;

25. Aceptar regalos o favores de los litigantes que estén ejerciendo ante su Tribunal o de cualquiera persona cuyos intereses puedan ser afectados en sus fallos;

26. Retirar de las dependencias del Órgano Judicial o del Ministerio Público documentos, materiales y/o equipo de trabajo; sin previa autorización escrita del Superior Jerárquico;

27. Portar o usar injustificadamente sustancias ilícitas que produzcan dependencia física o psíquicas, o asistan en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes,

95

28. Ocasionar culposamente daños o pérdidas de bienes, expedientes o documentos que hayan llegado a su poder en razón de sus funciones;

29 Violar la ley por ignorancia inexcusable.

ARTÍCULO 4º Se modifica el Artículo 287 del Código Judicial, Así:

ARTÍCULO 287 Los procedimientos ético – disciplinarios podrán ser promovidos individualmente por los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados de los Tribunales Superiores, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los Fiscales Superiores, los Jueces de Circuito, los Fiscales de Circuito, los Jueces Municipales, los Personeros Municipales y cualquier particular.

En el caso de funcionarios administrativos que no estén adscritos a Despachos Judiciales o de instrucción este procedimiento serán promovidos también por su supervisor administrativo o jefe funcional.

ARTÍCULO 5: Se modifica el Artículo 288 del Código Judicial, Así

ARTÍCULO 288: Los funcionarios mencionados en el artículo anterior deberán promover el procedimiento ético – disciplinario en los siguientes supuestos:

1. Por cualquier información relevante llegada a su conocimiento, debiendo constar la procedencia de la información,
2. Por queja presentada por cualquiera persona ante el Tribunal de Turno y ,
3. Cuando por escrito se lo ordenen sus superiores en el orden jerárquico

ARTÍCULO 6: Se modifica el Artículo 289 del Código Judicial, Así:

ARTÍCULO 289: La potestad sancionadora en los procedimientos éticos - disciplinarios será ejercida por el respectivo superior jerárquico o el supervisor administrativo o jefe funcional en el caso de funcionarios administrativos que no estén adscritos a despachos judiciales o de instrucción.

En todos los casos la instrucción quedará a cargo del Consejo de Administración de Carrera Judicial o su similar en el Ministerio Público.

ARTÍCULO 7: Se modifica el Artículo 290 del Código Judicial, Así:

ARTÍCULO 290: El procedimiento consistirá en:

1. El superior jerárquico de turno cuando proceda o el supervisor administrativo o jefe funcional recibirá los antecedentes o el libreto de queja,

96

2. En el caso de tratarse de una queja, luego del reparto correspondiente, se citará al particular que se ratifique de ésta bajo la gravedad del juramento, dentro de un término que no podrá ser menor de cinco días ni mayor de veinte días;
3. La resolución mediante la cual se concede el término para que comparezca a ratificarse de la queja el particular, se notificará mediante edicto que será fijado en los estrados del Tribunal correspondiente;
4. En caso de que el particular no comparezca a ratificarse de la queja dentro del término que se le concedió para este fin, se ordenará el archivo de la misma;
5. Luego de ratificada la queja o tratándose de un procedimiento ético – disciplinario iniciado de oficio se dará vista de los antecedentes por cinco días al funcionario contra quien se proceda;
6. El superior jerárquico, supervisor administrativo o jefe funcional remitirá los antecedentes o el expediente de la queja al conocimiento del Consejo de Administración de Carrera Judicial o su similar en el Ministerio Público;
7. Este Consejo o su similar en el Ministerio Público emitirá una resolución admitiendo las pruebas conducentes que se hubiesen presentado a favor del acusado o en su contra cuando alguien quiera hacerlo, y en la misma resolución establecerá las fechas para la evaluación de las pruebas admitidas;
8. Se señalará un término no menor de tres días ni mayor de quince para la práctica de las mismas y la fechas correspondientes serán notificadas por conducto del despacho u oficina correspondiente,
9. El Consejo de Administración de Carrera Judicial o su similar en el Ministerio Público estará facultado para procurar de oficio las pruebas para demostrar o descartar la existencia de la falta imputada;
10. Una vez completada la investigación el funcionario instructor remitirá las actuaciones al Despacho que ejerza la potestad sancionadora, acompañado de un informe que incluirá las recomendaciones pertinentes;
- 11 El funcionario que ejerce la potestad sancionadora contará con un plazo de tres meses para resolver la causa, imponiendo la sanción disciplinaria que corresponda o

declarando que no habrá lugar a ello, o para poner en circulación el proyecto correspondiente en los casos de organismos colegiados. En este último caso la decisión no deberá exceder de un mes adicional.

12. Cuando el proceso es promovido por queja, podrá terminar y archivarse en cualquier momento, por desistimiento del promotor.

ARTÍCULO 8 Se modifica el Artículo 291 del Código Judicial, Así:

97

ARTÍCULO 291: Lo decidido será en todo caso apelable por el funcionario afectado, ante el Superior del que decidió la causa disciplinaria, recurso éste que será concedido en el efecto devolutivo.

El funcionario afectado podrá interponer el recurso de apelación en contra de la resolución que le impone una sanción disciplinaria, en el acto de la notificación o dentro del término de dos días siguientes al día en que se notifique de la decisión.

Interpuesto el recurso de apelación, el funcionario afectado deberá sustentarlo dentro del término de cinco días siguientes al día en que promovió dicho medio de impugnación.

En caso de que el recurso de apelación no fuere sustentado, éste será declarado desierto.

Cuando el recurso de apelación fuere sustentado, será concedido y se remitirá los autos al Superior, dejándose copia autenticada de la actuación en el despacho del funcionario que impuso la corrección o sanción disciplinaria.

El funcionario u organismo colegiado que sea competente para conocer de la apelación interpuesta en contra de la resolución que impone una sanción o corrección disciplinaria, deberá resolverla dentro del término de treinta (30) días.

ARTÍCULO 9 Se modifica el Artículo 292 del Código Judicial, Así:

ARTÍCULO 292. A los Jueces y Magistrados, funcionarios judiciales subalternos, funcionarios administrativos no adscritos a despachos judiciales, Agentes del Ministerio Público, funcionarios subalternos de las agencias de instrucción y funcionarios administrativos del Ministerio Público, en caso de que se comprobare el cargo imputado, se les aplicará las siguientes sanciones correccionales de conformidad con la gravedad de la falta así.

Sanciones para Faltas Leves:

1. Amonestación;

2. Multa no menor de veinticinco balboas (B/ 25.00) ni mayor de quinientos balboas (B/.500.00).

Sanción para Faltas Graves:

1. Suspensión del cargo y privación de sueldo por lapso no mayor de treinta días; y

Sanción para Faltas Gravísimas.

1. Destitución.

Tres faltas leves hacen una grave y dos faltas graves hacen una gravísima.

98

ARTÍCULO 10. Se elimina el Artículo 293 del Código Judicial.

ARTÍCULO 11: Se modifica el Artículo 294 del Código Judicial, Así:

ARTÍCULO 294: Cuando la sanción que se le impusiere al funcionario fuere la multa, se comunicará a la oficina pagadora para que la haga efectiva.

En caso de que la sanción que se impusiese fuese la suspensión del cargo y privación del sueldo, se comunicará al suplente que debe reemplazar al sancionado y a la oficina pagadora respectiva.

Cuando el funcionario fuere destituido, esta sanción se le comunicará a la oficina pagadora.

respectiva.

Esta comunicación sólo se hará cuando el fallo está ejecutoriado.

ARTÍCULO 12: Se modifica el Artículo 295 del Código Judicial, Así:

ARTÍCULO 295: La acción para solicitar que se le imponga una sanción disciplinaria a un funcionario, prescribirá en el término de un año contado a partir de la fecha en que la alegada falta disciplinaria fue cometida

El término de prescripción se interrumpe con la presentación de la queja o con el envío de los antecedentes a Auditoria Judicial, cuando el procedimiento disciplinario se promueve de oficio

La prescripción no podrá ser reconocida de oficio, y por lo tanto, el funcionario acusado deberá alegarla ante la autoridad que por ley le corresponde decidir la causa disciplinaria

ARTÍCULO 13: Se modifica el Artículo 296 del Código Judicial, Así:

ARTÍCULO 296. Cuando se trate de unidades nominadoras que excedan de cinco personas, la conformación del Tribunal que deberá pronunciarse sobre la falta alegada, se regirá a nivel circuital de conformidad con las disposiciones previstas en el Capítulo III del Título V del Libro I, del Código Judicial

Cuando se tratare de un Juez Municipal o de un subalterno que conoce de casos correspondientes a dos jurisdicciones, el procedimiento disciplinario será resuelto por un Tribunal integrado por los Superiores de la Jurisdicción donde se origina la queja o la investigación de conformidad con las reglas establecidas en el párrafo anterior. Si la investigación o al queja no guardan relación directa con la tramitación de una causa en particular, el negocio será repartido de manera alterna entre los jueces que componen cada una de las jurisdicciones de la autoridad nominadora.

99

ARTÍCULO 14: Cuando las faltas graves y gravísimas sean ejecutadas por Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a lo que establece el artículo 160 de la Constitución Política, le corresponderá juzgarlas a la Asamblea Nacional y aplicar las sanciones que establece el Código Judicial.

ARTÍCULO 15: Se eliminará el Artículo 297, 298, 299 y 300 del Código Judicial

ARTÍCULO 16: Esta ley modifica la denominación del Título XII, del Libro I, del Código Judicial modifica el Capítulo I, Título II, Libro I, los artículos 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 296 y elimina el artículo 293 del Código Judicial.

ARTÍCULO 17 Esta ley entra a regir a partir de su promulgación.

Comuníquese y Cúmplase:

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, Hoy de de 2005, por el
Suscrito

100

Anexo No. 5

PROYECTO DE LEY DE REFORMA A LA CARRERA JUDICIAL

PROYECTO DE LEY _
DE DE DE 2005

Por el cual se instituye el Sistema de Carrera Judicial.

La Asamblea Nacional

Decreta:

ARTÍCULO 1. Se modifica el Artículo 270 del Código Judicial, para que quede Así

ARTÍCULO 270. La Carrera Judicial es un sistema científico de selección y administración

del personal que ingresa al Órgano Judicial. Dicha carrera se basa en los méritos, títulos y antecedentes del aspirante para ocupar el respectivo cargo, de conformidad a los requisitos establecidos por la Ley y los procedimientos señalados en los reglamentos y en los manuales a que se refiere el artículo 306 de la Constitución Nacional.

No forman parte de la Carrera Judicial los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración y el personal de Secretaría y de servicio inmediatamente adscrito a los servidores públicos que no formen parte de la Carrera Judicial, que incluye Escribientes, Asistentes, Conductores, Agentes de Seguridad, Citadores y Porteros. Estos funcionarios subalternos serán de libre nombramiento y remoción del titular del Despacho, pero tendrán los demás derechos, obligaciones y prohibiciones que las leyes del ramo les asignan a los otros funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público.

ARTÍCULO 2º. Se adiciona el Artículo 270 A al Código Judicial, así:

ARTÍCULO 270 A: La Carrera Judicial es un factor determinante de la independencia judicial, y se basa en la idoneidad, capacidad, probidad e igualdad de oportunidades para estimular el ingreso de los más aptos.

En consecuencia, todos están obligados a respetar la independencia de los cargos judiciales en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

101

Los que en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales se consideraren presionados o perturbados en su independencia, lo pondrán en conocimiento del Consejo de Administración de la Carrera Judicial.

El Consejo promoverá las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial.

ARTÍCULO 3º. Se adiciona el Artículo 270 B al Código Judicial, así:

ARTÍCULO 270 B. La Carrera Judicial se fundamenta en los siguientes principios:

1. Estabilidad e inamovilidad de los funcionarios de carrera en el empleo, condicionada a la conducta y cumplimiento de sus deberes, de acuerdo a los parámetros establecidos en el sistema de evaluación del desempeño.
2. Igualdad de oportunidades para las personas que aspiran ingresar a la Institución.
3. Procedimiento de reclutamiento y selección con base en sistemas de reconocida transparencia y profesionalismo.
4. Igualdad de oportunidades de todos los funcionarios de carrera para ser promovidos y trasladados en su beneficio dentro del Órgano Judicial, condicionada al cumplimiento de los requisitos de educación y experiencia, idoneidad, mérito y eficiencia en la prestación del servicio.
5. Evaluación periódica del desempeño.
6. Igualdad de remuneración por igual trabajo prestado en idénticas condiciones y niveles de responsabilidad.
7. Formación tanto a los nuevos integrantes como a los ya vinculados para fortalecer sus competencias y capacidad de desempeño.
8. Sistemas de promoción.
9. Excelencia profesional del servicio de justicia, con acceso a becas, licencias por estudios y capacitación permanente del personal de carrera.

ARTÍCULO 4º. Se adiciona el Artículo 270 C al Código Judicial, así:

ARTÍCULO 270 C. Las normas sobre la Carrera Judicial regularán todo lo relacionado con.

1. Clasificación de cargos

2. Selección de personal
3. Evaluación del desempeño
4. Remuneración e incentivos
5. Asistencia y puntualidad
6. Licencias y vacaciones
7. Régimen disciplinario
8. Acciones y recursos
9. Capacitación

102

ARTÍCULO 5: Se adiciona el Artículo 270 D al Código Judicial, así:

ARTÍCULO 270 D: Para ingresar a la Carrera Judicial se requiere:

1. Ser de nacionalidad panameña y estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos
2. Reunir los requisitos mínimos de idoneidad, educación, edad y experiencia que se exigen para desempeñar el cargo, en la Ley y el Manual Descriptivo de Clasificación de Cargos, según el caso.
3. No tener incompatibilidad para el ejercicio del cargo, a tenor de lo dispuesto en el Código Judicial.
4. Haber aprobado satisfactoriamente los exámenes, pruebas y demás requisitos de ingreso exigidos.
5. Haber cumplido satisfactoriamente el periodo de prueba
6. Ser nombrado funcionario permanente en un cargo incluido dentro del régimen de Carrera

ARTÍCULO 6: Se adiciona el Artículo 270 E al Código Judicial, así:

ARTÍCULO 270 E: Las unidades que tendrán responsabilidad en la administración de la Carrera Judicial son.

1. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia
2. La Sala Cuarta de Negocios Generales
3. El Consejo de Administración de Carrera Judicial
4. La Escuela Judicial

El Consejo de Administración de la Carrera Judicial y La Escuela Judicial tendrán sus propios reglamentos, que deberán ser aprobados por Acuerdo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

ARTÍCULO 7: Se adiciona el Artículo 270 F al Código Judicial, así:

ARTÍCULO 270 F: El Consejo de Administración de Carrera Judicial tendrá jurisdicción en el ámbito nacional, para la administración de la Carrera Judicial que estará integrado por un principal y un suplente, así:

1. Un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia
2. Un Magistrado de los Tribunales Superiores
3. Un Juez de Circuito
4. Un Juez Municipal
5. Un Defensor de Oficio

103

6. Un Representante de las Asociaciones de Funcionarios Judiciales reconocidas en el Órgano Judicial

Cuando el Consejo de Administración de la Carrera Judicial deba abordar temas que se relacionen con los Secretarios y Demás Personal Subalterno o con Funcionarios de Apoyo Administrativo, se integrará igualmente de un representante de este colectivo.

Los integrantes del Consejo serán escogidos por mayoría de votos entre sus pares, brindarán servicios por un período de dos (2) años y no tendrán derecho a reelección en el período inmediatamente siguiente.

El representante de las Asociaciones de Funcionarios Judiciales será escogido de acuerdo a sus reglamentos.

ARTÍCULO 8: Se adiciona el Artículo 270 G al Código Judicial, así:

ARTÍCULO 270 G: Son funciones del Consejo de Administración de Carrera Judicial.

- 1 Administrar el sistema de Carrera Judicial, procurando condiciones de acceso a los aspirantes a través de un proceso transparente, que genere personal idóneo y honesto y garantice el respeto, decoro e independencia de los operadores de justicia, regido por el principio de igualdad de oportunidades
2. Interpretar y Aplicar las normas y procedimientos del sistema de Carrera Judicial.
3. Elaborar el Manual de Descripción de Cargos
4. Aprobar los cursos de formación inicial y pruebas de conocimiento que elabore la Escuela Judicial
5. Servir como medio de consulta en las controversias que se susciten con relación a la aplicación del presente Reglamento.
- 6 Atender aquellos asuntos que somete a su consideración la autoridad máxima de cada Institución
7. Nombrar a los integrantes de la Comisiones de Evaluación para el ingreso en el Órgano Judicial
8. Preservar la independencia de los cargos del Órgano Judicial y especialmente la de los jueces y magistrados, en el ejercicio de sus funciones judiciales
9. Evaluar el desempeño de los funcionarios del Órgano Judicial
10. Recomendar al Pleno de la Corte Suprema de Justicia las reformas o modificaciones, que requiera el Reglamento de Carrera Judicial, así como la aprobación de otros reglamentos relacionados con el mismo.

ARTÍCULO 9: Se adiciona el Artículo 270 H al Código Judicial, así:

104

ARTÍCULO 270 H: El Consejo de Administración de Carrera Judicial tendrá un Secretario Ejecutivo nombrado por este organismo de acuerdo a los procedimientos de carrera judicial,

a quien jerárquicamente responderá.

Este Secretario Ejecutivo deberá poseer los mismos requisitos que para ser Juez de Circuito.

ARTÍCULO 10: Se adiciona el Artículo 270 I al Código Judicial, así:

ARTÍCULO 270 I: El Consejo de Administración de Carrera Judicial tendrá a su cargo los departamentos de asesoramiento y asistencia técnica, encargados de aplicar el sistema de carrera judicial, ellos son:

1. Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal.
2. Departamento de Valoración y Evaluación del Desempeño
3. Departamento de Clasificación de Cargos.

Los encargados de los departamentos serán elegidos por el Consejo de Administración de la Carrera Judicial, de conformidad a las normas sobre carrera judicial y deberán reunir los requisitos consignados en el Manual de Descripción de Cargos.

ARTÍCULO 11 Se modifica la denominación del Capítulo I, del Título XII del Libro Primero del Código Judicial, así:

CAPÍTULO I

DEL ACCESO Y PROMOCIÓN EN EL ÓRGANO JUDICIAL

ARTÍCULO 12: Se modifica el Artículo 271 del Código Judicial, así

Artículo 271 El ingreso en el Órgano Judicial por la categoría de Juez Municipal requerirá la superación de las pruebas previstas en el Reglamento de Carrera Judicial, a las que podrán presentarse todos los aspirantes que reúnan los requisitos fijados para el cargo en la Ley y el Reglamento.

El Consejo de Administración de la Carrera Judicial nombrará las Comisiones que evalúen las indicadas pruebas de ingreso en el Órgano Judicial por la categoría de Juez Municipal, en la forma en que se determine en el Reglamento.

Una vez concluidos los ejercicios, cada Comisión de Evaluación remitirá la lista de aspirantes al Consejo de Administración de la Carrera Judicial ordenada de mayor a menor puntuación

El Consejo de Administración de la Carrera Judicial formará las ternas con los aspirantes de mejor puntuación, quienes serán sometidos a las pruebas psicológicas donde se determinará

105 únicamente la idoneidad de los aspirantes para el ejercicio del cargo en ese aspecto. Si alguno de los aspirantes no fuera declarado idóneo, se completarán las ternas con los inmediatamente siguientes en el orden de puntuación.

Obtenidos los resultados el Consejo de Administración de la Carrera Judicial emitirá resolución en que determine quiénes son los candidatos de mejor puntuación y remitirá copia autenticada de esta a la autoridad nominadora

La unidad nominadora, previa entrevista de todos los propuestos, podrá nombrar a cualquiera de los tres candidatos, pero si no eligiera al que hubiera obtenido mejor puntuación, deberá motivar debidamente su decisión.

Nombrados los candidatos llevarán a cabo un curso de capacitación inicial diseñado conjuntamente por el Consejo de Administración de la Carrera Judicial y la Escuela Judicial.

ARTÍCULO 13: Se subroga el Artículo 272 del Código Judicial, así:

Artículo 272: Para ocupar los cargos de Jueces de Circuito o Seccionales se procederá por la vía del ascenso, tomando en cuenta, en primer lugar, al funcionario de la categoría inmediatamente inferior de mayor antigüedad dentro de la especialidad y la mejor hoja de servicios, siempre que reúna los requisitos exigidos por la ley para desempeñar el cargo superior

Si hubiere una segunda vacante, se ocupará por el funcionario de la categoría inmediatamente inferior de mayor antigüedad dentro de la especialidad y la mejor hoja de servicios, que haya ingresado en el Órgano Judicial por el procedimiento establecido en el artículo anterior, siempre que reúna los requisitos exigidos por la ley para desempeñar el cargo superior

El Consejo de Administración de la Carrera Judicial remitirá a la autoridad nominadora la copia autenticada de la resolución emitida en que se recomienda a los tres (3) aspirantes con mejor derecho al ascenso

La unidad nominadora, previa entrevista de todos los propuestos, podrá nombrar a cualquiera de los tres candidatos, pero si no eligiera al que hubiera obtenido mejor puntuación, deberá motivar debidamente su decisión.

ARTÍCULO 14. Se subroga el Artículo 273 del Código Judicial, así:

Artículo 273: Para ocupar los cargos de Magistrado de Tribunal Superior se seguirán las

siguientes reglas:

1. Cuando se presente la primera vacante a nivel nacional, se procederá por la vía de ascenso, tomando en cuenta, en primer lugar, al funcionario de la categoría

106

inmediatamente inferior de mayor antigüedad dentro de la especialidad y la mejor hoja de servicios, siempre que reúna los requisitos exigidos por la ley para desempeñar el cargo superior.

El Consejo de Administración de la Carrera Judicial remitirá a la autoridad nominadora copia autenticada de la resolución emitida en que se recomienda a los tres (3) aspirantes con mejor derecho al ascenso

La unidad nominadora, previa entrevista de todos los propuestos, podrá nombrar a cualquiera de los tres candidatos, pero si no eligiera al que hubiera obtenido mejor puntuación, deberá motivar debidamente su decisión. Y,

2 Si hubiere una segunda vacante, ésta se someterá a concurso entre juristas de reconocido prestigio en la especialidad del cargo, que reúnan los requisitos que establece la ley y el Reglamento.

A estos efectos, el Consejo de Administración de la Carrera Judicial nombrará las Comisiones que evalúen las pruebas de ingreso en el Órgano Judicial por la categoría Magistrado de Tribunal Superior. Cada una de las indicadas Comisiones estará integrada por un magistrado del la Corte Suprema, quien la presidirá, dos magistrados de tribunales superiores, un Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá de la disciplina jurídica relacionada con la plaza convocada, y un abogado con más de 10 años de ejercicio profesional.

El Consejo de Administración de la Carrera Judicial emitirá la resolución en donde determine quiénes son los candidatos aspirantes de mejor puntuación, quienes serán sometidos a las pruebas psicológicas donde se determinará únicamente la idoneidad de los aspirantes para el ejercicio del cargo en ese aspecto. Si alguno de los aspirantes no fuera declarado idóneo, se completarán las ternas con los inmediatamente siguientes en el orden de puntuación.

Obtenidos los resultados el Consejo de Administración de la Carrera Judicial emitirá la resolución donde determine quiénes son los candidatos de mejor puntuación y remitirá copia de esta a la autoridad nominadora

La unidad nominadora, previa entrevista de todos los propuestos, podrá nombrar a cualquiera de los tres candidatos, pero si no eligiera al que hubiera obtenido mejor puntuación, deberá motivar debidamente su decisión.

Las mismas reglas se observarán para llenar las vacantes siguientes Si se declarare desierto el procedimiento de selección

ARTÍCULO 15· Se adiciona el Artículo 273 A al Código Judicial, así:

107

ARTÍCULO 273 A: Para ocupar las vacantes que se originen en el Instituto de Defensoría de Oficio y las que se den a nivel de los Secretarios y demás personal subalterno en el Órgano Judicial, se seguirán las siguientes reglas:

1. Cuando se presente la primera vacante a nivel nacional, se procederá por la vía de ascenso, tomando en cuenta, en primer lugar, al funcionario de la categoría inmediatamente inferior de mayor antigüedad dentro de la especialidad y la mejor hoja de servicios, siempre que reúna los requisitos exigidos por la ley para desempeñar el cargo superior; y

2. Si hubiere una segunda vacante, ésta se someterá a concurso entre los que trabajan en la institución y los aspirantes externos al Órgano Judicial, siempre que en ambos casos, reúnan los requisitos que fije la ley y el reglamento y, de haberse previsto, hayan superado los exámenes o pruebas establecidos al efecto.

3 Las mismas reglas se observarán para llenar las vacantes siguientes.

El nombramiento de los funcionarios indicados en este artículo se llevará a cabo en la forma prevista en el Reglamento de Carrera Judicial.

A tales efectos, el Consejo de Administración de Carrera Judicial enviará a la unidad nominadora copia autenticada de la resolución emitida en que se recomienda a los tres (3) aspirantes con mejor puntuación.

La unidad nominadora, previa entrevista de todos los propuestos, podrá nombrar a cualquiera de los tres (3) candidatos, pero si no eligiera al que hubiera obtenido mejor puntuación, deberá motivar debidamente su decisión.

ARTÍCULO 16· Se adiciona el Artículo 273 B al Código Judicial, así:

ARTÍCULO 273 B Las vacantes que se originen en las áreas de apoyo administrativo y demás personal no contemplado en el artículo precedente, se someterán a concurso entre los que trabajan en la institución y los aspirantes externos al Órgano Judicial, siempre que en ambos casos, reúnan los requisitos que fije la ley y el reglamento y, de haberse previsto, hayan superado los exámenes o pruebas establecidos al efecto.

El nombramiento de los funcionarios indicados en este artículo se llevará a cabo en la forma prevista en el Reglamento de Carrera Judicial.

A tales efectos, el Consejo de Administración de Carrera Judicial enviará a la unidad nominadora copia autenticada de la resolución emitida en que se recomienda a los tres (3) aspirantes con mejor puntuación.

La unidad nominadora, previa entrevista de todos los propuestos, podrá nombrar a cualquiera de los tres (3) candidatos, pero si no eligiera al que hubiera obtenido mejor puntuación, deberá motivar debidamente su decisión

108

ARTÍCULO 17· Se modifica el Artículo 275 del Código Judicial, así:

ARTÍCULO 275· Los suplentes de los Magistrados de los Tribunales Superiores y de los Jueces, ya sean estos de Circuitos o Municipales, serán escogidos por concurso de conformidad a las normas y reglamentos de carrera judicial, pero no pertenecerán a ésta.

ARTÍCULO 18. Se modifica el Artículo 278 del Código Judicial, así.

ARTÍCULO 278. El escalafón comprende las categorías que van de Jueces Municipales a Magistrados de Distrito Judicial.

ARTÍCULO 19: Se modifica el Artículo 283 del Código Judicial, así:

ARTÍCULO 283. Con excepción de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los Jueces Municipales los Magistrados y los Jueces podrán ser trasladados a puestos de igual categoría por cualquiera de las causas siguientes:

- a. Por manifiesta enemistad con uno o más de los Magistrados o entre Jueces que integran un Tribunal de Apelaciones y Consultas;
- b. Cuando en la sede del Tribunal en que ejercen sus cargos actúen permanentemente como abogados, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del Magistrado o Juez y no hubiere más que un tribunal o un juzgado, ya sea de lo Civil o de lo Penal

Los literales anteriores son aplicables a los Agentes del Ministerio Público en lo que les corresponda

Después de acordado el traslado de un Magistrado, Juez o agente del Ministerio Público, éste se llevará a cabo apenas surja la posibilidad de hacerlo, ya sea por vacante que se produzca o por darse la situación contemplada en el párrafo primero de este artículo

ARTÍCULO 20 Se modifica el Artículo 285 del Código Judicial, así:

ARTÍCULO 285 Corresponde al tribunal o Juez que hizo el nombramiento recibir las renunciaciones y aceptarlas. Una vez aceptadas, debe comunicársele al Consejo de Administración de Carrera Judicial para que abra el puesto a concurso si no fuere el caso de cubrir la vacante a base de antigüedad y mejor hoja de servicio

ARTÍCULO 21 Esta Ley modifica los artículos 270, 271, 272 y adiciona los artículos 270 A, B, C, D, E, F, G, H, I, 273 A y B, subroga el artículo 272 y 273 del Código Judicial.

ARTÍCULO 22: La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación. Comuníquese y Cúmplase

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, Hoy de de 2005,